

# **VIOLENCIA Y POLÍTICA EN VENEZUELA**

Informe sobre América Latina N°38 – 17de agosto de 2011

## TABLA DE CONTENIDO

<b>RESUMEN EJECUTIVO</b> .....	<b>i</b>
<b>I. INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>1</b>
<b>II. LAS RAÍCES DE LA VIOLENCIA</b> .....	<b>2</b>
<b>III. EL AUMENTO DE LA VIOLENCIA CON CHÁVEZ</b> .....	<b>3</b>
A. LA CRECIENTE VIOLENCIA CRIMINAL .....	3
B. EL CRIMEN ORGANIZADO INTERNACIONAL .....	7
C. VIOLENCIA POLÍTICA .....	10
<b>IV. GRUPOS ARMADOS: COMBINANDO EL CRIMEN, LA VIOLENCIA Y LA POLÍTICA</b> .....	<b>13</b>
A. GUERRILLAS COLOMBIANAS .....	13
B. FUERZAS BOLIVARIANAS DE LIBERACIÓN .....	17
C. LOS COLECTIVOS URBANOS.....	19
<b>V. DETERIORO INSTITUCIONAL</b> .....	<b>21</b>
A. IMPUNIDAD .....	22
B. LA POLICÍA .....	23
C. LAS FUERZAS ARMADAS.....	25
D. LAS MILICIAS .....	28
<b>VI. LOS RIESGOS DEL CONFLICTO</b> .....	<b>30</b>
<b>VII. CONCLUSIÓN</b> .....	<b>33</b>
<b>APPENDICES</b>	
A. MAPA DE VENEZUELA .....	34
B. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS .....	35
C. ACERCA DE INTERNATIONAL CRISIS GROUP .....	36
D. INFORMES Y BOLETINES INFORMATIVOS DE CRISIS GROUP SOBRE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DESDE 2008 .....	37
E. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE INTERNATIONAL CRISIS GROUP.....	38

## VIOLENCIA Y POLÍTICA EN VENEZUELA

### RESUMEN EJECUTIVO

Cada media hora una persona es asesinada en Venezuela. La presencia del crimen organizado junto con un número exorbitante de armas de fuego en manos de civiles, la impunidad, la corrupción y la fuerza excesiva por parte de la policía han afianzado la violencia en la sociedad. Aunque tales problemas no comenzaron con el presidente Hugo Chávez, su gobierno tiene que responder por su ambigüedad frente a varios grupos armados; su incapacidad o falta de voluntad para enfrentar la corrupción y la complicidad delictiva en sectores de las fuerzas de seguridad; su política de armar a civiles “en defensa de la revolución”, y por último, pero no menos importante, por la propia retórica incendiaria del Presidente. Medidas positivas como la interacción constructiva con Colombia al igual que algunas reformas limitadas en materia de seguridad no subsanan estas fallas. Si bien la expectativa en torno a las elecciones presidenciales de 2012 podría aplazar la explosión social, el deterioro del estado de salud del Presidente ha incrementado la incertidumbre. En cualquier caso, el grado de polarización y militarización en la sociedad probablemente minará las posibilidades tanto de una continuación no violenta del régimen actual como de una transición pacífica a una era pos-Chávez.

Una parte significativa del problema es heredada de gobiernos anteriores. En 1999, el entonces nuevo presidente Chávez se encontraba ante un país cuyas tasas de homicidios se habían triplicado en menos de dos décadas, y muchas instituciones estaban en proceso de colapsar, erosionadas por la corrupción y la impunidad. Sin embargo, estos problemas se han agravado sustancialmente durante la “Revolución bolivariana”. Actualmente, más de diez personas son asesinadas en las calles de Caracas diariamente, la mayoría a manos de delincuentes individuales, integrantes de bandas o de la misma policía. De igual manera, las tasas de secuestros y robos se han disparado. Al atribuir el problema a las “percepciones sociales de inseguridad” o a causas estructurales que provienen de administraciones anteriores, tal como el alto índice de pobreza, el Gobierno está minimizando la magnitud y el alcance destructivo de la violencia criminal. Acciones específicas como el despliegue masivo de fuerzas de seguridad en operativos altamente visibles, la reforma policial y programas de desarme tendrán un impacto mínimo si no forman parte de una es-

trategia integral para reducir la delincuencia, poner fin a la impunidad y proteger a la ciudadanía.

La presencia en Venezuela de grupos internacionales del crimen organizado tampoco se trata de algo nuevo. Sin embargo, hay pruebas de que éstos han incrementado su actividad durante la década pasada contribuyendo no sólo al aumento en las tasas de homicidios, secuestros y extorsiones, sino también al fortalecimiento del microtráfico de estupefacientes. Este último factor ha hecho que los barrios pobres y urbanos se tornen más violentos. Venezuela se ha convertido en un corredor principal del narcotráfico en el que diversos grupos, como las guerrillas colombianas, los paramilitares y sus sucesores, se han unido a organizaciones mexicanas y de otros lugares para beneficiarse de la corrupción generalizada y de la complicidad por parte de las fuerzas de seguridad. Estas conductas parecieran ser toleradas por parte de individuos en las esferas más altas del Gobierno.

El Gobierno ha demostrado una ambigüedad particular frente a grupos armados no estatales que simpatizan con su proyecto político. Los “colectivos” urbanos combinan actividades políticas con actividades delictivas, incluyendo acciones armadas contra opositores del Gobierno, operan en gran medida sin restricción y gozan de una amplia impunidad. Las Fuerzas Bolivarianas de Liberación han establecido el control sobre zonas fronterizas con Colombia, mientras que las guerrillas colombianas de las FARC y el ELN han encontrado refugio y apoyo en suelo venezolano durante mucho tiempo. En el contexto de los acercamientos entre los presidentes Chávez y Santos, parece haber cambiado la relación costo-beneficio derivada de la alianza tácita entre las guerrillas colombianas y el Gobierno venezolano. Sin embargo, aún es demasiado temprano para saber si el régimen está dispuesto y es capaz de lograr que los compromisos adquiridos y algunos pasos iniciales se materialicen en acciones eficaces y sostenibles contra tales grupos.

La violencia y la corrupción han sido alimentadas por un proceso continuo de erosión institucional que se ha vuelto particularmente evidente en el sistema de justicia y en las fuerzas de seguridad. Mientras que se disparan los niveles de impunidad, una fuerza policial disfuncional y abusiva ha puesto en peligro la seguridad ciudadana. Las fuerzas

armadas, fuertemente politizadas, parecen ser cada vez más parte del problema; además de tener relaciones estrechas con el crimen organizado, son presionadas por el Presidente para comprometerse con la defensa partidaria de su “revolución”. La creación, el suministro de armas y entrenamiento de milicias progubernamentales aumentan aún más el peligro de que las diferencias políticas finalmente se resuelvan por fuera del marco constitucional, a través del uso de la fuerza.

En este entorno político candente, la violencia política se ha mantenido más como una amenaza latente que como una realidad. Sin embargo, a medida que el país se dirige hacia lo que promete ser una contienda presidencial extremadamente reñida, donde habrá mucho en juego para ambos bandos, este equilibrio frágil podría desmoronarse. Además, la incertidumbre provocada por la enfermedad del Presidente ha exacerbado las perspectivas a corto y mediano plazo. Probablemente el mayor peligro surgirá después de las elecciones, independientemente de quién gane, pues los niveles persistentes de violencia tienden a minar o bien la continuidad pacífica del régimen, la entrega del poder a un sucesor o cualquier arreglo transicional. Más aún, la amplia presencia de redes del crimen organizado constituirá una grave amenaza a la estabilidad del país en el mediano y en el largo plazo, cualquiera que sea la orientación política de un futuro gobierno. Para evitar dicha inestabilidad, es necesario que todos los sectores se comprometan con los medios constitucionales y pacíficos de resolución de conflictos y que el gobierno implemente medidas eficaces para desarmar y dismantelar estructuras delictivas, reestablecer el Estado de Derecho y erradicar la corrupción de las instituciones del Estado.

**Bogotá/Bruselas, 17 de agosto de 2011**

## VIOLENCIA Y POLÍTICA EN VENEZUELA

### I. INTRODUCCIÓN

Venezuela se ha convertido en uno de los países más violentos del mundo. En promedio, 10 personas son asesinadas diariamente en las calles de Caracas.<sup>1</sup> No obstante, el país no está inmerso en una guerra civil; tampoco se enfrenta a una insurgencia armada o a una acción militar del exterior; y, pese a la polarización extrema del panorama político nacional durante la década pasada, los asesinatos no constituyen una expresión de violencia política en primer lugar. En Venezuela, las personas son asesinadas por un teléfono celular, los niños mueren como resultado de una bala perdida de una de las millones de armas de fuego en manos de civiles, y los jóvenes son víctimas de la fuerza excesiva de la policía o de los ajustes de cuentas entre bandas en barrios pobres.

Después de casi doce años de la “Revolución bolivariana” del presidente Chávez, los crecientes problemas de seguridad amenazan a un régimen que parece no sólo incapaz sino también poco dispuesto a proteger de las influencias criminales y de la corrupción a las instituciones públicas; a luchar contra la delincuencia común y el crimen organizado, y a proteger a la población civil. Habiendo llegado al poder con la promesa de eliminar la corrupción, ahora el Presidente está bajo sospecha de tolerar la complicidad de elementos de las fuerzas de seguridad y altos mandos del partido gobernante con organizaciones criminales a cambio de lealtad, y de no actuar de manera decisiva contra los grupos armados simpatizantes de su proyecto socialista. El suministro de armas por parte del Gobierno a decenas de miles de civiles para defender la revolución obliga a preguntar hasta qué punto la violencia, o la amenaza de la misma, se ha vuelto inherente a su proyecto político.

A partir de investigaciones realizadas en Caracas, en los estados fronterizos de Zulia, Táchira y Apure, y en Bogotá, el presente informe analiza la naturaleza, alcance y raíces de la escalada de la violencia criminal en Venezuela; explica los efectos que ha tenido el deterioro continuo de las instituciones del país – que se refleja en la impunidad, la politización de las fuerzas de seguridad y la militarización de la sociedad – sobre la violencia; explora los vínculos entre la violencia creciente y la ambigüedad de la relación del Gobierno con los múltiples grupos armados; y examina el riesgo de un grave estallido de violencia política evidenciado por el arraigado uso de la violencia en la sociedad y por la posibilidad de una polarización aún mayor en vísperas de las elecciones presidenciales de 2012, factor que se agudiza aún más por la incertidumbre que genera el estado de salud del Presidente.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>“Estudio comparativo de la incidencia del homicidio doloso en ciudades y jurisdicciones sub-nacionales de los países del mundo (2010)”, Seguridad, Justicia y Paz, Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, enero de 2011. El distrito metropolitano de Caracas tiene 3,2 millones de habitantes (2010). Según la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), en el 2008 la tasa de homicidios en la capital fue de 127 por cada 100.000 habitantes. “Número de Homicidios por cada 100 mil Habitantes por entidad federal en Venezuela, período 2008”, próximamente.

<sup>2</sup>Para un repaso de los acontecimientos políticos, económicos y sociales que han alimentado la polarización al igual que las tensiones sociales, véase Crisis Group Boletín sobre América Latina N°22: *Venezuela: Acelerando la Revolución Bolivariana*, 5 de noviembre de 2009. Durante su investigación de campo para el presente informe, Crisis Group solicitó en repetidas ocasiones la oportunidad de hablar con funcionarios del gobierno, pero sus solicitudes no fueron concedidas.

## II. LAS RAÍCES DE LA VIOLENCIA

La violencia en Venezuela no comenzó con Hugo Chávez. En la década de los ochenta, la tasa de homicidios se situaba alrededor de ocho por cada 100.000 habitantes y había permanecido prácticamente sin variar durante años. Sin embargo, cuando Chávez asumió la presidencia en 1999, la tasa se había triplicado. Esto se produjo a raíz de dos hitos, uno en 1989 y el otro en 1992,<sup>3</sup> y no fue consecuencia de un aumento gradual y constante. El primer aumento súbito vino después del llamado *Caracazo*, en el que se sucedieron varios días de disturbios, saqueos y represión militar provocados por un programa de austeridad del gobierno. El segundo se dio tras dos fallidos golpes de estado militares encabezados por el entonces teniente coronel Chávez. Tanto el *Caracazo* como los golpes de estado representaron momentos críticos en la relación entre las fuerzas de seguridad y la sociedad, tras décadas de relativa estabilidad.<sup>4</sup> En el primero, las tropas puestas en las calles para controlar los disturbios, abrieron fuego de manera indiscriminada matando a centenares de personas. En el segundo, miembros de las fuerzas armadas buscaron derrocar un gobierno elegido de manera democrática.

Si bien el nivel de violencia para finales de la década de los noventa era notablemente peor que en la década anterior, seguía siendo comparable con el de México o con el de Brasil, y mucho menor que el de Colombia, un país en conflicto. No obstante, la desintegración política ya estaba en proceso. Los años 1989 y 1992 fueron significativos en el proceso de erosión institucional que acompañó la decadencia del modelo político que reinó entre 1958 y 1998 (conocido como el *puntofijismo*<sup>5</sup>), y el advenimiento de la “anti-política”, mejor definida como la creencia que los políticos eran corruptos por naturaleza, lo cual suscitó

el apoyo hacia nuevos actores. Esto allanó el camino para la elección del ex líder golpista.

Se puede aducir que fue este proceso el que desató la violencia latente en la sociedad, pues provocó el colapso del pacto social que había ayudado a asegurar la resolución pacífica de conflictos.<sup>6</sup> La delincuencia, tanto común como organizada, de ninguna manera era ajena a Venezuela antes de la presidencia de Chávez; tampoco lo eran la corrupción y la impunidad. En efecto, Chávez llegó al poder con el compromiso explícito de afrontar la corrupción presente tanto en el sector público como en el privado, y en particular de depurar la rama judicial, la cual había adquirido una bien ganada reputación de corrupta.

<sup>3</sup> Roberto Briceño-León: “Diez años de violencia en Venezuela”, presentación por diapositivas, OVV, Laboratorio de Ciencias Sociales, Caracas, 2010.

<sup>4</sup> Como se evidenció después, la estabilidad fue, en cierta medida, un espejismo. Excesivamente dependiente de los ingresos provenientes del petróleo para sostener el gasto social, el sistema no fue capaz de soportar la disminución prolongada de esos ingresos; los indicadores sociales comenzaron a deteriorarse considerablemente en la década de los ochenta. En 1987, el 37 por ciento de la población vivía en la pobreza, según cifras oficiales. En 1992, esta cifra fue del 66,5 por ciento, con un 27 por ciento en pobreza extrema. Julia Buxton, *The Failure of Political Reform in Venezuela* (Aldershot, 2001), p. 41.

<sup>5</sup> Tras la dictadura militar (1948-1958), Venezuela vivió por vez primera varias décadas de gobiernos elegidos democráticamente con civiles en el poder y dominados por los social-demócratas de Acción Democrática y los cristiano-demócratas de Copei. El llamado pacto de Punto Fijo dio inicio a este periodo. Hugo Chávez emplea el término “Puntofijismo” como insulto, pues aduce que fue un arreglo entre élites que excluyó a los pobres y a los movimientos políticos menos centristas.

<sup>6</sup> Roberto Briceño-León: “Violencia, Ciudadanía y Miedo en Caracas”, *Foro Internacional*, vol. XLVII, no. 3, julio a septiembre de 2007, El Colegio de México, pp. 559-560.

### III. EL AUMENTO DE LA VIOLENCIA CON CHÁVEZ

La tendencia al alza de la violencia criminal no se detuvo cuando Chávez tomó posesión; las tasas de delincuencia han aumentado exponencialmente desde 1999. Si bien los victimarios son principalmente delincuentes individuales, integrantes de pequeñas bandas criminales o inclusive agentes de la policía, la creciente presencia del crimen organizado ha contribuido directa e indirectamente al incremento de la violencia. En contraste, y pese a la naturaleza polarizada de la política y de la sociedad, el nivel de violencia política abierta ha permanecido limitado hasta el momento, aunque los límites entre lo criminal y lo político se han vuelto cada vez más difusos.

#### A. LA CRECIENTE VIOLENCIA CRIMINAL

Según la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), los homicidios casi se cuadruplicaron entre 1998 y 2010, pasando de 4.550 a 17.600 por año. Esto hace de Venezuela uno de los países más peligrosos del mundo, y del homicidio la primera causa de muerte entre venezolanos jóvenes.<sup>7</sup> En 2009, las cifras no gubernamentales fueron superadas por las del Instituto Nacional de Estadística (INE), cuyas proyecciones eran de 19.113 homicidios con base en una encuesta amplia de víctimas.<sup>8</sup> Las cifras del INE significaron una tasa de homicidios de 75 por 100.000 habitantes, más del doble de la de Colombia y más de cuatro veces la de Irak.<sup>9</sup> Una vez consciente de las cifras, el

<sup>7</sup> En un país de 29 millones de habitantes, esto equivale a una tasa de homicidios de 61 por 100.000. La cifra proyectada de homicidios del OVV fue de 13.985 en el 2007 y de 16.047 en el 2009. “Venezuela registró 17.600 homicidios en 2010 según Observatorio Venezolano de la Violencia”, informe21.com, 30 de diciembre de 2010. Roberto Briceño-León, Olga Ávila, Alberto Camardiel, *Inseguridad y violencia en Venezuela. Informe 2008* (Caracas, 2009), p. 31. Las cifras tienen base en encuestas y entrevistas. Véase también Maolis Castro, “Homicidios son la primera causa de muerte entre jóvenes”, *El Nacional*, 19 de enero de 2011.

<sup>8</sup> “Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana 2009 (ENVPSC-2009)”, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), mayo de 2010, p. 68. El estudio abarcó 20.055 hogares rurales y urbanos. Las diferencias entre las cifras del OVV y las del INE se pueden atribuir al hecho de que las primeras no incluyen “muertes en averiguación”, las cuales eran de 4.205 en el 2009 según la ONG de derechos humanos Provea, ni casos registrados como “resistencia a la autoridad” (2.685 en el 2009). “Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, Informe Anual octubre 2009-septiembre 2010”, Provea, 2010, pp. 357-358.

<sup>9</sup> Según el director de la Policía Nacional de Colombia, general Óscar Naranjo, en enero de 2009 la tasa de homicidios fue de 33/100.000 habitantes. “Cifra de homicidios disminuyó en 45%

Gobierno decidió no publicarlas, pero el estudio fue filtrado y recibió una amplia cobertura. Otro delito que ha aumentado de manera exponencial desde el año 2000 es el secuestro.<sup>10</sup> Con un incremento acelerado en 2007, el INE estimó un total aproximado de 17.000 casos ocurridos entre julio de 2008 y julio de 2009, de los cuales la mayor parte no fueron denunciados ante las autoridades.<sup>11</sup>

Tanto las víctimas como los autores son, en su mayoría, hombres jóvenes que habitan zonas urbanas y pobres.<sup>12</sup> La gran mayoría no sólo de homicidios sino también de robos y de secuestros se cometen con armas de fuego,<sup>13</sup> reflejando así la circulación, en gran medida no controlada, de armas en manos de civiles.<sup>14</sup> Si bien las tasas de homicidios varían entre los diferentes estados venezolanos, los

desde 2002 hasta la fecha”, Presidencia de Colombia, comunicado de prensa, 19 de enero de 2009. La tasa de homicidios en Irak está basada en los datos del proyecto Iraq BodyCount, <http://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2009/>.

<sup>10</sup> “Venezuela es el centro del secuestro en Latinoamérica, según prensa”, *noticias 24*, 21 de noviembre de 2010.

<sup>11</sup> Las proyecciones del INE incluyen el llamado “secuestro express” (de menos de un día), que constituyeron 14.004 del total de 16.917. Javier Mayorca, “La encuesta de victimización y el costo social del secuestro”, *Crímenes sin Castigo*, <http://crimenessincastigo.blogspot.com/>, 30 de octubre de 2010. Mientras que la víctima del “secuestro express” tiende a ser escogida al azar, las víctimas de los secuestros convencionales son previamente identificados como blancos. Además, los secuestros convencionales requieren de mayores capacidades logísticas, por lo cual implican con frecuencia vínculos a estructuras criminales más organizadas. Entrevista de Crisis Group, periodista, Caracas, 23 de noviembre de 2010. Según el director de la policía de investigaciones de Venezuela (CICPC), comisionado Wilmer Flores Trosel, hubo 688 secuestros en el 2009. María Isolié Iglesias, “Un plagio cada dos días desde 1999”, *El Universal*, 19 de julio de 2010. Las diferencias entre las cifras del INE y las del CICPC radica en el alto número de casos no denunciados.

<sup>12</sup> Según el estudio del INE, más del 80 por ciento de las víctimas de homicidios en el 2009 eran de los dos estratos sociales más bajos. El estrato más alto sufrió sólo el 2,24 por ciento de todos los delitos. Más del 70 por ciento de las víctimas de homicidios tienen entre 15 y 29 años de edad. “Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, Informe Anual Octubre 2009-Septiembre 2010”, op cit., pp. 417-420, “Amenazas y Restricciones a los Derechos Humanos y la Democracia en Venezuela, Informe Comprehensivo de Seguimiento Enero-Septiembre 2010”, Civilis, 2010, p. 70.

<sup>13</sup> Se usaron armas de fuego en el 79 por ciento de los homicidios y también en el 74 por ciento de los hurtos agravados y en el 79 por ciento de los secuestros reportados en el estudio del INE, “Situación de los Derechos Humanos”, op cit., p.358; “Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana 2009”, op cit., p. 73.

<sup>14</sup> Según la sección venezolana de Amnistía Internacional, circulan alrededor de 12 millones de armas ilegales en el país, “Amnistía Internacional: Hay ‘total descontrol’ de armas en Venezuela”, *Globovisión*, 16 de septiembre de 2010.

más afectados incluyen aquellos gobernados tanto por el partido de gobierno como por la oposición.<sup>15</sup> Esto resalta el hecho de que el problema está profunda e históricamente arraigado y que no depende, principalmente, del gobernador de turno. Al mismo tiempo, no se puede hacer caso omiso del papel predominante del Gobierno Nacional en la prevención y control de la delincuencia.<sup>16</sup>

La situación ha cobrado dimensiones que sobrepasan las capacidades de los hospitales y las morgues. La inseguridad se percibe como el mayor problema del país, con más de 90 por ciento de la población encuestada que calificó la situación de su seguridad personal como grave o muy grave.<sup>17</sup> Sin embargo, relativamente pocos delitos se denuncian ante las autoridades. En promedio, sólo 31 por ciento de las víctimas consultadas por la encuesta denunciaron. Cuando se les preguntaba las razones para no hacerlo, 40 por ciento de los encuestados dijeron que su denuncia no sería aceptada o no tendría consecuencias. Estas respuestas parecen tener base en la experiencia, pues sólo 18 por ciento de las víctimas dijeron que habían recibido algún apoyo institucional después del delito.<sup>18</sup>

La mayoría de los delitos ordinarios son cometidos, supuestamente, por el “hampa común” (delincuentes individuales o pequeñas bandas conformadas por un promedio de entre cinco y diez integrantes), y por los mismos agentes

de la policía.<sup>19</sup> Una parte sustancial de los homicidios es producto de la lucha por el control territorial, o de ajustes de cuentas entre bandas, con una alta probabilidad de daños colaterales en sus barrios. Algunos de estos grupos realizan actos de sicariato, principalmente para individuos, pero en ocasiones también para grupos del crimen organizado, incluyendo estructuras nacionales e internacionales.<sup>20</sup>

Hay una falta notoria de estadísticas oficiales sobre la delincuencia. En 2005, la policía de investigaciones (CICPC) cerró su oficina de prensa, privando así a los periodistas de una fuente importante de información.<sup>21</sup> Por su parte, el Ministerio del Interior y Justicia detuvo la publicación de estadísticas sobre la delincuencia en 2004.<sup>22</sup> La observación de la actividad de las morgues suele ser la única posibilidad para los periodistas de acceder a cifras sobre homicidios. Después de una decisión judicial del 18 de agosto de 2010 que prohibió la publicación de fotografías violentas, presuntamente para proteger a los niños,<sup>23</sup> los

---

<sup>15</sup> Según el OVV, los estados con las tasas más altas de homicidios por cada 100.000 habitantes son 1) el distrito metropolitano (Caracas, 126,85) gobernado por la oposición; 2) Vargas (101,08) gobernado por el partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); 3) Carabobo (78,69) gobernado por la oposición; 4) Barinas (60,18) gobernado por el PSUV. “Número de Homicidios”, op cit.

<sup>16</sup> Mientras que los gobiernos sub-nacionales controlan las fuerzas policiales municipales y estatales, el gobierno nacional controla todas las otras instituciones principales a cargo de la prevención de la delincuencia, como la policía de investigaciones, la Policía Nacional, la Guardia Nacional y otras fuerzas armadas y los servicios de inteligencia.

<sup>17</sup> “Encuesta de Victimización”, op cit., p. 77. Según el Latino-barómetro, la inseguridad se comenzó a percibir de manera abrumadora como el problema más importante después de 2003, sobrepasando el desempleo (2001-2003), los salarios (1997-2000) y la educación (1995-96), www.latinobarometro.org. Entre las personas más acomodadas, el 72,45 por ciento califica de muy grave la situación de seguridad personal, un porcentaje considerablemente mayor que el registrado en el estrato más afectado (59,4 por ciento).

<sup>18</sup> Los niveles de denuncias oscilaron entre 83 por ciento para homicidios y 1,68 por ciento para la corrupción; el 11 por ciento dijo que “no tomarían la denuncia”; el 27 por ciento dijo que “no harían nada con la denuncia”. En casos de homicidio, más del 50 por ciento de las víctimas dijo que no recibieron ningún apoyo institucional. “Encuesta de Victimización”, op cit., pp. 68-69, 75.

---

<sup>19</sup> Ibid, pp. 106, 148, 189. Entrevistas de Crisis Group, expertos de seguridad, Bogotá, 9 de noviembre de 2010; Caracas, 28 de febrero de 2011. Para violencia policial, véase la sección V.B. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) define el crimen organizado como “un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados... con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”, Anexo I, Artículo 2 (a). Este informe hace la distinción entre pequeñas bandas basadas en comunidades (hampa común) y estructuras criminales más organizadas que operan a un nivel territorial más amplio (crimen organizado).

<sup>20</sup> Entrevista de Crisis Group, criminólogo, Caracas, 13 de abril de 2011. Según la ONG Paz Activa, 100.000 teléfonos celulares son robados cada mes. Yohana Marra, “Cada mes hampa se roba 100 mil celulares”, *La Voz*, 18 de enero de 2011. La capacidad que se requiere para procesar tales cifras sobrepasa aquellas de las bandas locales y requiere del apoyo de estructuras más organizadas. Las bandas locales incluyen miembros ordinarios (“robots”), quienes reciben órdenes de su líder (*pran*), por encima de quien hay un *caguán* (el puente con el crimen organizado). Entrevista de Crisis Group, experto en seguridad, Caracas, 28 de febrero de 2011.

<sup>21</sup> CICPC son las siglas de Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. En ese momento (2005), la institución se conocía como la Policía Técnica Judicial (PTJ). CICPC pertenece al Ministerio del Interior y Justicia.

<sup>22</sup> Comunicación de Crisis Group por correo electrónico, experto en seguridad, 9 de junio de 2011.

<sup>23</sup> “Venezuela bans papers from printing violent photos”, Reuters, 18 de agosto de 2010. La decisión judicial (tribunal duodécimo de Caracas) surgió a raíz de la publicación de una foto en *El Nacional* de cadáveres tirados al azar en una morgue evidentemente hacinada. El juzgado inicialmente prohibió la publicación de fotos violentas y reportajes conexos, pero retiró

periodistas han estado informando que el acceso a instalaciones relevantes, como morgues y hospitales, es cada vez más restringido.<sup>24</sup> Se dice que los funcionarios de las morgues ofrecen acelerar los trámites a los familiares de las víctimas si no hablan con los periodistas.<sup>25</sup>

A pesar de lo anterior, y por primera vez en muchos años, se rompió el silencio oficial en enero de 2011 cuando el ministro del interior y justicia, Tarek El Aissami, contestó preguntas de diputados de la oposición en la Asamblea Nacional. Allí declaró que durante 2010 hubo 13.894 homicidios y reconoció una tasa de 48 por 100.000 habitantes, cifra que está por encima del promedio latinoamericano, pero aún muy por debajo de los estimados no gubernamentales.<sup>26</sup> Al interpretar estas cifras, el Gobierno afirma que hay manipulación de las mismas por parte de representantes de la oposición. Así mismo, dice que la situación de violencia se debe a causas estructurales, como la pobreza, que heredó de los regímenes anteriores y que es alimentada por la burguesía nacional e internacional, y por las políticas de los Estados Unidos.<sup>27</sup> La referencia a problemas estructurales le ha permitido al Presidente reforzar los vínculos con su electorado.

Comenzando con un diagnóstico débil, el Gobierno no ha logrado implementar políticas integradas y eficaces de seguridad ciudadana. Pese a un marco legal e institucional comprehensivo al igual que planes ambiciosos,<sup>28</sup> las me-

---

la segunda parte de la resolución. Entrevista de Crisis Group, periodista, 23 de noviembre de 2010.

<sup>24</sup> Entrevista de Crisis Group, periodistas, Caracas, 23 de noviembre de 2010.

<sup>25</sup> Entrevista de Crisis Group, periodista, Caracas, 23 de noviembre de 2010.

<sup>26</sup> Ludmila Vinogradoff, "Venezuela registra el índice más alto de homicidios en América Latina", ABC, 10 de febrero de 2011. La tasa promedio de homicidios para América Latina es de 25,6/100.000. Lucia Dammert, Eric Alda y Felipe Ruz, "Desafíos de la seguridad ciudadana en Iberoamérica", FLACSO, Chile, 2008, p. 22.

<sup>27</sup> El 13 de julio de 2009, la defensora del pueblo atribuyó la situación a una sensación de inseguridad. Carlos Crespo, "Sensación de inseguridad", *Tal Cual*, 14 de julio de 2009. En enero de 2010, el Presidente dijo, "el crimen y la violencia son un problema político y uno de los grandes enemigos de la revolución bolivariana. No tengo dudas de que ese crimen y muchas de esas bandas criminales son preparadas, financiadas y apoyadas por la burguesía contrarrevolucionaria: El imperio yanqui y sus lacayos". "La violencia es financiada por EEUU", *El Universal*, 16 de enero de 2010. En agosto de 2010, el ministro de poder popular para la comunicación y la información Andrés Izarra se burló de las cifras no gubernamentales en una entrevista de CNN. "Las risas de Izarra en CNN por la cantidad de muertos en Venezuela", video, YouTube, 11 de agosto de 2010, <http://www.youtube.com/watch?v=QeTIE7CcQQM>.

<sup>28</sup> El artículo 55 de la Constitución de 1999 estableció por primera vez que cada individuo tiene derecho a protección por

didadas de seguridad ciudadana tomadas hasta el momento han sido principalmente reactivas, represivas y mal integradas, sin objetivos e indicadores que sean lo suficientemente concretos para hacerle seguimiento al progreso. Según la ONG de derechos humanos Provea, casi 70 por ciento de las intervenciones estatales en materia de seguridad ciudadana, realizadas entre 2003 y 2010, consistieron en "operativos" con un despliegue masivo y temporal de fuerzas de seguridad en zonas particularmente afectadas.<sup>29</sup>

En marzo de 2010, el Gobierno lanzó el Dispositivo Bicentenario de Seguridad (DIBISE), una operación mancomunada entre agencias encargadas de hacer cumplir la ley.<sup>30</sup> Inicialmente fue diseñado para durar sólo nueve meses, y su objetivo era promover el desarme, luchar contra el microtráfico, controlar tanto el consumo de alcohol como la violencia escolar, y garantizar la seguridad vial.<sup>31</sup> 31.550 oficiales fueron desplegados a localidades en los diez estados en los cuales, según el Gobierno, se concentraba el 75 por ciento de la delincuencia. Después de tres meses, el viceministro del sistema integrado de policía, Édgar Barrientos, anunció que las tasas de homicidio en zonas bajo el DIBISE se habían reducido en un 50 por ciento,

---

parte del Estado contra amenazas a la persona, la propiedad, los derechos y las obligaciones. Patricia Arias, "Mandato Policial y Conceptos de la Seguridad en América Latina", Red Latinoamericana de Policías y Sociedad Civil, Viva Rio, Brazil, 2009, pp. 37-39. La Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana reglamenta las responsabilidades y las interacciones de y entre las agencias encargadas y establece el Consejo de Coordinación de Seguridad Ciudadana como encargado de desarrollar y coordinar la implementación de políticas relevantes. "Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana", Gaceta Oficial no. 37,318, 6 de noviembre de 2001. La Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, Gaceta Oficial no 5,895, 9 de abril de 2008, le designa a la policía la tarea de "proteger el libre ejercicio de los derechos humanos, las libertades públicas y garantizar la paz social" (artículo 4). En marzo de 2009, el gobierno lanzó el "Plan Nacional Integral de Prevención y Seguridad Ciudadana", el cual incluía reformas a la policía y la justicia penal, estrategias de control y prevención con respecto a estupefacientes y reforma carcelaria. Hasta el momento, solo se han producido algunos avances en la reforma policial (véase la sección V.B.) y la constitución de una nueva entidad interinstitucional, el Consejo Nacional de Prevención y Seguridad Ciudadana, el cual, sin embargo, aún no ha presentado un plan ni acciones concretas.

<sup>29</sup> "Situación de los Derechos Humanos", op. cit., p. 362.

<sup>30</sup> El DIBISE incluye la Policía Nacional, las policías estatales, municipales y de tránsito, la Guardia Nacional, la Oficina Nacional Antidrogas, el CICPC, la agencia de inteligencia, el defensor del pueblo, el Ministerio Público y la Corte Suprema.

<sup>31</sup> "Presidente Chávez anuncia implementación de Dispositivo Bicentenario de Seguridad Ciudadana en 10 entidades del país", Aporrea ([www.aporrea.org](http://www.aporrea.org)), 5 de febrero de 2010. DIBISE fue "relanzado" en marzo de 2011 sin indicación de fecha de caducidad.

sin explicar el fundamento de este cálculo.<sup>32</sup> La iniciativa ha sido criticada debido al papel protagónico de los militares – la Guardia Nacional la dirige – y se volvió particularmente controversial con el anuncio por parte del Gobierno, en junio de 2010, de incorporar a 800 milicianos.<sup>33</sup>

La creación de la Policía Nacional en 2009 (véase la sección V.B) es la reforma más importante del sector de seguridad en los años recientes. Además, en junio de 2011, el Gobierno estableció la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme, conformada por representantes gubernamentales y no-gubernamentales y al cual se le ha encomendado la tarea de proponer políticas para el desarme y la prevención del uso de las armas.<sup>34</sup> Un proyecto de ley de desarme que fue aprobado en primer debate en la Asamblea Nacional en enero del 2010, estará alimentado por el trabajo de la comisión.<sup>35</sup> Si bien la iniciativa ha tenido buena acogida, el hecho de que el Gobierno esté simultáneamente armando milicias civiles (véase V.D), ha sido interpretado por algunos como un indicio de que el régimen está más motivado por su deseo de mejorar sus posibilidades electorales en vísperas de las elec-

ciones de 2012 y no por el interés de reducir el uso de armas entre civiles.<sup>36</sup>

En suma, las iniciativas de reforma no se han enmarcado como parte de una estrategia integrada de seguridad ciudadana que pueda tratar las dimensiones múltiples de la prevención y del control de la delincuencia. Por lo tanto, las medidas específicas han sido socavadas por fallas en el sistema, como los altos niveles de impunidad (véase la sección V.A) o las prisiones hacinadas y disfuncionales.

Las prisiones venezolanas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son las más violentas del hemisferio. En 2010, 476 reclusos fueron asesinados y casi 1.000 resultaron heridos. Teniendo en cuenta estas cifras y que en febrero de 2011 la población carcelaria estaba por debajo de 45.000 reclusos, según fuentes oficiales,<sup>37</sup> es 24 veces más probable sufrir una muerte violenta estando recluso por el Estado, que entre la población en general, donde la probabilidad de muerte violenta es de por sí elevada. Las armas, incluyendo los rifles de asalto y metralletas, y las drogas están disponibles para quien tenga dinero suficiente para comprarlas, y las prisiones están, en la práctica, bajo el mando de jefes de bandas, conocidos en el argot carcelario como *prans*, quienes les cobran a los reclusos una cuota mensual (*la causa*) por comida, un lugar para dormir y protección para no ser asesinados. También se manejan desde las cárceles operaciones de secuestro, extorsión y tráfico ilícito a través de teléfonos celulares.<sup>38</sup>

Las condiciones carcelarias recibieron una cobertura amplia de los medios nacionales e internacionales cuando el 12 de junio de 2011, 27 reclusos murieron y más de 70 resultaron heridos, en un enfrentamiento armado entre bandas ocurrido en la cárcel El Rodeo, a las afueras de Caracas. Aunque la Guardia Nacional rápidamente retomó el control sobre El Rodeo I, le tomó casi un mes hacer lo propio en El Rodeo II, donde unos 1.000 reclusos opusie-

<sup>32</sup> “Balance del Dibase arroja resultados positivos”, *Correo del Orinoco*, 2 de junio de 2010. Es común que el gobierno y las fuerzas de seguridad anuncien esporádicamente porcentajes de reducción en la criminalidad. Las cifras nunca se sustentan ni concuerdan con las que provienen de observadores internacionales o de la sociedad civil.

<sup>33</sup> “Situación de los Derechos Humanos”, op. cit., p. 364. Entrevista de Crisis Group, experto en seguridad, Caracas, 28 de febrero de 2011. Las milicias asumieron funciones del DIBISE en tres parroquias del municipio del Libertador, según el general de la Guardia Nacional Antonio Benavides. “Milicia reforzará el Dispositivo Bicentenario de Seguridad en Caracas”, *Correo del Orinoco*, 27 de agosto de 2010.

<sup>34</sup> Yolaidy Martínez Ruiz, “Venezuela: Comisión para desarme realiza primer encuentro”, *Prensa Latina*, 6 de junio de 2011. Cinco grupos de trabajo se crearon para lograr los objetivos de la Comisión de Desarme. María Isoliett Iglesias, “Cuatro subcomisiones trabajan para el desarme”, *El Universal*, 7 de junio de 2011; “Plan de trabajo de Comisión Presidencial para el Control de Armas será discutido”, Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, 7 de junio de 2011.

<sup>35</sup> La actual Ley de Desarme entró en vigor en 2002. Obliga a los dueños de armas de fuego a registrarlas con las fuerzas armadas. No hacerlo podría acarrear una multa y decomiso. También declara ilegal el porte de armas en eventos públicos, como protestas, elecciones y manifestaciones. Según expertos en seguridad, nunca se ha aplicado. Entrevista de Crisis Group, Caracas, 28 de febrero de 2011; entrevista telefónica, 14 de junio de 2011. Una segunda ley de desarme, la Ley Penal para el Desarme y el Control de Municiones, pasó el primer debate el 28 de enero de 2010. Introduciría penas de doce a dieciséis años para aquellos que comercialicen, importen, exporten o transporten armas de fuego de manera ilegal. El partido Primero Justicia presentó un proyecto de ley aparte en abril de 2011 que otorgaría anonimato y beneficios a aquellos que entreguen armas en forma voluntaria.

<sup>36</sup> Entrevista telefónica de Crisis Group, experto en seguridad, 14 de junio de 2011.

<sup>37</sup> “Cidh deplora muertos violentos en cárcel de Venezuela”, comunicado de prensa no.57/11, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 16 de junio de 2011. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, en 2008 y 2009, murieron 423 y 366 reclusos, respectivamente, más del 1 por ciento de la población carcelaria. “Situación Carcelaria en Venezuela, informe 2009”, Observatorio Venezolano de Prisiones, noviembre de 2009, p. 3. Entrevista de Crisis Group, representante de una ONG, Caracas, 24 de noviembre de 2010. Las prisiones están crónicamente hacinadas. Según un criminólogo, las celdas de detención del CICPC, donde murieron tres personas en mayo de 2011, tienen una capacidad para 40 internos pero acomodan a 300. “Criminólogo Gorriño considera difícil que los muertos en CICPC fueron torturados”, Canal de Noticia, 2 de junio de 2011.

<sup>38</sup> “Todo sobre PRANES y la vida en una cárcel venezolana”, Roger Zet Blog ([www.twittervenezuela.co](http://www.twittervenezuela.co)), 21 de junio de 2011.

ron resistencia y subsistieron sin agua y sin comida. Finalmente se rindieron, no sin que algunos se fugaran y otros murieran en el intento.<sup>39</sup> Una vez recuperado el control, la Guardia Nacional encontró 50 kilogramos de cocaína y armas sofisticadas que estaban en poder de los reclusos.<sup>40</sup>

## B. EL CRIMEN ORGANIZADO INTERNACIONAL

La transformación de Venezuela en un centro importante de operaciones para el crimen organizado internacional ha alimentado la violencia de manera directa e indirecta.<sup>41</sup> Ubicada en el extremo nororiental de América Latina, es un punto de partida lógico para bienes ilícitos que van hacia Europa, África y los EE.UU. Su territorio extenso y poco poblado tiene una frontera terrestre permeable de 2.219 kilómetros con Colombia, centro importante de cultivo de hoja de coca, producción y tráfico ilícito de drogas, al igual que fronteras extensas y difíciles de controlar con Brasil y Guyana. Además de poseer extensos litorales, la aplicación de la ley es laxa, en particular en sectores financieros y de negocios que ofrecen grandes oportunidades para el lavado de activos. Sobre todo, el país está plagado de corrupción.<sup>42</sup>

Según la ONU, Venezuela se ha convertido en un importante corredor para el movimiento de drogas hacia los Estados Unidos y, sobre todo, hacia Europa y África Occidental. Pese a no ser un país cultivador de la hoja de coca ni un productor de drogas, en 2008 no sólo había subido al cuarto puesto en el mundo en materia de incautaciones de cocaína (34 de las 250 toneladas métricas que se estima transitan anualmente por el país), sino que también sería la única fuente de los cargamentos clandestinos de cocaína interceptados a lo largo de las rutas marítimas hacia

África Occidental, en camino a Europa y Asia.<sup>43</sup> Más de 40 por ciento de los cargamentos vía marítima de cocaína incautados en Europa (en los casos en los que se podía determinar el origen) entre 2004 y 2010, y más de la mitad (51 por ciento) de los que, interceptados en alta mar, iban hacia Europa, entre 2006 y 2008 (67 incidentes en total), se originaron en Venezuela.<sup>44</sup> Según el Gobierno de los Estados Unidos, entre 2004 y 2007, los envíos de cocaína que pasaban por Venezuela vía marítima hacia Europa y Norteamérica se multiplicaron por más de cuatro.<sup>45</sup> En 2010, más del 90 por ciento de los vuelos no-comerciales que traficaban cocaína procedente de Colombia se originaron en Venezuela.<sup>46</sup>

Los controles cambiarios y de precios ofrecen excelentes oportunidades para contrabandistas y especuladores, mientras que el conflicto armado que persiste en la vecina Colombia ofrece un mercado fácil para contrabandistas de armas. En un ejemplo clásico de cómo las ramas del crimen organizado suelen entrelazarse, el narcotráfico paga por las armas.<sup>47</sup> Además, Venezuela es un país de origen, tránsito y destino para hombres, mujeres y niños que son víctimas de la trata de personas para fines de explotación sexual y/o trabajo forzoso. Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el país no cumple totalmente con los criterios mínimos requeridos para la eliminación de la trata de personas.<sup>48</sup>

<sup>39</sup> "The fifth circle of hell", *The Economist*, 14 de julio de 2011. "Yoifre: 'yo sí maté a mucha gente allá dentro'", Últimas Noticias ([www.ultimasnoticias.com.ve](http://www.ultimasnoticias.com.ve)), 15 de julio de 2011.

<sup>40</sup> "Venezuela's Political Outlook: A Conversation with Pedro Nikken", Inter-American Dialogue, archivo de audio, 19 de julio de 2011, ([www.thedialogue.org/uploads/Audio\\_Files/VE2.mp3](http://www.thedialogue.org/uploads/Audio_Files/VE2.mp3)). Nikken dijo inicialmente 60 kilos, pero lo corrigió a 50.

<sup>41</sup> "World Drug Report 2010", Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Viena, 2010, pp. 233-235; Joseph Kirschke, "The coke coast: cocaine's new Venezuelan address", *World Politics Review*, ([www.worldpoliticsreview.com](http://www.worldpoliticsreview.com)), 11 de septiembre de 2008; "2011 Trafficking in Persons Report", Departamento de Estado de los Estados Unidos, 27 de junio de 2011, pp. 382-383; Moisés Naím, "Hugo Chávez's criminal paradise", *Los Angeles Times*, 10 de noviembre de 2007.

<sup>42</sup> En 2010, Transparencia Internacional calificó a Venezuela como el peor país en América Latina en cuanto a corrupción en el sector público, otorgándoles el puesto 164 de un total de 178 países. "Corruption Perceptions Index" (CPI), octubre de 2010. No se trata de un problema nuevo. La calificación de Venezuela en 1999 estuvo casi igual de baja.

<sup>43</sup> "World Drug Report 2010", op. cit., p. 234; "2011 International Narcotics Control Strategy Report", Departamento de Estado de los Estados Unidos, marzo de 2011, p. 578. El informe menciona algunos cultivos de hoja de coca a lo largo de la frontera con Colombia, pero dice que los "niveles son históricamente insignificantes" (p. 577).

<sup>44</sup> "World Drug Report 2010", op. cit., pp. 26, 84.

<sup>45</sup> "Drug Control: US Counternarcotics Cooperation with Venezuela has Declined", U.S. Government Accountability Office (GAO), julio de 2009, pp. 5-6. Según el supuesto capo del narcotráfico Walid Makled, "cinco o seis vuelos diarios" llevan cocaína con complicidad del gobierno desde el estado fronterizo sureño Apure a destinos internacionales. Véase la entrevista de Casto Ocando con Walid Makled, "Había una nominita como de 1 millón de dólares para los altos mandos en Venezuela", Univisión, 31 de marzo de 2011, y "Entrevista exclusiva con Walid Makled", video, YouTube, 4 de abril de 2011, [www.youtube.com/watch?v=ECIhGn2coLo&feature=related](http://www.youtube.com/watch?v=ECIhGn2coLo&feature=related).

<sup>46</sup> Entrevista de Crisis Group, funcionario del gobierno de los Estados Unidos, Washington DC, 12 de agosto de 2011.

<sup>47</sup> Entrevista de Crisis Group, ex oficial de inteligencia militar, 3 de marzo de 2011.

<sup>48</sup> "2011 Trafficking in Persons Report", op. cit. p. 382. Según el informe, "Mujeres y niñas venezolanas se encuentran en condiciones de tráfico sexual dentro del país. Desde regiones pobres del interior del país son atraídas a centros urbanos y turísticos, como Caracas, Maracaibo y la Isla Margarita... En menor grado, mujeres brasileñas y colombianas son sometidas a prostitución forzosa en Venezuela. Algunos niños venezolanos

Muchos de estos problemas datan de antes de 1999, cuando Hugo Chávez asumió la presidencia.<sup>49</sup> Sin embargo, en la mayoría de los casos, por no decir en todos, se han agravado de manera significativa bajo su presidencia, durante la cual, una amplia variedad de organizaciones criminales han aprovechado las oportunidades que ofrecen la corrupción, la complicidad y un marco institucional débil.<sup>50</sup> Estos grupos incluyen desde guerrillas y paramilitares colombianos – estos últimos están ahora oficialmente desmovilizados, pero en muchos casos se han transformado en lo que el Gobierno colombiano llama bandas criminales (Bacrim) – hasta carteles de la droga mexicanos, traficantes europeos y norteamericanos. Incluso se ha reportado la presencia de la mafia rusa, la triada china y la yakuza japonesa.<sup>51</sup>

Algunos especialistas creen que el nivel de la violencia asociada con el crimen organizado en Venezuela se ha limitado a raíz de una política de gobierno de evitar un enfrentamiento generalizado.<sup>52</sup> Sin embargo, la creciente presencia del crimen organizado ha provocado un aumento en casos de secuestro y extorsión (inicialmente en zonas fronterizas, pero cada vez más en el interior del país) y también ha contribuido a la tasa nacional de homicidios. La zona fronteriza suroccidental ha sido, en años recientes, escena de una serie de asesinatos en los que se suelen encontrar los cadáveres tirados al aire libre, y algunas víctimas incluso reciben disparos a plena luz del día delante de testigos.<sup>53</sup> Aunque las agencias encargadas de hacer cumplir la ley no han llevado a cabo ninguna investigación seria, muchos observadores creen que estos asesinatos tienen que ver con ajustes de cuentas entre grupos armados que se disputan el control sobre el territorio y las rutas del tráfico de drogas.<sup>54</sup>

---

son obligados a trabajar como mendigos en la calle o como sirvientes domésticos. ... En general se cree que el crimen organizado está involucrado en el tráfico sexual en Venezuela. Venezuela es un país de tránsito para hombres, mujeres y niños de países vecinos. ... al igual que un destino para migrantes de la China, quienes podrían estar sometidos a explotación sexual comercial y trabajo forzoso en Venezuela”.

<sup>49</sup> Javier Mayorca, “Delincuencia organizada y poder político en Venezuela”, Friedrich Ebert Stiftung, septiembre de 2010, p.6.

<sup>50</sup> “Delincuencia organizada”, op. cit., pp. 6-7, 11.

<sup>51</sup> Entrevista de Crisis Group, jefe de policía estatal, 1 de marzo de 2011. “Hugo Chávez’s criminal paradise”, op. cit; “Venezuela confisca droga presuntamente propiedad de carteles mexicanos”, CNN Mexico, 25 de agosto de 2010.

<sup>52</sup> Entrevistas de Crisis Group, representante de ONG internacional, Caracas, 22 de noviembre de 2010; analista, Caracas, 26 de noviembre de 2010.

<sup>53</sup> Entrevistas de Crisis Group, Guasualito, 28-29 de abril de 2011; “Manifiesto del Pueblo de Guasualito: ¡Tenemos derecho a vivir en paz!”, Sic Semanal, Centro Gumilla, (www.gumilla.org), Caracas, 17 de enero de 2008.

<sup>54</sup> Enrique Rivas, “Es difícil controlarlos”, *El Espectador*, 22 de enero de 2008.

Además, hay al menos dos áreas en las que el impacto del crimen organizado nacional e internacional es particularmente detectable por la forma y el volumen de violencia. El sicariato, algo inusual antes del comienzo del siglo, es ahora un aspecto tan arraigado del panorama delictivo que algunas bandas urbanas se especializan en él (aunque no siempre por cuenta de criminales organizados). Con una larga presencia en la vecina Colombia, el fenómeno llegó con fuerza a Venezuela a medida que crecían las actividades de quienes más recurren a él: los narcotraficantes y paramilitares.<sup>55</sup> No es sólo el macrotráfico el que ha contribuido a la violencia. Conforme ha aumentado el movimiento de drogas en tránsito, una proporción cada vez mayor de dichas drogas se queda en el mercado nacional, provocando un aumento significativo en el microtráfico, incrementando las tasas de homicidios en barrios urbanos pobres.<sup>56</sup>

Las guerrillas colombianas (véase la sección IV.A) y sus rivales paramilitares participaron en esta infiltración delictiva, estos últimos en un primer momento como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y después como nuevos grupos armados ilegales y sucesores de los paramilitares, las Bacrim.<sup>57</sup> En 2001, la Federación Nacional de Ganaderos, Fedenaga, confirmó contactos con las AUC.<sup>58</sup> Los operativos contrainsurgentes de la fuerza armada venezolana desarrollados antes del gobierno de Chávez, contaban, supuestamente, con el apoyo ocasional de los paramilitares.<sup>59</sup> Desde finales de 2010, a lo largo de la frontera occidental se han presentado varios arrestos de supuestos integrantes de las Águilas Negras, una organización criminal que surgió de las filas de los paramilitares desmovilizados. Este y otro grupo similar, Los Rastrojos, supuestamente operan en los estados de Zulia, Táchira y Apure, propagando la violencia, intimidando a las poblaciones locales y controlando parte del contrabando de gasolina.<sup>60</sup> Se ale-

---

<sup>55</sup> Entrevista de Crisis Group, criminólogo, Caracas, 13 de abril de 2011.

<sup>56</sup> Comunicación de Crisis Group por correo electrónico, experto en seguridad, 9 de junio de 2011; entrevista de Crisis Group, antiguo alto funcionario público, Caracas, 1 de marzo de 2011.

<sup>57</sup> General Néstor González, venezolano disidente que, en 2001, estuvo a cargo de la zona de la frontera occidental con Colombia, dijo en 2004 que “siempre advertimos que detrás de la guerrilla vendrían los paramilitares, y los tenemos aquí”. Humberto Márquez, “Colombia y Venezuela: Paramilitares (y varios cabos) sueltos”, Inter Press Service, 13 May 2004.

<sup>58</sup> Fabiola Sánchez, “Paramilitares colombianos asesoran a venezolanos”, *El Nuevo Herald*, 7 de abril de 2001.

<sup>59</sup> Entrevista de Crisis Group, general retirado, Caracas, 28 de febrero de 2011.

<sup>60</sup> C.L. Smith, “Águilas Negras: Rising from the Ashes of Demobilisation in Colombia”, *Upside Down World*, 13 de abril de 2011, reproducido en venezuelanalysis.com. “Seguridad Binacional: Las Bacrim ya operan en Venezuela: Arco Iris”, video,

ga que hay vínculos entre los antiguos paramilitares y los gobiernos estatales de oposición en Táchira y Zulia.<sup>61</sup>

Desde 2005, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha retirado su certificación de la política anti-narcóticos del Gobierno venezolano, declarando que no está cumpliendo con sus obligaciones internacionales en este sentido.<sup>62</sup> Desestimando tales afirmaciones como parte de una campaña de desestabilización, Chávez afirma que desde la cancelación de la cooperación con la Agencia Anti-Narcóticos de los Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA) en 2005,<sup>63</sup> su gobierno ha incautado cantidades sin precedentes de drogas ilícitas. Sus propias cifras, sin embargo, muestran una historia distinta. En 2005, las incautaciones de drogas alcanzaron más de 77,5 toneladas, de las cuales casi 58,5 eran de cocaína.<sup>64</sup> En 2010, la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) de Venezuela afirmó haber incautado más de 63,5 toneladas en total, incluyendo 24,6 de cocaína, un descenso de 11 por ciento para esa droga con respecto a 2009 y menos de la mitad de la cantidad incautada en 2005.<sup>65</sup> El Gobierno atribuye el descenso en incautaciones de cocaína a la reducción en la producción en Colombia y “el uso de otras rutas”.<sup>66</sup> También afirma

haber capturado diecisiete traficantes importantes en 2010, muchos de los cuales fueron entregados a las autoridades colombianas o estadounidenses.<sup>67</sup>

En agosto de 2010, en una reunión con su homólogo colombiano recién electo, Juan Manuel Santos, el presidente Chávez afirmó que “Venezuela ni apoya, ni permite, ni permitirá presencia de guerrilla ni de narcotráfico ni de terrorismo en territorio venezolano”.<sup>68</sup> En abril de 2011, ambos gobiernos firmaron un acuerdo bilateral con miras a mejorar la cooperación en la lucha antidrogas, incluso por medio de la inteligencia compartida, la cooperación judicial fortalecida y los operativos conjuntos.<sup>69</sup> Mientras que el gobierno de Colombia habla de un cambio drástico en la actitud que demuestran las autoridades en Caracas,<sup>70</sup> está por verse si estas primeras señales positivas se traducen en acciones sostenibles y eficaces contra el narcotráfico y el crimen organizado en general (véase también la sección IV.A).<sup>71</sup>

La amplia evidencia disponible sugiere que ha existido complicidad a niveles altos con el crimen organizado.<sup>72</sup> Dos ejemplos podrían indicar el grado del fenómeno y la actitud laxa de las autoridades. Uno tiene que ver con el comercio de diamantes, y el otro, con el contrabando de

---

Cablenoticias2, YouTube, 9 de abril de 2011, [www.youtube.com/watch?v=rIkaP9X6R-A](http://www.youtube.com/watch?v=rIkaP9X6R-A).

<sup>61</sup> Entrevistas de Crisis Group, ex integrante de la inteligencia militar, Maracaibo, 3 de marzo de 2011; analista, Bogotá, 20 de enero de 2011. “Águilas Negras”, op. cit.; “Seguridad Binacional”, op. cit.

<sup>62</sup> “2011 International Narcotics Control Strategy Report”, op. cit., p. 577.

<sup>63</sup> En ese año, el gobierno de Chávez denunció su acuerdo con la DEA y le puso fin a los operativos anti-narcóticos conjuntos. Chávez acusó a la DEA de violar la soberanía venezolana y espiar a funcionarios públicos como parte de un plan para desestabilizar el país. Aunque Washington ha buscado negociar una revisión del acuerdo sobre los operativos de la DEA, el gobierno venezolano no ha cedido y en ocasiones ha acusado a la agencia estadounidense de ser en sí una organización traficante de drogas.

<sup>64</sup> “Cuadro Comparativo sobre Incautaciones de Drogas Realizadas en la República Bolivariana de Venezuela, Período 2000-2008”, Oficina Nacional Antidrogas (ONA).

<sup>65</sup> El resto es principalmente marihuana (38,6 toneladas), “Revista Balance de la Lucha Antidrogas en Venezuela 2010”, ONA, p. 53. Las agencias que no son de los Estados Unidos siguen colaborando con las unidades de la policía venezolana y la Guardia Nacional. Tienden a ser menos críticos de la supuesta complicidad por parte de las autoridades, aunque afirman que una gran parte de las incautaciones que figuran las estadísticas anuales de la ONA resultan de sus propias operaciones, con poca o ninguna participación venezolana. Se considera pragmático entregar drogas, sospechosos y crédito al gobierno. Entrevistas realizadas por un consultor de Crisis Group en capacidad anterior, agregados policiales no provenientes de Estados Unidos, Caracas 2005, 2006.

<sup>66</sup> Declaración del presidente de la ONA Néstor Reverol, en: “Venezuela dice incauta menos cocaína por caída producción y uso de otras rutas”, Efe, 29 de diciembre de 2010.

---

<sup>67</sup> “Gobierno venezolano ha capturado en 2010 a 17 narcotraficantes”, Agencia Venezolana de Noticias, 28 de septiembre de 2010. La ONA dice que mientras el acuerdo de la DEA estaba en vigor (2002-2005) ninguno fue capturado. Las cifras subsiguientes fueron cuatro en 2006, cinco en 2007 y catorce en 2008 y también en 2009.

<sup>68</sup> “Chávez dice que ni permite ni permitirá presencia de guerrilla en Venezuela”, WRadio, 10 de agosto de 2010.

<sup>69</sup> Jorge Enrique Meléndez y Luis Guillermo Forero, “Así será el pacto antidrogas con Venezuela”, *El Tiempo*, 3 de abril de 2011. Según un alto funcionario del gobierno colombiano, el acuerdo es confidencial. Comunicación de correo electrónico de Crisis Group, 9 de agosto de 2011.

<sup>70</sup> Entrevista de Crisis Group, Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Bogotá, 21 de diciembre de 2010. “Relaciones Colombia-Venezuela ‘van por muy buen camino’”, *El Universal* (Cartagena), 26 de abril de 2011.

<sup>71</sup> Entrevista de Crisis Group, Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Bogotá, 21 de diciembre de 2010. El 10 de agosto, el director de la Policía Nacional de Colombia, el general Oscar Naranjo, anunció la captura de diez pilotos pertenecientes a la organización de uno de los narcotraficantes más buscados del país y celebró la cooperación con las autoridades venezolanas en la operación. “Capturan a 10 pilotos de *El Loco Barrera* con ayuda de Venezuela”, *Semana*, 10 de agosto de 2011.

<sup>72</sup> Un respetado periodista y analista describió a Venezuela como un Estado criminalizado que “depende de la integración de la dirigencia del Estado en la empresa criminal”, y “concede parte de sus empresas criminales a actores no estatales”. Douglas Farah, “Terrorist-Criminal Pipelines and Criminalized States: Emerging Alliances”, *PRISM Journal*, (U.S.) National Defense University, 1 de junio de 2011.

bienes de consumo básico subsidiados.<sup>73</sup> Venezuela es un productor menor de diamantes de calificación industrial y como tal miembro del Proceso de Kimberley (PK), diseñado para frenar el comercio de los llamados “diamantes de sangre” que han financiado conflictos armados, particularmente en África Occidental.<sup>74</sup> Sin embargo, Venezuela no ha emitido ni un solo “certificado Kimberley” desde 2005 y por tanto la totalidad de sus exportaciones de diamantes, sobre las cuales el Gobierno no produce estadísticas, son contrabando.<sup>75</sup> El Gobierno se rehusó a aceptar la visita de una delegación supervisora del PK, y en 2008, ante la amenaza de expulsión, acordó con el órgano directivo de la organización suspender su afiliación mientras pone las cosas en orden internamente. Sin embargo, el contrabando sigue floreciendo.

Un sistema extenso de subsidios para alimentos básicos y otros bienes esenciales como gasolina y cemento ha permitido la creación de un comercio transfronterizo altamente lucrativo que aprovecha las diferencias de precio, que suelen ser enormes. En el caso del arroz, en 2009 los cultivadores colombianos – agrupados en la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) – se quejaron de que anualmente unas 100.000 toneladas eran ilegalmente importadas, causando un descenso de 35 por ciento en el precio ofrecido al cultivador.<sup>76</sup> Cruzando la frontera, los contrabandistas podían, en algunos casos, duplicar el valor de su mercancía. Este comercio ilegal contribuyó a la corrupción de oficiales civiles y militares con responsabilidades en las zonas fronterizas, o relacionadas a alimentos y transporte, al igual que a la creación de una red de lavado de activos.<sup>77</sup> Pese a sus afirmaciones de que ni un solo kilo de alimentos podría transportarse por el país sin

su conocimiento, el Gobierno fue incapaz de detener el flujo de bienes ilícitos.<sup>78</sup>

Similar es la situación del contrabando de gasolina. En Venezuela, un litro de gasolina se vende en \$0,02 a la tasa oficial, mientras que en el lado colombiano de la frontera cuesta \$0,99.<sup>79</sup> Según las cifras presentadas por un líder comercial en el estado de Táchira, aproximadamente unos diez millones de galones de contrabando cruzan mensualmente sólo esa sección de la frontera.<sup>80</sup> Las grandes sumas de dinero que se han generado han ido a parar a manos no sólo de individuos, la Guardia Nacional y el ejército, sino también de grupos armados organizados, incluyendo las AUC, sus sucesores y las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL).<sup>81</sup>

### C. VIOLENCIA POLÍTICA

La política venezolana está altamente polarizada. Se define en gran parte en términos de apoyo u oposición al proyecto político liderado por Hugo Chávez, y de manera más específica, a favor o en contra del Presidente mismo. En ambos bandos, pero especialmente de parte del Gobierno y sus seguidores, existen aquellos que cuestionan no sólo las creencias políticas de sus adversarios sino también su patriotismo y su derecho a gobernar, incluso después de ganar una elección.<sup>82</sup> Sin embargo, los asesinatos políticos han permanecido en un nivel relativamente bajo. En términos absolutos, son muy pocos en comparación con aquellos atribuibles a la delincuencia común o a la fuerza policial excesiva. La situación tal vez se pueda describir mejor como una de violencia política constante de baja intensidad, con picos ocasionales en momentos de gran tensión política, sobre todo en abril de 2002, cuando murieron diecinueve personas y docenas más resultaron heridas durante una marcha masiva hacia el palacio presidencial organizada por la oposición.<sup>83</sup>

<sup>73</sup> Para una discusión del tercer ejemplo, las declaraciones del supuesto capo del narcotráfico Walid Makled, véase la sección V.C.

<sup>74</sup> El Esquema de Certificación para el Proceso Kimberley (KPCS) impone numerosos requisitos a sus miembros para que puedan certificar cargamentos de diamantes en bruto como “libres de conflicto” y evitar que aquellos que no lo sean ingresen al comercio legítimo. Los estados participantes deben incluir los requisitos en la legislación nacional, incluyendo controles internos, de exportación y de importación; y comprometerse con la transparencia e intercambio de datos. Véase [www.kimberleyprocess.com](http://www.kimberleyprocess.com).

<sup>75</sup> Venezuela produce anualmente aproximadamente unos 150.000 quilates de diamantes, pero no ha exportado ninguno de manera oficial desde 2005. “The Lost World – Diamond Mining and Smuggling in Venezuela”, Partnership Africa-Canada, noviembre de 2006, p.12; Entrevistas realizadas por un consultor de Crisis Group en capacidad anterior, Santa Elena de Uairén, junio de 2007.

<sup>76</sup> Entrevista telefónica realizada por un consultor de Crisis Group en capacidad anterior, gerente general de Fedearroz Rafael Hernández, enero de 2010; “Uribe anuncia medidas para atacar contrabando de arroz venezolano”, Agence France-Presse, 3 de diciembre de 2009.

<sup>77</sup> Phil Gunson, “Contrabando como arroz”, revista *Poder y Negocios* (edición venezolana), 28 de febrero de 2010.

<sup>78</sup> Ibid.

<sup>79</sup> “Precio de la gasolina en Colombia es el cuarto más alto del continente”, *Portafolio*, 2 de marzo de 2011. “Venezuela sufre el alto costo de la gasolina barata”, *El Nuevo Herald*, 20 de abril de 2011.

<sup>80</sup> “Venta legal de combustible a Colombia no frenará el contrabando”, *El Mundo*, 5 de noviembre de 2010.

<sup>81</sup> Entrevistas de Crisis Group, Guasdalito, 28-29 de abril de 2011; “Águilas Negras”, op. cit. Véase también sección IV.B.

<sup>82</sup> Chávez con frecuencia ridiculiza a la oposición, tildándolos de “apátridos”; una de sus consignas favoritas es “no volverán”. “Chávez: No volverán al poder ni en elecciones ni por otra vía”, *El Universal*, 28 de febrero de 2011.

<sup>83</sup> Tras la represión violenta de la marcha, algunos generales del alto mando retiraron su apoyo a Chávez, que perdió el poder brevemente, pero el gobierno interino cayó en recriminaciones mutuas, y el Presidente recuperó el control en menos de dos días.

Sin embargo, el hecho de que después de más de nueve años cada bando sigue culpando al otro por la violencia de 2002; que ninguno de los atacantes ha sido identificado y ninguna investigación independiente se ha realizado; que los únicos individuos condenados por participar en los asesinatos son reclamados por la oposición como prisioneros políticos, y que pistoleros civiles del bando del gobierno fueron exonerados y tratados como héroes, revela el ambiente profundamente turbulento. Además, el número de manifestaciones callejeras registradas anualmente va en aumento, provocadas por una gama de problemas sociales y económicos sin resolver y por la creciente radicalización del proyecto político de Chávez. Los informes anuales de la ONG de derechos humanos Provea muestran que desde 1998/1999 hasta 2009/2010, el número de manifestaciones casi se cuadruplicó.<sup>84</sup>

La respuesta del Gobierno a las protestas ha combinado la represión selectiva con concesiones ocasionales. En diciembre de 2010, el Presidente vetó una nueva ley educativa tras masivas manifestaciones estudiantiles. Al mes siguiente, el Gobierno liberó a algunos de los prisioneros políticos tras una huelga de hambre protagonizada por estudiantes, y en abril, Chávez anunció un convenio salarial para el sector público que puso fin a una larga huelga de hambre protagonizada por enfermeras.<sup>85</sup> Al mismo tiempo, no ha vacilado en hacer de ciertos individuos un ejemplo, con la ayuda de los tribunales,<sup>86</sup> y usando prerrogativas que restringen el derecho a la manifestación pública.<sup>87</sup>

---

<sup>84</sup> “Situación de los Derechos Humanos”, op. cit., p. 341. La mayoría de las manifestaciones tenían que ver con asuntos de vivienda, trabajo y educación. Para un repaso de las tensiones sociales y medidas radicales adoptadas por el gobierno tras la victoria del presidente en el referendo de febrero de 2009, véase Crisis Group Boletín, *Venezuela: Acelerando la Revolución Bolivariana*, op. cit.

<sup>85</sup> Decreto no. 8166, Gaceta Oficial no. 3866, 25 de abril de 2011, modificado por el Decreto no. 8189, Gaceta Oficial no. 39666, 4 de mayo de 2011, y “Anuncian alza salarial de hasta 66% para trabajadores públicos”, *El Universal*, 26 de abril de 2011. La concesión a los enfermeros no fue explícita. El gobierno ni habló con ellos ni hizo referencia a ellos en su anuncio.

<sup>86</sup> En febrero de 2011, Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera, fue arrestado y condenado a siete años por “instigación a delinquir, agavillamiento y violación de la prohibición de acceso a zonas de seguridad”, después de organizar una huelga de más de 2.000 trabajadores. La sentencia fue anulada tres días después, aunque González debe comparecer regularmente ante el juzgado como parte de las condiciones de excarcelación. “Presentación de Human Rights Watch ante el Consejo de Derechos Humanos”, Human Rights Watch, 21 de marzo de 2011.

<sup>87</sup> La creación de “zonas de seguridad” a lo largo del país, incluyendo el centro de Caracas, ha restringido manifestaciones, por ejemplo. “Informe Anual 2010-2011”, Asociación Civil Control Ciudadano, 16 de marzo de 2011, p. 96.

Aunque la gran mayoría de las protestas no han sido violentas y no han recibido respuestas represivas,<sup>88</sup> los adversarios políticos corren el riesgo de ser tratados como si fuesen culpables *a priori*, y el sistema de justicia penal se emplea como instrumento de control, o incluso de venganza política – una tendencia creciente que los observadores de derechos humanos han calificado de “criminalización de la protesta”.<sup>89</sup> El riesgo es que, en vista de que los medios institucionales de acceso a la justicia han sido anulados en gran medida a causa del control que ejerce el ejecutivo sobre todas las ramas del Estado, los manifestantes se desengañen cada vez más y adopten medidas más violentas, lo cual provocaría una respuesta más represiva por parte de las autoridades.

La polarización política y la protesta social ya han cobrado algunas vidas. Las cifras recopiladas por Provea muestran que de 1999 a 2010, al menos 34 personas murieron en manifestaciones callejeras a manos de las fuerzas de seguridad.<sup>90</sup> Más de 2.500 resultaron heridas, con frecuencia como resultado del uso indiscriminado de gases lacrimógenos y perdigones disparados por escopetas. Las organizaciones de derechos humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han advertido que las campañas gubernamentales que tienen por objeto menospreciar a los activistas y cuestionar sus motivos pueden provocar de manera directa ataques físicos por parte de seguidores del Gobierno, tal como ocurrió en diciembre de 2010 cuando Carlos Correa, de la ONG Espacio Público, recibió una golpiza en las inmediaciones del parlamento.<sup>91</sup> En 2010 hubo casi 160 actos de agresión contra periodistas y medios de comunicación.<sup>92</sup>

---

<sup>88</sup> “Manifestaciones Públicas, Enero-Diciembre 2010”, Espacio Público y Provea, 14 de marzo de 2011, pp. 6-8. 98,8 por ciento de las manifestaciones no fue violento; de un total de 3.114 manifestaciones, 4,3 por ciento fue reprimido por el Estado u otros actores en 2010.

<sup>89</sup> “Informe Anual 2010-2011”, op. cit., p. 96. Un ejemplo es el caso de la activista Rocío San Miguel, quien afirmó en mayo de 2011, según información publicada en una revista militar, que ella y tres periodistas fueron acusados de ser actores tácticos de un plan desestabilizador contra el Presidente y en consecuencia declarados objetivo militar. “Rocío San Miguel: Soy objetivo militar de la Fuerza Armada Nacional”, *El Nacional*, 5 de mayo de 2011.

<sup>90</sup> “Venezuela: una década de protesta 2000-2010”, Provea, pp. ccvi, ccvii.

<sup>91</sup> “Annual Report 2010”, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, p. 567.

<sup>92</sup> “En 2010 se registraron 159 ataques contra periodistas y medios”, *El Universal*, 2 de mayo de 2011. El 13 de agosto de 2009, en un ejemplo particularmente flagrante, doce periodistas que estaban protestando en el centro de Caracas en contra de aspectos de un proyecto de ley de educación fueron golpeados – ocho de manera severa – por parte de manifestantes chavistas. “A dos semanas del brutal ataque a periodistas de la cadena

La oposición ha contribuido a la polarización política a través de su incapacidad inicial de focalizarse de manera constante en un proyecto político alternativo en lugar de centrarse solamente en la oposición personal a Chávez. De 2001 a 2004 en particular, esto provocó una serie de intentos para presionar al Presidente o derrocarlo por medios extra-constitucionales, incluyendo huelgas y cierres de empresas, el fallido golpe de estado del 11 de abril de 2002 y el paro petrolero (tildado por el Gobierno de “sabotaje petrolero”) de 2002 a 2003 que paralizó esta industria vital. Poco después del regreso de Chávez al poder tras la tentativa de golpe de 2002, sus opositores en las clases medias y altas en muchas zonas de la capital crearon grupos de autodefensa y buscaron la asesoría de especialistas sobre cómo protegerse ellos mismos y proteger sus casas, con armas de fuego si fuera necesario, contra posibles ataques por parte de los seguidores del Presidente.<sup>93</sup> La ciudad se dividió cada vez más en términos políticos y de clase entre zonas *chavistas* y *escuálidas*<sup>94</sup>, cada bando propugnando visiones negativas y estereotipadas de “los otros”.<sup>95</sup>

Con todo, buena parte de la culpa del clima de violencia latente y explícita recae indudablemente sobre el lenguaje político crudo y agresivo empleado por el Presidente y algunos de sus principales seguidores. Algunos aspectos de este lenguaje merecen especial atención, incluyendo el uso constante de terminología militar y la deshumanización de los opositores. Las elecciones son descritas como “batallas”, los seguidores del partido gobernante se organizan en “batallones” o “unidades de batalla”, los escolares son reclutados como “guerrillas comunicacionales” para combatir informes negativos de los medios. La oposición es vilipendiada, tildada de “fascistas” o “*pitiyanquis*” (“pequeños yanquis”) o denigrada al ser descrita en términos de animales (“llorando como un camión de cochinos”<sup>96</sup>). El Presidente ha amenazado con frecuencia a

sus detractores con reducirlos a “polvo cósmico” o “pulverizarlos”. Cuando perdió un referendo de reforma constitucional en 2007, describió la victoria de la oposición como “mierda”. Opositores individuales han sido objeto de avalanchas de insultos. El arzobispo de Caracas fue tildado de “troglodita”; Manuel Rosales, quien fue el principal adversario de Chávez en la elección presidencial de 2006, fue calificado de “imbécil y narcotraficante”.

Esta retórica, sumada al ambiente de impunidad que protege a los agresores (véase sección V.A), fomenta la violencia contra los opositores políticos sin necesidad de órdenes específicas. El Presidente y sus principales seguidores han alegado con frecuencia que sus palabras son leves en comparación con los ataques lanzados en los medios de la oposición, incluyendo supuestos llamados para asesinar al propio Chávez.<sup>97</sup> La oposición enérgica contra el Gobierno se puede encontrar por cierto en algunos medios impresos, en el único canal de televisión de la oposición que queda, Globovisión, y en el discurso de algunos representantes radicales de la oposición.<sup>98</sup> Sin embargo, como agrupación y desde el boicot de 2005 contra las elecciones legislativas, la oposición (ahora unida en la Mesa de Unidad Democrática) parece haber atenuado su discurso al estar unida en el propósito de desafiar el Gobierno por medio de las urnas.

---

Capriles no hay culpables”, Colegio Nacional de Periodistas, ([www.cnpven.org](http://www.cnpven.org)), 28 de agosto de 2009.

<sup>93</sup> “Contexto 2002”, Provea, pp.16-17. El académico venezolano José María Cárdenas afirma que el discurso despectivo hacia el presidente y sus seguidores refleja la presencia de “sensaciones ocultas de índole racista” por parte de la clase media y la burguesía. “Diez años de polarización en Venezuela”, en Francesca Ramos et al. (eds.), *Hugo Chávez: una década en el poder* (Bogotá, 2010), p. 139. Las clases altas venezolanas son descendientes históricamente de europeos blancos en contraste a la herencia mayormente indígena o africana de las clases bajas.

<sup>94</sup> El término “escuálido”, usado para denigrar la oposición equivale a “enclenque” en el argot venezolano.

<sup>95</sup> María del Pilar García Guadilla, “Politización y polarización de la sociedad civil venezolana: las dos caras frente a la democracia”, *Espacio Abierto*, vol. 12 no. 1, enero - marzo 2003, pp. 31-62.

<sup>96</sup> “Chávez: yo preguntaría si está de acuerdo con eliminar la CTV2”, *El Nacional*, 12 de noviembre de 2000. “Todos los días lloran en los medios de comunicación. Parecen un camión

---

de cochinos. Chillan y chillan, pero por más que chillen no habrá fuerza ni obstáculo capaz de evitarlo”.

<sup>97</sup> “Presidente Chávez magnicidio.flv”, video, YouTube, 20 de noviembre de 2010, [www.youtube.com/watch?v=Yb10t9soPYU](http://www.youtube.com/watch?v=Yb10t9soPYU).

<sup>98</sup> Los dueños de Globovisión, a su vez, han sido fuertemente presionados por el gobierno. Guillermo Zualoga se enfrenta a una orden de arresto en Venezuela por supuestos irregularidades comerciales y ha huído a los Estados Unidos, donde ha solicitado asilo. “Venezuela orders arrest of TV owner critical of Chavez”, BBC, 12 de junio de 2010.

#### IV. GRUPOS ARMADOS: COMBINANDO EL CRIMEN, LA VIOLENCIA Y LA POLÍTICA

Además de la presencia de organizaciones criminales que buscan principalmente intereses económicos, otros grupos armados combinan actividades criminales con un discurso político simpatizante del proyecto de Chávez: las guerrillas colombianas, las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL) y los colectivos urbanos. A pesar de diferencias fundamentales con respecto a sus orígenes, enfoques, estructuras y fuerza, todos se han beneficiado de una actitud del Gobierno que es, como mínimo, ambigua. Si bien el Gobierno mantiene cierta distancia con ellos, con esta actitud, reconoce su utilidad política. No se ha hecho ningún esfuerzo real para combatir o desarmar estos grupos, los cuales han obrado como promotores de la “Revolución bolivariana”, y han fomentado la violencia en el país de manera directa e indirecta. No obstante, esta actitud podría estar cambiando con respecto a las guerrillas y las FBL.

##### A. GUERRILLAS COLOMBIANAS<sup>99</sup>

Debido a la prolongación del conflicto en Colombia, a que existe entre ambos países una frontera larga y permeable, y que tradicionalmente ha habido poca presencia estatal en las zonas fronterizas, no sorprende la presencia de guerrillas colombianas – las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y, en menor grado, el ELN (Ejército de Liberación Nacional) – en territorio venezolano ni tampoco es un fenómeno reciente.<sup>100</sup> Sin embargo en 1999, cuando Hugo Chávez tomó el poder, le dio un giro significativo a la política, anunciando la neutralidad frente al

conflicto colombiano y un trato igualitario a sus partes.<sup>101</sup> Debido a la escalada militar del gobierno colombiano en tiempos de Álvaro Uribe y la consecuente necesidad de refugio por parte de las guerrillas, éstas pasaron de ser un blanco militar ocasional<sup>102</sup> a ser huéspedes tolerados y a veces bienvenidos. Sólo hasta hace muy poco, bajo los términos del acercamiento con el actual gobierno colombiano, parece que Chávez ha adoptado medidas para reducir su presencia o al menos hacerla menos visible.

En mayo de 2010, un informe de la inteligencia colombiana afirmó que unos 1.500 combatientes de las FARC estaban presentes en 28 campamentos en el lado venezolano de la frontera.<sup>103</sup> Según ésta y otras fuentes, las FARC estaban concentradas en gran medida en los estados de Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, mientras que el ELN se había establecido en el occidente de Apure y en el sureste de Táchira (ver mapa, apéndice A).<sup>104</sup> Según el informe de inteligencia, comandantes importantes de las FARC y del ELN<sup>105</sup> habían establecido su base en Venezuela. Más allá de sus asentamientos principales en las zonas fronte-

<sup>99</sup> Para un análisis de la dinámica reciente del conflicto en Colombia y el estado de las guerrillas, véase Crisis Group Informe sobre América Latina N°34, *Colombia: La oportunidad del presidente Santos de poner fin al conflicto*, 13 de octubre de 2010; y Crisis Group Boletín N°23, *Mejorar la política de seguridad en Colombia*, 29 de junio de 2010.

<sup>100</sup> Roberto Giusti, *Pasión Guerrilla* (Caracas, 2009), pp. 24, 51. Véase también “The FARC Files: Venezuela, Ecuador and the Secret Archive of Raul Reyes”, International Institute for Strategic Studies (IISS), Londres, mayo de 2011, pp. 39-54. El diario colombiano *El Tiempo* informó que las FARC tenían contactos de alto nivel con Caracas durante los gobiernos de los antecesores de Chávez, Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez (Sergio Gómez Maseri, “Los Correos que revelan la relación entre Farc y el gobierno Chávez”, 10 mayo 2011). Agregó: “También hay evidencia de cooperación con militares en las zonas fronterizas aunque a una escala menor y caracterizada por ‘intereses pragmáticos’.” Para un repaso de relaciones colombo-venezolanas, véase Socorro Ramírez, “Colombia-Venezuela: una intensa década de encuentros y tensiones”, en *Hugo Chávez*, op. cit., pp. 527-563.

<sup>101</sup> En febrero de 1999 Chávez dijo, “Si se repliega un soldado colombiano en cualquier condición, herido o no, nosotros lo atenderemos. Si se repliega un guerrillero colombiano, igualito, porque es un combatiente en un conflicto interno en el cual nosotros somos neutrales”. “Chávez ofrece asilo a guerrilleros colombianos desarmados”, Agence France-Presse, 23 febrero 1999. Aunque Chávez en varias ocasiones dijo que a las guerrillas colombianas se les debía otorgar estatus de beligerancia, nunca se emitió un instrumento legal en ese sentido.

<sup>102</sup> Los gobiernos anteriores a Chávez intentaron mediar en procura de una solución negociada al conflicto colombiano. La actitud frente a la presencia de los insurgentes en territorio venezolano cambió de manera particular tras un ataque del ELN a una base naval en febrero de 1995 en el cual murieron ocho marinos. Véase Javier Mayorca, “Farc en Venezuela: un huésped incómodo”, Informe político 32, Programa de Cooperación en Seguridad Regional, Friedrich Ebert-Stiftung, diciembre 2010, p. 3. El ataque marcó el inicio del “Teatro de Operaciones Conjuntas 1”, una zona previamente definida a lo largo de la frontera donde las fuerzas militares y policiales unidas operan bajo un mando conjunto.

<sup>103</sup> “FARC tienen 1.500 hombres en 28 campamentos en Venezuela”, *El Espectador*, 15 de julio de 2010. El informe se basa en operativos de la inteligencia colombiana y estadounidense y declaraciones de excombatientes desmovilizados. Entrevista de Crisis Group, ex oficial de inteligencia colombiana, Bogotá, 18 de febrero de 2011. Véase también: “Los tentáculos de las Farc en Venezuela”, *El Espectador*, 18 de mayo de 2010.

<sup>104</sup> “The FARC Files”, op. cit., p. 151 (mapa).

<sup>105</sup> Entre quienes están alias “Ivan Márquez”, “Rodrigo Granda”, “Timochenko”, “Jesús Santrich”, “Bertulfo Alvarez”, “Gran nobles” (FARC) y alias “Antonio García”, “Pablito” y “Gabino” (ELN).

rizas, las guerrillas propagaban sus actividades comerciales ilícitas a lo largo del país.<sup>106</sup>

Estos grupos usan el territorio venezolano supuestamente para descansar y como una zona segura para sus líderes en la que pueden entrenar,<sup>107</sup> mantener secuestrados, centralizar sus comunicaciones, adquirir armas y equipos y desarrollar sus negocios ilícitos.<sup>108</sup> Funcionarios internacionales de agencias de seguridad operando en el país indican que alrededor de dos tercios de la cocaína que pasa por Venezuela proviene de las FARC, y un ex alto funcionario venezolano afirmó que sin luz verde de las guerrillas, buena parte de lo demás tampoco cruzaría la frontera.<sup>109</sup> Otros funcionarios extranjeros creen que estas afirmaciones son exageradas y señalan que las Bacrim están aumentando su tráfico transfronterizo.<sup>110</sup> Muchas operaciones de drogas y armas parecen llevarse a cabo en cooperación activa o al menos con la complicidad silenciosa y supuestamente bien remunerada de militares venezolanos, particularmente integrantes de la Guardia Nacional y del ejército (véase también la sección V.C).

Aunque no hay datos sistemáticos, los informes de prensa, la propia investigación de Crisis Group y otras fuentes muestran que la presencia creciente de las guerrillas colombianas en Venezuela ha tenido un impacto violento,

en particular sobre la población fronteriza. Las extorsiones a los negocios locales, a los terratenientes y a los ganaderos de la zona, y el secuestro de aquellos que no pagan, han sido manifestaciones de la presencia guerrillera desde la década de los noventa,<sup>111</sup> pero han aumentado notablemente a partir de 1999. Las fuertes luchas ocasionales por el control territorial entre las FARC y el ELN – y algunas también con las FBL de Venezuela (véase la sección IV.B) y, más recientemente, con las Bacrim colombianas – han puesto a las comunidades locales en medio de las disputas, sometiéndolas al desplazamiento forzado y al reclutamiento, particularmente en los estados de Apure y Zulia.<sup>112</sup>

Los líderes comunitarios en Apure se quejan de que las guerrillas han pasado de usar su territorio para descansar y recobrar fuerzas, a usurpar funciones del Estado e intervenir activamente e incluso ejercer control sobre la vida comunitaria y las familias.<sup>113</sup> En algunas áreas, los insurgentes han establecido una relación más “pacífica”, pero aún coercitiva, con comunidades locales que obtienen ingresos al suministrarles comida y servicios a estos grupos.<sup>114</sup>

La ausencia de instituciones estatales funcionales a ambos lados de la frontera es lo que ha facilitado tanto la presencia guerrillera como su impacto en Venezuela. Además, el Gobierno ha sido acusado de mostrar una actitud permisiva y, en parte, de apoyo hacia los grupos, situación de la que tomaron ventaja segmentos de las fuerzas armadas (véase sección V.C). Las pruebas de vínculos entre las guerrillas y el gobierno abundan, particularmente antes de 2008.<sup>115</sup> Van desde reconocimientos simbólicos<sup>116</sup> y pasar

<sup>106</sup> Entrevistas de Crisis Group, representante de ONG, Caracas, 23 de noviembre de 2010; experto en seguridad, Caracas, 2 de marzo de 2011.

<sup>107</sup> Según el informe de la inteligencia colombiana mencionado anteriormente, alias “Iván Márquez”, quien reemplazó a “Raúl Reyes” como coordinador de la comisión internacional de las FARC, tuvo un centro de entrenamiento militar y político en Machiques (Zulia), con capacidad de entrenar a 700 combatientes. “Así se mueven las FARC en Venezuela”, *El Espectador*, 15 de julio de 2010. Se dice que el líder de las FARC alias “Jesús Santrich” gerenciaba un “centro de instrucción” en Sorotaima (Zulia). En 2010, un testigo protegido por la inteligencia colombiana (DAS) reportó centros en Apure, Maturín, Monagas, Aragua, Santa Cruz de Aragua y los alrededores de Maracay, donde integrantes de la organización terrorista española ETA y “algunos grupos iraníes” supuestamente recibieron entrenamiento, al igual que 59 integrantes de las FARC. “Los tentáculos de las FARC en Venezuela”, *El Espectador*, 18 de mayo de 2010. El informe de inteligencia también revela planes para reclutar a 3.000 campesinos venezolanos para ser entrenados por las FARC y el ELN en cooperación con el ejército venezolano y asesores cubanos. “Así se mueven”, op. cit.

<sup>108</sup> “Farc en Venezuela: un huésped incómodo”, op. cit., p. 10; “The FARC files”, op. cit., p. 60; Entrevistas de Crisis Group, periodista, Caracas, 23 de noviembre de 2011; ex-oficial de inteligencia colombiana, Bogotá, 18 de febrero de 2011; ex-general, Caracas, 28 de febrero de 2011.

<sup>109</sup> Entrevistas de Crisis Group, Caracas, septiembre de 2010; Bogotá, 9 de febrero de 2011; ex alto funcionario venezolano, Caracas, 1 de marzo de 2011.

<sup>110</sup> Entrevista de Crisis Group, Bogotá, 27 de julio de 2011.

<sup>111</sup> Roberto Giusti, op. cit. p. 24. Entrevistas de Crisis Group, Machiques, 3-4 de marzo de 2011; Guasdalito, 28-29 de abril de 2011. “Pobladores de la Sierra de Perijá confirman presencia de guerrilleros”, Venezolanos en Línea (www.vlinea.com), 1 de agosto de 2010.

<sup>112</sup> Entrevistas de Crisis Group, Guasdalito, 28-29 de abril de 2011. En 2006, el Servicio de Jesuitas para Refugiados dijo que los enfrentamientos entre las guerrillas colombianas habían “evidenciado las prácticas violentas en la franja fronteriza... utilizando el sicariato, el reclutamiento y desplazamiento forzoso, la imposición de normas de funcionamiento en las comunidades”. “Guerrilla asesina y desaloja a Venezolanos en la frontera”, *El Nacional*, 20 de octubre de 2006. Casto Ocando, “Guerrilla colombiana gobierna pueblo en territorio venezolano”, *El Nuevo Herald*, 3 de octubre de 2008. Enfrentamientos entre las FARC y el ELN han disminuido tras su cese al fuego en 2010.

<sup>113</sup> “Guerrilla Colombiana gobierna pueblo en territorio venezolano”, op. cit.

<sup>114</sup> Entrevistas de Crisis Group, Zulia, 4-5 de marzo de 2011; Caracas, marzo de 2011.

<sup>115</sup> Véase “Farc en Venezuela” op. cit. pp.7-10; y “The FARC Files”, op. cit., p. 134.

<sup>116</sup> Los reconocimientos incluyen un monumento al antiguo líder de las FARC alias “Manuel Marulanda” en el sector de la Comuna 13 en Caracas, un minuto de silencio para conmemorar el asesinato de “Raúl Reyes” en el 2008 y la declaración

por alto sus actividades ilícitas, hasta la prestación directa de apoyo material. Varias fuentes confirman la oferta y/o suministro de armas, dinero, equipos y otros servicios del Gobierno a los insurgentes. Se dice que el ex ministro del interior y capitán jubilado de inteligencia naval, Ramón Rodríguez Chacín, ha operado como el enlace principal entre el Gobierno y las FARC.<sup>117</sup> Supuestamente, miembros del ejército y de la Guardia Nacional no sólo se han abstenido de enfrentarse a las FARC en territorio venezolano sino que han protegido sus campamentos y facilitado las operaciones del grupo.<sup>118</sup>

---

presidencial del mismo año que las FARC y el ELN deben ser reconocidos como actores beligerantes en el conflicto colombiano. Esto último fue considerado en su momento una crítica al presidente colombiano, Alvaro Uribe, quien negó la existencia de un conflicto armado.

<sup>117</sup>“Farc y Venezuela: Un huésped incómodo”, op. cit., p.5. Entrevistas de Crisis Group, ex oficial de inteligencia militar, Bogotá, 18 de febrero de 2011; experto en seguridad, Caracas, 3 de marzo de 2011. Según un documento preparado por el entonces ministro del interior Chacín para el Presidente y firmado el 10 de agosto de 1999, el gobierno venezolano acordó suministrarles a las FARC “medicamentos especiales, venta de petróleo, apoyos especiales registro y contratación de empresas en el área bancaria . . . , agropecuaria, construcción de viviendas y salud, programa de desarrollo agropecuario en la zona fronteriza, apoyo para asilo y tránsito”. A cambio, el gobierno obtendría “apoyo de información para erradicar el bandolerismo y el narcotráfico, no conducir operaciones en territorio venezolano, no entrenar militantes venezolanos sin consentimiento del gobierno y no realizar en territorio nacional actividades al margen de la ley”. Roberto Giusti, op. cit., p. 161. Mensajes obtenidos de los computadores de Reyes en 2008 revelaron la aprobación de Chávez para girar \$300 millones a las FARC – el cual no se materializó – y su instrucción de construir centros médicos y de descanso, *ibíd.*, p. 163. Otra prueba que llegó a los titulares fue el decomiso por parte de tropas colombianas en 2009 de armas antitanque de las FARC que Suecia había vendido al gobierno venezolano. Chávez dijo que habían sido robados en un ataque del ELN a una base naval en Carabobo, pero no explicó cómo habían llegado a las FARC. “Swedes quiz Venezuela on weapons”, BBC, 27 de julio de 2009. Fabiola Sánchez, “Venezuela responderá en ‘momento oportuno’ a Suecia”, *Semana*, 28 de julio de 2009. “Farc en Venezuela”, op. cit., p. 12.

<sup>118</sup>Entrevistas de Crisis Group, Machiques, Serranía del Perijá, 4-5 de marzo de 2011; Guasdalito 28-29 de abril de 2011; ex general, Caracas, 28 de febrero de 2011. “Treasury Targets Venezuelan Government Officials Supporting the FARC”, comunicado, Tesoro de los EE.UU., Bogotá, septiembre de 2008. Nuevamente, no se trata de un fenómeno nuevo. En sus comentarios en “The FARC Files”, op. cit., Nigel Inkster, director para amenazas transnacionales y riesgos políticos, International Institute for Strategic Studies, dijo que las FARC siempre habían “tenido negocios pragmáticos con las fuerzas de seguridad venezolanas, las cuales tenían pocas opciones aparte de acomodarse a la llegada de grupos violentos y potencialmente perjudiciales, pues carecían de la capacidad de expulsarlos a la fuerza”, 10 de mayo de 2011.

Consideraciones de política exterior hacia Colombia en particular, han sido un factor que explica las relaciones del presidente Chávez con las FARC. Según algunos analistas, las FARC han sido un aliado estratégico en la propagación del proyecto bolivariano a lo largo de las Américas y la contención de Colombia, que se percibe como el principal obstáculo para aquella expansión, sobre todo durante el gobierno de Uribe (2002-2010).<sup>119</sup> Las pruebas también indican que la relación entre las guerrillas y el Gobierno venezolano, que argumenta que Colombia no aseguraba sus fronteras de manera apropiada, se ha caracterizado por altibajos y actitudes oportunistas de ambas partes, al igual que una desconfianza mutua que se ha manifestado por medio de un discurso presidencial a veces contradictorio frente a las guerrillas.<sup>120</sup>

En mayo de 2011, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (International Institute for Strategic Studies, IISS), con sede en Londres, publicó un estudio sobre los archivos del computador incautado después de que los militares colombianos bombardearan un campamento de las FARC dentro de Ecuador, matando a uno de los principales jefes del grupo, alias “Raúl Reyes”.<sup>121</sup> Entre sus conclusio-

---

<sup>119</sup>Entrevistas de Crisis Group, Caracas, experto en seguridad, 22 de noviembre de 2010, periodista, 25 de noviembre de 2010. “The FARC files”, op. cit., pp. 13, 14.

<sup>120</sup>En el 2004, el presidente Chávez dijo, “Yo soy un hombre de honor. Si apoyara la guerrilla colombiana tengan la seguridad que lo diría, no lo escondería. No apoyo ni he apoyado jamás, ni apoyaré jamás a la guerrilla colombiana ni a movimiento subversivo alguno contra gobierno democrático alguno, de ninguna manera”. “Las amistades peligrosas de Hugo Chávez”, *Infolatam*, 26 de julio de 2010; en 2008 dijo, “Las FARC y el ELN no son ningún cuerpo terrorista, son verdaderos ejércitos...que ocupan espacio en Colombia”. Chávez continuó al decir que su gobierno los reconoce “como fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político, que tienen un proyecto bolivariano, que aquí es respetado”, “Chávez: Las FARC ‘no son terroristas’”, *La Nación*, 12 de enero de 2008. Ese mismo año hizo un llamado a las FARC para que liberaran a todos los rehenes. Jorge Fernández Menéndez, *Las FARC en México: De la política al narcotráfico* (México, 2008), p. 132. Para la defensa de Chávez contra estas acusaciones, véase “Fiscal general: Venezuela no tiene que demostrar al mundo que es inocente”, Noticiero Digital ([www.noticierodigital.com](http://www.noticierodigital.com)), 23 de julio de 2010.

<sup>121</sup>“The FARC Files”, op. cit. La autenticidad de los archivos de Reyes sigue siendo un tema controvertido. Chávez tildó un informe del Interpol como “ridiculez” y “un show de payasos” (“Chávez se burló del informe de Interpol”, Univisión, 15 de mayo de 2008). El gobierno venezolano expresó dudas con respecto a los archivos de Reyes, los cuales llama “la farsa del milenio”, en “Las patrañas de la supercomputadora”, Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, mayo de 2008. Interpol dice que no hay prueba de que el material haya sido modificado por las fuerzas de seguridad de Colombia. Véase su comunicado de prensa, “Respondiendo a los intentos de tergiversar sus resultados, Interpol reafirma las conclusiones fundamentales de su examen de los ordenadores de-

nes señala que Chávez ha “efectivamente asignado [a las FARC] un rol en la sociedad civil venezolana”. Según el IISS, guerrilleros de las FARC participaron en el entrenamiento de “fuerzas de seguridad del Estado, las bases de apoyo paramilitar del Gobierno y otros grupos autónomos”, sobre todo en 2002-2003.<sup>122</sup> En ese sentido, y si bien la violencia como efecto directo de la presencia guerrillera ha estado limitada por lo general a las zonas fronterizas, los grupos han sido promotores indirectos de la violencia en Venezuela al alimentar economías ilícitas y la corrupción en las fuerzas de seguridad, y al entrenar grupos armados nacionales.

Hasta hace poco, el gobierno de Chávez pudo haber considerado que los beneficios de una alianza tácita con las guerrillas colombianas superaban las desventajas. Sin embargo, la relación costo-beneficio ha cambiado con el descenso gradual de los insurgentes bajo el hostigamiento militar colombiano, la pérdida de ímpetu en el exterior del mensaje bolivariano de Chávez y el cambio de gobierno en Colombia en agosto de 2010. En julio de ese mismo año, el presidente colombiano saliente, Uribe, había iniciado un nuevo conflicto diplomático al solicitar una reunión del Consejo Permanente de la OEA con el fin de presentar lo que, según sus afirmaciones, eran pruebas de la existencia de campamentos de las FARC dentro de Venezuela, por lo que pidió que se constituyera una comisión para verificar lo anterior. Caracas rechazó las pruebas y rompió relaciones diplomáticas.

Las relaciones Uribe-Chávez estaban marcadas por una animosidad personal, pero el presidente Santos ha adoptado una aproximación constructiva y pragmática, ante la cual Caracas ha reaccionado de forma positiva.<sup>123</sup> Motivados en gran medida por intereses económicos, los presidentes se reunieron dos veces en el primer año y están reconstruyendo gradualmente la cooperación en múltiples

---

comisados de las FARC”, 13 de junio de 2008. En mayo de 2011, la Corte Suprema de Colombia determinó que los archivos del computador no podían ser usados como prueba legal, pues habían sido incautados por el ejército, no la policía de investigaciones, y en territorio extranjero. Ratificó su providencia el 31 de julio de 2011, en respuesta a una petición del procurador a la Corte para reconsiderar su decisión. “‘Los PC de ‘Reyes’ no son prueba’: Corte Suprema de Justicia”, *El Espectador*, 01 de agosto de 2011.

<sup>122</sup> “The FARC Files”, op. cit., p. 91.

<sup>123</sup> Algunos creen que la principal ventaja del gobierno de Santos ha sido la detención Walid Makled, el supuesto capo venezolano del narcotráfico capturado en agosto de 2010 en territorio colombiano. El presidente Chávez supuestamente tenía que asegurar que fuera extraditado a Venezuela, no a los EE.UU. Entrevista telefónica de Crisis Group, analista internacional, 7 de julio de 2011.

ámbitos, incluyendo la seguridad.<sup>124</sup> Con instrucciones superiores de “cero descalificación de Chávez”,<sup>125</sup> el Gobierno colombiano quiere crear confianza y establecer compromisos. Evita desafiar a su vecino con respecto a temas difíciles y celebra las “señales positivas” que recibe.<sup>126</sup> La estrategia parece estar logrando resultados. Chávez ha declarado públicamente que no tolerará presencia guerrillera en Venezuela y ha capturado y extraditado a siete de sus miembros, incluyendo a Joaquín Pérez, el jefe de la agencia de noticias Anncol, quien presuntamente tiene vínculos con las FARC, y a Guillermo Torres, un cabecilla de esa organización quien supuestamente fue en algún momento la mano derecha de alias “Raúl Reyes”.<sup>127</sup> El 14 de abril, Santos anunció que los campos guerrilleros identificados por el gobierno de Uribe ya no se encontraban ahí, y que Chávez estaba cumpliendo su palabra.<sup>128</sup>

---

<sup>124</sup> Patrick Markey, “Colombia’s Santos, Venezuela’s Chavez restore ties”, Reuters, 11 de agosto de 2010. El comercio bilateral estaba en torno a los \$7 billones antes de que las tensiones políticas provocaran la suspensión de esos lazos bilaterales en 2008.

<sup>125</sup> Entrevista de Crisis Group, ex oficial de inteligencia militar, Bogotá, 15 de abril de 2011.

<sup>126</sup> Entrevistas de Crisis Group, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Bogotá, 21 de diciembre de 2010, 15 de marzo de 2011.

<sup>127</sup> Pérez fue capturado en el aeropuerto internacional de Caracas al desembarcar de un avión procedente de Frankfurt tras una llamada telefónica del presidente Santos el 22 de abril en la cual alertó al presidente Chávez y le pidió que capturara al supuesto líder de las FARC. Fue el primer presunto integrante de las FARC en ser capturado por las autoridades venezolanas desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia en agosto de 2010. Chávez desestimó las reclamaciones en su país de grupos radicales de extrema izquierda, respecto a que el gobierno estaba haciendo concesiones al imperialismo norteamericano y la oligarquía colombiana. También acusó a algunos de sus aliados de brindar apoyo a las guerrillas. “Chávez acusa a aliados suyos de apoyar a la guerrilla colombiana”, *Semana* (en línea), 2 de mayo de 2011. Según la analista venezolana de seguridad, Rocío San Miguel, este gesto señala el final de la política de neutralidad del Presidente. “Fin de la neutralidad”, *Control Ciudadano*, 28 de abril de 2011. Guillermo Torres (alias “El Cantante”), buscado en Colombia y los EE.UU., fue capturado el 31 de mayo de 2011. “Capturado el guerrillero ‘Julían Conrado’, alias ‘el cantante de las FARC’”, *Univisión*, 1 de junio de 2011.

<sup>128</sup> La declaración generó controversia en Colombia, a la cual el Presidente respondió a los pocos días, aclarando que el hecho de que los campamentos han desaparecido no significa que ya no hay presencia de las FARC en Venezuela. “‘Es probable que la guerrilla siga en Venezuela’: Presidente Santos”, *El Tiempo*, 18 de abril de 2011; “FARC en Venezuela, ¿desaparecieron o cambiaron de lugar?”, *Semana* (en línea), 19 de abril de 2011. El 1 de agosto de 2011, el jefe de las fuerzas armadas colombianas, almirante Édgar Cely, dijo que “lo que se mostró al final del Gobierno del presidente Uribe se mantiene (es decir, cam-

Mientras que Chávez tiene mucho que ganar o perder en su relación con Bogotá, la realidad detrás de la retórica es compleja. Hay dudas legítimas en cuanto a la capacidad del Presidente de ejercer control sobre las guerrillas, aún si quisiera hacerlo, en vista de la presencia abrumadora de corrupción militar y el arraigo, la riqueza y buen armamento de los que aún goza la guerrilla. Las evidencias del terreno indican que, en vez de combatirla activamente, existe una política de bajar su perfil y tomar acciones ejemplarizantes cuando sean necesarias y oportunas. Por lo tanto, la guerrilla pudo haber trasladado sus campamentos y podría estar organizando unidades más pequeñas.<sup>129</sup> Representantes de comunidades en los estados fronterizos del norte no advierten cambios sustanciales en cuanto a la presencia y a las operaciones de las FARC y el ELN, pero informan que el apoyo suministrado por las fuerzas de seguridad es menos abierto y visible.<sup>130</sup>

No sucede lo mismo en la frontera sur. Hay pruebas de una presencia importante de las FARC en el estado de Amazonas, donde los insurgentes mantienen redes de narcotráfico y transportan armas de contrabando hacia Colombia.<sup>131</sup> A diferencia de los estados fronterizos del norte, los campamentos de las FARC en el sur pueden operar más o menos en secreto, pues el acceso a la zona está restringido por la Guardia Nacional; mientras dure la luna de miel bilateral, Colombia tiene poco interés en publicitar el conocimiento que podría tener sobre estos campamentos.<sup>132</sup> En otras palabras, aún está por verse si los dos vecinos logran convertir sus manifestaciones públicas de armonía en cooperación eficaz y acciones conjuntas para ponerle fin a las guerrillas y a las estructuras del crimen organizado que operan a través de la frontera.

## B. FUERZAS BOLIVARIANAS DE LIBERACIÓN

Las FBL son una organización paramilitar armada y financiada supuestamente por el Gobierno para consolidar su control sobre un sector importante de la frontera con Co-

---

pamentos de las FARC en territorio venezolano). El presidente Santos respondió rápidamente que “hay muchos enemigos de lado y lado para que esa relación prospere...”. “Las Farc y el ELN siguen en Venezuela: Almirante Cely”, Caracol, 1º de agosto de 2011; “Santos dice que hay ‘enemigos’ del reestablecimiento de relaciones con Venezuela”, *Semana*, 2 de agosto de 2011.<sup>129</sup> Entrevistas de Crisis Group, ex oficial de inteligencia militar, Bogotá, 18 de febrero de 2011; ex oficial de inteligencia militar, Maracaibo, 3 de marzo de 2011, oficial de alto rango del ejército colombiano, Cúcuta, 27 de abril de 2011.<sup>130</sup> Entrevistas de Crisis Group, Machiques, 3-4 de marzo de 2011.<sup>131</sup> Entrevistas de Crisis Group, Caracas, marzo de 2011 ex oficial de inteligencia militar, Bogotá, 15 de abril de 2011; “Revelan detalles de ‘compadreo’ de la GN venezolana y las FARC en la frontera”, *noticias24*, 9 de febrero de 2008.<sup>132</sup> Entrevista de Crisis Group, Caracas, marzo de 2011; ex oficial de inteligencia militar, Bogotá, 15 de abril de 2011.

lombia.<sup>133</sup> Sus actividades están confinadas, en gran medida, a los estados de Apure y Barinas, y el sudeste de Táchira, aunque también tiene presencia en Mérida y Portuguesa, y vínculos con los grupos armados chavistas en Caracas, conocidos como colectivos.<sup>134</sup> En una entrevista en 2005, el jefe de las FBL, alias “Gerónimo Paz”, dijo que el grupo fue fundado en 1986 y que mantuvo su independencia, pese a que apoyó el régimen de Chávez.<sup>135</sup> Sin embargo, algunas fuentes informadas indican que en su forma actual data desde el comienzo del gobierno de Chávez, en 1999, y que recibió entrenamiento de las guerrillas colombianas.<sup>136</sup> Como algunos de los colectivos urbanos, el grupo ha sido muy crítico, en ocasiones, de la supuesta corrupción y las actitudes no revolucionarias por parte de algunos miembros del Gobierno.<sup>137</sup> En junio de 2009, alias “Gerónimo Paz” dijo a través de un comunicado que el grupo había sido disuelto, aunque no estaba en proceso de desarme. Esto parece haber sido el resultado de una división interna.<sup>138</sup>

En 2002, la Asociación de Ganaderos del Estado de Táchira, Asogata, afirmó que las FBL tenían más de 2.000 integrantes, aunque otras fuentes dijeron que en ese momento sólo unos trescientos o cuatrocientos estaban armados y entrenados.<sup>139</sup> En 2005, hubo informes de que su número había alcanzado los 4.000.<sup>140</sup> La misma existencia de las FBL fue negada durante mucho tiempo por fuentes oficiales, y los adeptos al Gobierno atribuyeron los informes de prensa sobre el tema a una campaña de propaganda negra en contra de la revolución.<sup>141</sup> Sin embargo, a medida que

---

<sup>133</sup> Si bien en muchos casos se le califica de grupo “guerrillero”, las FBL se pueden describir de forma más acertada como “paramilitares”, dado que poseen poder militar y buscan apoyar, no combatir, el régimen establecido.

<sup>134</sup> Javier Pereira, “Las FBL penetran el llano”, *El Nacional* (Sección Siete Días), 16 de septiembre de 2007. Lina Ron, líder de uno de los colectivos (véase la sección IV.C), le dijo a *El Nacional* y otros medios que ella estaba autorizada para hablar por las FBL.

<sup>135</sup> “Venezuela, donde una guerrilla se arma para defender al gobierno y la constitución”, *Prensa de Frente*, 13 de marzo de 2006.

<sup>136</sup> Entrevistas de Crisis Group, Guasdalito, 28-29 de abril de 2011. Hannah Stone, “FARC computers shine spotlight on Chavez militias”, *Insight*, 12 de mayo de 2011.

<sup>137</sup> “Basta de demagogia y corrupción, salvemos la patria Bolivariana”, FBL comunicó, 5 de marzo de 2011, [www.aporrea.org/ddhh/a118913.html](http://www.aporrea.org/ddhh/a118913.html).

<sup>138</sup> Entrevistas de Crisis Group, Guasdalito, 28-29 de abril de 2011. “FBL se transforma y divide”, *El Universal*, 5 de julio de 2009.

<sup>139</sup> Eleonora Delgado, “Fuerza Bolivariana de Liberación incrementa presencia en la frontera”, *El Nacional*, 21 de mayo de 2002.

<sup>140</sup> “Aseguran que 4 mil hombres de la FBL operan en el Alto Apure”, *El Universal*, 19 de julio de 2005.

<sup>141</sup> En 2007, el presidente Chávez dijo, “Yo lo vuelvo a repetir: ellos se llaman Fuerza Bolivariana de Liberación ... ¡es mentir! Yo, ni el país, ni la Fuerza Armada, ni los gobiernos locales,

sus actividades delictivas y políticas se volvieron cada vez más difíciles de ocultar, la versión oficial cambió. El mismo presidente Chávez se refería al grupo en sus discursos, por lo general haciéndole un llamado para dejar las armas e invitándolo a unirse a las milicias, en caso de querer defender el Gobierno.<sup>142</sup> Todas las organizaciones militares tenían que estar bajo el mando de las fuerzas armadas, decía. Sin embargo, según fuentes en la zona fronteriza, el Gobierno estaba suministrando a las FBL dinero, armas e infraestructura mientras hacía caso omiso de sus extorsiones, secuestros y actividades de contrabando.<sup>143</sup>

El principal centro de operaciones de las FBL siempre ha estado en el pueblo de Guasualito, en el estado de Apure, tanto dentro del pueblo como en sus alrededores, sobre todo en las poblaciones de Chorrosquero y La Gabarra. Los lugareños dicen que las FBL patrullan de noche por Guasualito y hacen “limpieza social”, arrojando y a veces matando a individuos acusados de actividades delictivas o a aquellos que no son de su agrado.<sup>144</sup> Imponen sus propias leyes con respecto al consumo del alcohol y otras actividades como la caza, la pesca y la tala de árboles. Pero también obtienen dinero de agricultores y comerciantes por medio de la extorsión y manejan un negocio de contrabando de gasolina hacia Colombia a través de la frontera. Además, según los ganaderos, las FBL roban ganado y secuestran con fines extorsivos.<sup>145</sup> En el pasado, sus actividades han suscitado enfrentamientos con las FARC y el

ELN. Las FBL afirman que tales conflictos surgen a raíz de su defensa de la soberanía nacional contra fuerzas extranjeras.<sup>146</sup> Niegan su responsabilidad en secuestros, extorsiones y otros delitos.<sup>147</sup> Fuentes consultadas en la frontera informan que, pese a que esto último pudo haber sido cierto al comienzo de la era Chávez, las FBL comenzaron a autofinanciarse de esta manera tras el inicio de una reducción en la financiación proveniente del Gobierno.<sup>148</sup>

La presencia de grupos armados ilegales transformó la situación en Guasualito y en general en el Alto Apure, que se extiende hacia la frontera de Táchira en el occidente. En Guasualito, un pueblo de unos 60.000 habitantes, el miedo inspirado por las FBL es tal que la delincuencia común es poco frecuente. El costo de quebrantar la “ley” impuesta por este grupo de vigilancia puede ser la muerte o el trabajo forzoso en las fincas que administran en las afueras del pueblo. La misma política de controlar la comunidad por medio de las armas aplica en la política: aquellos que critican el Gobierno o denuncian irregularidades en las fuerzas armadas corren el riesgo de recibir la visita de hombres armados que consideran que su trabajo es defender la revolución y mantener el régimen de Chávez en el poder. Aunque los autores de tales actos no se identifiquen, éstos son atribuidos a las FBL por ser el grupo armado que predomina en la zona.<sup>149</sup>

En meses recientes, tras el acercamiento entre Chávez y Santos, se informa que ha habido un intento de controlar las FBL y hacer menos visibles sus actividades. Desde finales de 2010, los pobladores de la zona reportan un cambio en la relación entre el grupo y las fuerzas de seguridad. La diferencia más notoria es que ahora son los soldados quienes custodian las estaciones de servicio que previamente estaban bajo el control de hombres armados vestidos de civil que se hacían llamar “auditores sociales”.<sup>150</sup> A los soldados se les ha visto viajando en motoci-

---

ni el gobierno estatal, ni nadie aquí puede estar reconociendo a esa tal llamada Fuerza Bolivariana de Liberación”, Aló Presidente no. 285, Elorza, Apure, 10 de junio de 2007.

<sup>142</sup> Aló Presidente no. 206, Junin, Tachira, 3 de octubre de 2004.

<sup>143</sup> Entrevistas de Crisis Group, Guasualito, 28-29 de abril de 2011. Algunos han dicho que el antiguo ministro del interior Ramón Rodríguez Chacín, supuestamente el principal intermediario del Presidente con las guerrillas colombianas, estuvo entre los fundadores de las FBL, al igual que Jorge Nieves, un activista político empleado por el ministro de energía para controlar el comercio de gasolina en Guasualito (y por tanto, supuestamente, para apoyar la financiación del FBL). Nieves fue asesinado en abril de 2003 por un pistolero que, según lo que dijo las FBL posteriormente, actuó en representación del ELN. Entrevistas de Crisis Group, Guasualito, 28-29 de abril de 2011. “Rodríguez Chacín es el Jefe del FBL”, *Diario de los Andes*, 16 de enero de 2008; “Informe del Diputado Ismael García sobre dimensión y profundidad de la corrupción del régimen del teniente-coronel Hugo Chávez y su entorno militar de gobierno”, Reporte Confidencial, ([www.reporteconfidencial.info](http://www.reporteconfidencial.info)), 27 de octubre de 2009; Roberto Giusti, “Guerra fratricida”, *El Universal*, 12 de agosto de 2003.

<sup>144</sup> Entrevistas de Crisis Group, Guasualito, 28-29 de abril de 2011. Véase también “Child Soldiers Global Report 2008 – Venezuela”, Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, 2008, pp. 366-367.

<sup>145</sup> Entrevistas realizadas por consultor de Crisis Group en capacidad anterior, asociaciones locales de ganaderos, Zulia, 2000, 2006, 2009.

---

<sup>146</sup> En un comunicado del 7 de marzo de 2002, la Comandancia General, Bloque Occidental de las FBL proclamó: “Somos una reserva popular para acompañar a las FAN en la defensa de la patria amenazada por poderosos enemigos internacionales”. También notó que el empresariado en la región fue “golpeado por grupos foráneos y por otros provenientes de la delincuencia común”. Copia del comunicado en poder de Crisis Group. En 2007, exigió que las FARC y el ELN cesaran inmediatamente sus actividades en territorio venezolano, diciendo que “con ello hacen un flaco favor al proceso revolucionario venezolano”. Véase “FBL exige a las FARC y al ELN abandonar Venezuela”, *El Universal*, 26 de febrero de 2007.

<sup>147</sup> Comunicado, FBL (Bloque Occidental), op. cit.

<sup>148</sup> Entrevistas de Crisis Group, Guasualito, 28-29 de abril de 2011.

<sup>149</sup> Ibid.

<sup>150</sup> Ibid. El comercio transfronterizo de gasolina barata era, según se informa, uno de los principales pilares de las finanzas de las FBL, pero un coronel recientemente nombrado a cargo de la

cletas que anteriormente pertenecían a las FBL, cuyos integrantes ya no están presentes de día en las calles de Guasdalito, aunque siguen patrullando el pueblo de noche. A pesar de que no hay indicios de que el Gobierno haya decidido dismantelar las FBL, las pruebas disponibles son congruentes con una política de reducir el perfil de las fuerzas irregulares en la zona fronteriza.

### C. LOS COLECTIVOS URBANOS

En ninguna parte es más evidente la ambivalencia del Gobierno frente a la violencia que en sus relaciones con los “colectivos” del barrio 23 de enero, cerca del palacio presidencial de Miraflores, en el occidente de Caracas. En las décadas de los sesenta y setenta, las organizaciones guerrilleras que lucharon contra el Gobierno usaban la zona como una base urbana clave. Los colectivos – grupos civiles armados adeptos al régimen chavista – tienen sus orígenes en aquel periodo, aunque la mayoría son de formación más reciente.<sup>151</sup> Algunos integrantes han sido aliados cercanos del Presidente desde antes de su intento de derrocar el gobierno de Carlos Andrés Pérez en febrero de 1992.<sup>152</sup> Se cree que alrededor de una docena de grupos armados chavistas de este tipo actúan en Caracas, de los que tal vez ocho tengan sus sedes principales en el 23 de enero. Es inusual que más de 40 ó 50 hombres armados y encapuchados aparezcan en un momento cualquiera, aunque se ha informado que hasta 2.000 integrantes de los colectivos están armados.<sup>153</sup> Algunos grupos tienen sedes en otras partes de Venezuela. Uno de ellos está, de manera visible, en el campus universitario de Mérida donde los Tupamaros, en particular, han participado frecuentemente en violentos enfrentamientos callejeros.

---

base del ejército en La Victoria visitó a Chorrosquero y ordenó a sus tropas a destruir el depósito de gasolina del grupo que encontraron ahí.

<sup>151</sup> La restauración de la democracia en Venezuela después del derrocamiento de General Marcos Evangelista Pérez Jiménez en 1958 coincidió con la revolución en Cuba, y desde 1960 existían células guerrilleras con apoyo cubano en el país. Aunque el Partido Comunista de Venezuela (PCV) había ayudado a derrocar al dictador, después fue excluido del poder y recurrió a la lucha armada, tal como hicieron otros grupos de izquierda. Un proceso de paz, iniciado por el presidente Rafael Caldera (1969-1974), y la creciente prosperidad petrolera llevó a la desmovilización de la mayor parte de las frentes guerrilleras a comienzos de la década de los setenta, aunque aún hubo algunas unidades activas del grupo ultraizquierdista Bandera Roja hasta la década de los ochenta. Véase Alberto Garrido, “El eje revolucionario Chávez-Castro”, *El Universal*, 27 de junio de 2004.

<sup>152</sup> Este es el caso, por ejemplo, de Alberto “El Chino” Carías de los Tupamaros, quien fue el subsecretario de seguridad ciudadana bajo el alcalde metropolitano de Caracas Juan Barreto. Véase Antonio Salas, *El Palestino* (Madrid, 2010), p. 260.

<sup>153</sup> “20 Pelotones Armados en el 23 de Enero”, *El Mundo*, 13 de julio de 2006.

Los grupos resultan difíciles de definir. Si bien todos expresan lealtad hacia el Presidente y aseguran que recurrirían a la fuerza para defenderlo contra sus opositores, muchos critican al Gobierno y tienen una relación de confrontación con el partido de gobierno, cuestionando su presunta falta de un verdadero espíritu revolucionario. Se autodefinen como socialistas, antiimperialistas y anticapitalistas, en tanto que sus actividades incluyen la imposición de la justicia por mano propia y la limpieza social. Los colectivos no están unidos. Mientras los Tupamaros y el grupo de la Piedrita, por ejemplo, se han enfrentado a tiros, algunos grupos más antiguos que se autodefinen como organizaciones comunitarias serias, tales como la Coordinadora Simón Bolívar,<sup>154</sup> son severos en sus críticas a rivales más recientes, como los Carapaicas, los que a su vez tienden a reunirse con la prensa en ropa militar, usando pasamontañas y portando rifles automáticos.<sup>155</sup>

Observadores dicen que, pese a su postura en contra de la delincuencia y las drogas, algunos colectivos han combinado actividades políticas con narcotráfico, hurto de automóviles y otras formas del crimen organizado.<sup>156</sup> Varios sectores del barrio 23 de enero han sido declarados zonas prohibidas para la policía que debe pedirles permiso a los líderes de los grupos para ingresar, incluso teniendo órdenes de arresto.<sup>157</sup> Los grupos han estado involucrados en varios ataques armados contra instituciones vinculadas a la oposición. El 23 de febrero de 2008, un grupo dirigido por Lina Ron, la figura más prominente de las filas de los colectivos hasta su muerte en 2011 (ocasionada por un infarto), tomó el palacio del arzobispo en el centro de Caracas durante dos horas, expulsando a los empleados de la iglesia. Según Ron, la Iglesia y Fedecámaras – la principal organización de empleadores – estaban involucradas en un complot contra el Gobierno, y Héctor Serrano, quien había muerto días antes mientras intentaba poner una bomba fuera del edificio de Fedecámaras, era un mártir.<sup>158</sup>

---

<sup>154</sup> La Coordinadora Simón Bolívar se enorgullece de señalar las oficinas abandonadas de la Policía Metropolitana (PM) frente a su sede principal en el sector de La Cañada sector del barrio 23 de Enero, las cuales ahora son sede de una emisora y otras instalaciones gerenciadas por la Coordinadora. Sus líderes dicen que obligaron a la PM a irse porque estaban en alianza con los delincuentes que asediaban a los residentes del barrio. Entrevista realizada por consultor de Crisis Group en capacidad anterior, Juan Contreras, líder de la Coordinadora Simón Bolívar, en su sede en el barrio 23 de Enero, 16 de octubre de 2005.

<sup>155</sup> “Cadena de homicidios dejó tres muertos en el 23 de Enero”, *El Nacional*, 23 de junio de 2006.

<sup>156</sup> “20 Pelotones Armados”, op. cit.

<sup>157</sup> Entrevista de Crisis Group, criminólogo, Caracas, 13 de abril de 2011.

<sup>158</sup> Las declaraciones de Ron se transmitieron por televisión. Véase “Lina Ron, Globovisión es un objetivo de la revolución

La estación de televisión Globovisión ha sido atacada varias veces. En una oportunidad, a través de un artefacto que inició un incendio en el exterior de los estudios. En agosto de 2009, un grupo armado dirigido por Lina Ron invadió las instalaciones y lanzó gases lacrimógenos. En declaraciones a la prensa luego del ataque contra el palacio del arzobispo, Ron advirtió que los medios eran un “objetivo revolucionario” que “buscaban ser bombardeados”.<sup>159</sup> Posteriormente fue arrestada y retenida en la sede principal de inteligencia militar (DGIM), pero fue puesta en libertad en espera del juicio. Previamente en 2009, Valentín Santana, un aliado cercano de Ron, del grupo La Piedrita, concedió entrevistas a dos periodistas venezolanos en las que declaró, entre otras cosas, que Marcel Granier, presidente del canal de televisión de la oposición RCTV (cerrado posteriormente por el Gobierno), era un blanco militar. Por ello, se emitió una orden de arresto contra Santana pero no ha sido capturado. Algunos informes de prensa sugieren que pasó un tiempo en Cuba antes de regresar a su base en el 23 de enero.<sup>160</sup>

Cuando se le preguntó a un lugarteniente de Ron por posibles víctimas inocentes de las acciones armadas, éste respondió que eran “daños colaterales”.<sup>161</sup> Héctor Serrano, el hombre que murió en el intento de efectuar un atentado explosivo contra Fedecámaras, resultó ser integrante de la Policía Metropolitana (PM).<sup>162</sup> Dos años después, la policía de investigaciones (CICPC) arrestó a un supuesto cómplice de Serrano, “Juancho” Montoya, un policía en el municipio del Libertador, gobernado por aliados del Presidente. Pero Montoya fue puesto en libertad después de dos meses, en medio de imputaciones de que sus superiores habían fabricado un caso en su contra.<sup>163</sup> Este patrón de impunidad se volvió usual en casos en los que estaban involucrados integrantes de los colectivos o de otros grupos violentos chavistas, incluso cuando entre las acusaciones figuraban el homicidio, las amenazas de muerte u otros delitos graves.<sup>164</sup>

---

Parte 2”, video, YouTube, 27 de febrero de 2008, [www.youtube.com/watch?v=X0NRSIK\\_GXw](http://www.youtube.com/watch?v=X0NRSIK_GXw).

<sup>159</sup> *Ibíd.*

<sup>160</sup> “Tropezarse con la misma Piedrita”, *TalCual*, 12 de agosto de 2010.

<sup>161</sup> Reunión entre el partido de Lina Ron, Unidad Popular Venezolana, y la prensa extranjera, oficinas de la Asociación de Prensa Extranjera, Apex, Caracas Hilton, 2005.

<sup>162</sup> La Policía Metropolitana está a cargo del área metropolitana de Caracas.

<sup>163</sup> Oscar Medina, “La conexión Carapaica”, *El Universal*, 13 de junio de 2010.

<sup>164</sup> Otros ejemplos son los tres activistas de los Tupamaros que dispararon contra manifestantes de la oposición en una plaza pública el 16 de agosto de 2004, matando a Maritza Ron, de 62 años, e hiriendo a ocho personas más. Fueron condenados a siete u ocho años en 2007, pero las condenas fueron reducidas de

La influencia de los colectivos alcanzó un punto alto durante el periodo 2004-2008, bajo la administración del alcalde metropolitano de Caracas, Juan Barreto, aliado cercano de Chávez. Una de las primeras acciones de Barreto fue nombrar al jefe de los Tupamaros, Alberto “El Chino” Carías, subdirector de seguridad ciudadana e incorporar a muchos integrantes de ese grupo a la Policía Metropolitana.<sup>165</sup> En 2008, cuando Barreto fue reemplazado por el alcalde de la oposición, Antonio Ledezma, supuestamente había unos 7.000 activistas chavistas en la nómina de la ciudad, algunos operando como policías vestidos de civil, como agentes de inteligencia o como guardaespaldas de políticos del Gobierno.<sup>166</sup>

Aunque la postura oficial del Gobierno es que sólo las fuerzas de seguridad del Estado pueden portar armas de manera legítima en defensa de éste, no se ha intentado seriamente desarmar a los colectivos. Aquellos que están familiarizados con sus dirigentes dicen que ellos resistirían cualquier medida de esa índole, incluso si viniera del Presidente.<sup>167</sup> Entre sus armas tienen, supuestamente, no sólo rifles au-

---

inmediato por diecisiete meses en reconocimiento de trabajo y estudios que, según se ha dicho, se desarrolló cuando estaban en poder de la policía, y fueron transferidos a una prisión abierta.<sup>165</sup> “Revelan que Chávez reclutó a los Tupamaros para golpe del 92”, *El Universal*, 6 de diciembre de 2004.

<sup>166</sup> Conferencia de prensa de asistentes de Antonio Ledezma, diciembre de 2008. “Caracas gunmen vanish from city payroll”, *Miami Herald*, 26 de diciembre de 2008. Barreto fue posteriormente acusado de corrupción por la Fiscalía, pero no ha sido enjuiciado y ya no tiene un puesto oficial. Las autoridades nunca reconocieron haber contratado a pistoleros civiles. Tampoco se distanciaron de ello. Usaron el posterior rechazo a los activistas por parte de Ledezma como pretexto para ocupar la alcaldía en 2008, con el apoyo de policías uniformados y pistoleros civiles. Ledezma aún no ha recuperado sus oficinas. Barreto no es el único chavista de alto rango que tiene vínculos con los colectivos. El antiguo vicepresidente Diosdado Cabello, actualmente diputado del PSUV en el Parlamento y considerado durante mucho tiempo el número dos en la jerarquía chavista, reconoció una relación política cercana con Lina Ron, con quien solía aparecer en público. El antiguo alcalde chavista del municipio del Libertador en Caracas, Freddy Bernal, también un integrante importante del partido de gobierno, ha defendido a los colectivos, diciendo que han sido “demonizados” y que trabajaron con las autoridades para controlar la delincuencia. “Bernal niega existencia de bandas en el 23”, *El Universal*, 10 de julio de 2006. Bernal ha sido acusado de distribuir armas a los grupos. Carlos Melo en documental de televisión “Los Guardianes de Chávez”, Canal 4 de España y CNN Plus, junio de 2010. El jefe de los Carapaicas, quien se autodenomina el Comandante Murachi, es, según se dice, agente de la Policía en Libertador. Entrevistas realizadas por consultor de Crisis Group en capacidad anterior, ex-oficial de inteligencia militar (DGIM), 2009; asociado de Juan Barreto, Caracas, 21 de abril de 2006.

<sup>167</sup> Entrevista realizada por consultor de Crisis Group en capacidad anterior, Lisandro Pérez alias “Mao”, prefecto de la parroquia del 23 de Enero y antiguo Tupamaro, 2007.

tomáticos (incluyendo AK-47s) sino también metralletas, granadas de fragmentación y botellas de gas lacrimógeno.<sup>168</sup> Estas últimas se han usado en ataques contra la oposición. Según información encontrada en los archivos del computador que fue incautado en el campamento del cabecilla de las FARC alias “Raúl Reyes”, la guerrilla estaba en contacto con algunos de los colectivos a partir de 2002 (en particular con los Carapaicas y los Tupamaros) e incluso les dio entrenamiento militar.<sup>169</sup> En años recientes las acciones armadas de los colectivos por fuera del 23 de enero han sido menos visibles. Sin embargo, si la situación política se deteriorara, como ocurrió entre 2001 y 2004, al menos algunos de los elementos extremistas que están allí podrían cumplir su promesa de atacar a grupos antichavistas.<sup>170</sup>

## V. DETERIORO INSTITUCIONAL

Una característica importante del régimen de Chávez ha sido su compromiso, desde el comienzo, con el reemplazo, la reestructuración o el cambio de nombre de todas las instituciones nacionales. El argumento, compartido por una mayoría de los venezolanos cuando el Presidente subió al poder en 1999, era que en todos los ámbitos de la vida nacional las élites se habían vuelto corruptas junto con las instituciones que dirigían. Si bien era cierto el deterioro institucional de gobiernos anteriores y la corrupción, este análisis dio pie a que el Presidente buscara, de manera constante, centralizar todo el poder y la toma de decisiones en sus propias manos y en la de sus adeptos. Durante buena parte de la presidencia de Chávez (en particular tras el boicot de la oposición a las elecciones legislativas de 2005) el parlamento ha operado prácticamente como un instrumento de aprobación automática de las políticas del ejecutivo. Además, en cuatro ocasiones el Presidente ha solicitado y recibido la potestad de emitir decretos sobre temas ampliamente definidos, en particular sobre la delincuencia y la seguridad ciudadana, confiando así las tareas de diseño y aprobación de normas y políticas públicas a un puñado de individuos entorno a él y que piensan de manera muy similar.<sup>171</sup>

El control del parlamento también le ha dado al ejecutivo la facultad de monopolizar los nombramientos en otros órganos claves del Estado: el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y los integrantes del “Poder Ciudadano”,<sup>172</sup> con el resultado de que, en años recientes, ninguno de estos órganos ha desafiado al Gobierno en temas sustanciales. Por consiguiente, los funcionarios públicos, junto con el sistema judicial y otras ramas del Gobierno, perdieron la autonomía sustancial que se necesita para mantener un sistema adecuado de pesos y contrapesos.<sup>173</sup> La corrupción, la impunidad y la

<sup>171</sup> Para un repaso de desarrollos institucionales desde 2005, véase Crisis Group Informe sobre América Latina N°19, *Venezuela: La Revolución de Hugo Chávez*, 22 de febrero de 2007; y Crisis Group Boletín, *Venezuela: Acelerando la Revolución Bolivariana*, op. cit. Ramón Guillermo Aveledo, “Consecuencias institucionales de la presidencia de Hugo Chávez”, en *Hugo Chávez*, op. cit, pp. 47–68.

<sup>172</sup> La Constitución de 1999 aumentó las ramas del gobierno a cinco de las tradicionales tres. Se añadieron la autoridad electoral (Consejo Nacional Electoral/CNE) y el Poder Ciudadano (Rama Ciudadana o Rama Moral), conformado por la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Contraloría General.

<sup>173</sup> “A Decade under Chávez”, Human Rights Watch, septiembre de 2008. En el “Rule of Law Index” publicado el 13 de junio de 2011 por el World Justice Project, Venezuela es el país con peor rendimiento entre los 66 países incluidos en cuanto a rendición de cuentas y controles eficaces sobre el poder ejecutivo, [www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index](http://www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index).

<sup>168</sup> “20 Pelotones Armados”, op. cit.

<sup>169</sup> “Las FARC mantienen contacto con grupos armados Bolivarianos de Venezuela desde 2002”, *El Tiempo*, 7 de febrero de 2010.

<sup>170</sup> Entrevista de Crisis Group, criminólogo, Caracas, 13 de abril de 2011.

ineficiencia han sido resultados obvios. Los efectos de este declive institucional han sido particularmente evidentes en el sistema de justicia y en las fuerzas de seguridad. El Presidente también ha organizado y armado a ciudadanos con fines de defensa interna, generando de esta manera la amenaza de resolver conflictos internos por fuera de los canales democráticos e institucionales.

## A. IMPUNIDAD

Aunque el aumento súbito del crimen violento en años recientes tiene muchas causas, hay un consenso amplio de que la impunidad es una de las principales razones, por no decir la más importante.<sup>174</sup> Las organizaciones adeptas al Gobierno, y a veces incluso el mismo Presidente, han lanzado insultos contra las instituciones encargadas de combatir la delincuencia, como la Fiscalía, por no ser lo suficientemente eficaces.<sup>175</sup> El Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora, una organización de corte chavista, por ejemplo, reclamó en 2009 que la Fiscalía parecía no tener interés en investigar más de 200 asesinatos de activistas campesinos ocurridos desde 2000.<sup>176</sup> Tal vez el ejemplo más expresivo de la supuesta falta de interés del Gobierno en ponerle fin a la impunidad es el de la familia Barrios, en el estado de Aragua; siete de sus miembros fueron asesinados, presuntamente por la policía estatal, entre 1998 y 2011. El último asesinato ocurrió poco después de una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que, además de responsabilizar al Estado venezolano por su protección, afirmaba que éste nunca ha investigado seriamente el caso.<sup>177</sup>

En 2009, según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), el 91 por ciento de las investigaciones de homici-

dios no condujo al arresto de un sospechoso.<sup>178</sup> Esto contrasta, según dice la organización, con 58 arrestos por cada 100 homicidios en 1998, el año anterior a que Chávez asumiera el poder. Cuando se les pregunta sobre las razones por el aumento en la impunidad, algunos expertos dicen que se hace demasiado poco para entrenar y preparar a la policía, a los fiscales y a los jueces en la manera de operar bajo el nuevo código penal, el cual privó a la policía de la conducción de las investigaciones y la transfirió al Ministerio Público.<sup>179</sup> Los fiscales tienen una carga laboral excesiva; un fiscal puede tener a cargo hasta 4.000 casos, la mayor parte de los cuales sólo se quedan en la etapa inicial. La policía informa que en algunas comunidades, los vecinos protestan cuando los delincuentes son arrestados porque creen que fácilmente serán puestos en libertad para luego volver a sus comunidades y tomar represalias contra aquellos que los denunciaron.<sup>180</sup>

Sin embargo, el sistema sobrecargado, corrupto y mal preparado es sólo parte del problema. Los juzgados también están sujetos a presiones políticas que son difíciles de resistir, pues más de la mitad de los jueces carecen de seguridad laboral y pueden ser despedidos sin notificación previa.<sup>181</sup> La jueza María Lourdes Afiuni fue arrestada el 10 de diciembre de 2009 después de que Chávez la tildó públicamente de “bandida” y dijo que debía pagar 30 años de cárcel. Su falta fue firmar una orden de excarcelación para el banquero Eligio Cedeño, quien llevaba casi tres años detenido sin juicio, una vulneración de derechos contemplada por la ley venezolana. Acusada de “corrupción”, aunque los fiscales no pudieron mostrar que se había beneficiado de su fallo, permanece bajo arresto, a pesar de los llamados de tres relatores de la ONU pidiendo su libertad incondicional.<sup>182</sup> En otro caso, el Gobierno despidió a cinco jueces y cerró un juzgado que había emitido fallos que consideraba hostiles.<sup>183</sup> Posteriormente, fueron re-

<sup>174</sup> “Una década de impunidad en Venezuela”, OVV, marzo de 2010, p. 10.

<sup>175</sup> “Chávez: declaraciones de Presidenta del TSJ fueron ‘muy buenas’”, Noticiero Digital, 6 de diciembre de 2009.

<sup>176</sup> “Campesinos Asesinados en Venezuela desde el 2001, Impunidad se Mantiene y Resiste”, Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora, 25 de junio de 2009, actualizado el 26 de octubre de 2010, p. 3.

<sup>177</sup> “La Comisión Interamericana condena atentado contra otro miembro de la familia Barrios en Venezuela” y “CIDH deplora asesinato de séptimo miembro de la familia Barrios en Venezuela”, comunicados de prensa, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 14 de enero de 2011, 2 de junio de 2011. El acoso a la familia Barrios, según ellos mismos y organizaciones de derechos humanos, provino originalmente de una disputa insignificante sobre un servicio gratuito en un negocio de la primera víctima. Fue el hecho que la familia recurrió a la justicia lo que, al parecer, causó que muchos de ellos fueran asesinados o amenazados. El caso está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Familia Barrios vs. Venezuela”, 1 de junio de 2011.

<sup>178</sup> “Una década de impunidad en Venezuela”, op. cit. p. 26.

<sup>179</sup> “Código Orgánico Procesal Penal”, Congreso de la República; entrevista de Crisis Group, jefe de policía estatal, 1 de marzo de 2011.

<sup>180</sup> Entrevista de Crisis Group, jefe de policía estatal, 1 de marzo de 2011.

<sup>181</sup> “Democracia y Derechos Humanos en Venezuela”, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, diciembre de 2009, p. 66.

<sup>182</sup> Véase “Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2010, Sección del informe referida al caso de la Jueza María Lourdes Afiuni”, OEA/SER.L/V/II.Doc.5.corr1, 7 de marzo de 2011; Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, “Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers”, A/HRC/14/26, 9 de abril de 2010. “Venezuela: stop attacks on judicial independence”, Human Rights Watch, abril de 2008.

<sup>183</sup> “TSJ eliminó Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”, Venpres, 23 de octubre de 2003; Juan Carlos Apitz, “Si se puede ganar”, [www.juancarlosapitz.com/cidh.php](http://www.juancarlosapitz.com/cidh.php).

integrados dos que eran percibidos como favorables al gobierno, incluyendo el presidente actual del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, y desatendiendo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los otros no han sido reintegrados ni indemnizados, y el juzgado permanece cerrado.

## B. LA POLICÍA

Otro factor importante que ha fomentado los problemas de seguridad ciudadana es una policía disfuncional y abusiva. En diciembre de 2009, el ministro del interior y de justicia, Tarek El Aissami, reconoció que la policía estaba involucrada en el 15 o 20 por ciento de los delitos,<sup>184</sup> un porcentaje que, según algunos, es en realidad mayor.<sup>185</sup> El 93 por ciento de los encuestados en un sondeo de 2007 creía que la policía estaba involucrada en actividades delictivas.<sup>186</sup> Son miles los casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas, supuestamente, por agentes de las entidades policiales. Entre enero de 2000 y noviembre de 2007, la Fiscalía registraba 7.243 víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad, lo cual suscitó la encarcelación de 412 oficiales.<sup>187</sup> Según la ONG Cofavic, han aumentado los homicidios múltiples cometidos por fuerzas de seguridad desde 2007.<sup>188</sup> Más

del 20 por ciento de los asesinatos registrados se atribuyen a la policía de investigaciones (CICPC).<sup>189</sup>

Sin embargo, estas cifras muestran sólo una parte del panorama. Muchos asesinatos perpetrados por la policía se disfrazan bajo el concepto vago de “resistencia a la autoridad”, una figura que, según Provea, ha crecido de 1.355 casos en 2005 a 2.685 en 2009.<sup>190</sup> La policía rara vez tiene que rendir cuentas de ello, pues son los primeros en la escena del delito, lo cual les da una amplia oportunidad para manipular los hechos y las pruebas.<sup>191</sup>

Presionado por una protesta pública tras varios casos prominentes de asesinatos a manos de la policía, el ministro del interior y justicia anunció en abril de 2006 la constitución de una comisión para diseñar una propuesta de reforma policial (Comisión Nacional de Reforma Policial, CONAREPOL).<sup>192</sup> Conformada por dieciséis representantes estatales y no estatales,<sup>193</sup> y luego de un diagnóstico de las 123 fuerzas policiales estatales y municipales<sup>194</sup> y de

---

cuando se le ordenó hacerlo. En un voto en disenso, el magistrado Jorge L Rossell describió la acción del policía como una “vulneración extremadamente grave al derecho a la vida”. El magistrado Rossell renunció posteriormente a su cargo en la Corte Suprema, afirmando que el gobierno tenía una “política criminal de exterminio”. Irma Álvarez, “Pretenden implantar la política antidelictiva del ajusticiamiento”, *El Universal*, 24 de septiembre de 2000.

---

<sup>184</sup> “El ministro de Interior afirma que hasta un 20% de los crímenes violentos los comete la policía”, informe21, 6 de diciembre de 2009.

<sup>185</sup> Entrevista realizada por consultor de Crisis Group en capacidad anterior, diplomático europeo, Caracas, julio de 2010.

<sup>186</sup> “Encuesta Nacional de Victimización y Seguridad Ciudadana”, resultado del sondeo del Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO) presentado en Roberto Briceño-León, “La Policía y su reforma en Venezuela”, *Urvio Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana* no.2, Quito, septiembre de 2007, p. 167. Una consecuencia del alto grado de desconfianza entre la ciudadanía es la poca frecuencia con que los delitos se denuncian.

<sup>187</sup> “Informe Anual de la Fiscal General de la República. Año 2007”, Ministerio Público, p. 493.

<sup>188</sup> Cofavic es la abreviatura de Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989. “Informe para el Examen Periódico Universal de Venezuela de conformidad con la Resolución 5/1, aprobada el 18 de junio de 2007”, Cofavic, marzo de 2011, p. 3. El término “grupo de exterminio” fue acuñado en 1999 en referencia al escuadrón de la muerte que comenzó a operar en el estado de Portuguesa y que, según la entonces fiscal superior de ese estado, Elizabeth de la Cueva, asesinó a 101 personas en sus primeros tres o cuatro meses de existencia. La práctica se propagó posteriormente a muchos otros estados, incluyendo Falcón, Lara, Aragua, Guárico, Anzoátegui, Yaracuy y Bolívar. En ocasiones ha habido acusaciones, negadas por el gobierno, que esta forma de “limpieza social” no es simplemente una respuesta por parte de ciertos oficiales de la policía sino también una política oficial. En 1999, la sala penal de la Corte Suprema absolvió a un oficial de la policía que había matado a balazos a un hombre inocente que supuestamente no detuvo su automóvil

<sup>189</sup> “Informe para el Examen Periódico Universal de Venezuela de conformidad con la Resolución 5/1, aprobada el 18 de junio de 2007”, op. cit.

<sup>190</sup> “Situación de los Derechos Humanos”, op. cit., p. 358.

<sup>191</sup> La gran disparidad entre las víctimas policiales y los civiles en situaciones reportadas como “resistencia a la autoridad” (1 a 13,5) también cuestiona el concepto de enfrentamiento y subraya la manera extremadamente violenta de realizar actividades policiales. Situación de los Derechos Humanos”, op. cit., p. 385.

<sup>192</sup> Tres escándalos se consideran catalizadores morales para crear la CONAREPOL. Tres estudiantes universitarios fueron asesinados a tiros por equivocación en un oscuro operativo policial en el barrio capitalino de Kennedy (la “masacre de Kennedy”); un empresario fue secuestrado y asesinado en Aragua; y tres hijos adolescentes de otro empresario y su chofer fueron secuestrados y asesinados en Caracas. En todos los tres casos había participación directa de personal de la policía.

<sup>193</sup> CONAREPOL tenía representantes del Ministerio del Interior y Justicia, el Ministerio Público, la Asamblea Nacional, la Corte Suprema, la Defensoría del Pueblo, los gobiernos subnacionales, la policía de investigaciones, la comunidad empresarial, organizaciones de derechos humanos y universidades. Sólo un representante de la policía participó. Luis Gerardo Gabaldón, “La experiencia de CONAREPOL: Lecciones aprendidas e implicaciones sobre las políticas estatales de seguridad ciudadana”, documento de la conferencia. Seminario: La Seguridad Ciudadana como problema de Estado, Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS), 25 de junio de 2009, p. 2.

<sup>194</sup> En 2006, Venezuela tenía 24 cuerpos policiales estatales y 99 cuerpos policiales municipales, sumando un total de 69.000

percepciones<sup>195</sup>, la comisión formuló recomendaciones. Detectó la superposición y confusión de funciones entre las fuerzas, al igual que la falta de parámetros claros y uniformes. Todo lo anterior contribuía, según el diagnóstico, al comportamiento discrecional, la injerencia política, la ineficiencia y el abuso. Hacían falta políticas claras de ingreso y ascenso, al igual que mecanismos de gestión de desempeño y disciplina, así como criterios para la capacitación y el uso de armas de fuego.<sup>196</sup> Por ejemplo, al ingresar, sólo 17 por ciento de las fuerzas requería un grado específico de formación, y sólo 16 por ciento un grado particular de destreza física. En un 70 por ciento de los casos no se revisaba si los reclutados tenían antecedentes penales y más de 75 por ciento no tenía manual de procedimientos.<sup>197</sup>

La injerencia política en la policía ha sido un factor constante. En medio de un entorno de creciente polarización, las fuerzas estatales y municipales están sujetas al tire y afloje entre el Gobierno Nacional y los gobiernos locales. El caso de la Policía Metropolitana de Caracas (PM) es emblemático. Acusándola de haber participado en el fallido golpe en su contra en abril de 2002, el presidente Chávez envió siete meses después tropas con vehículos blindados para tomar sus instalaciones y arrebatarle el control del cuerpo policial de 9.000 miembros al alcalde de la oposición, Alfredo Peña. La justificación era una aparente disputa al interior de la policía, con el apoyo desde afuera de fuerzas políticas adeptas al Gobierno Nacional.<sup>198</sup> La

---

oficiales, y cinco cuerpos policiales nacionales: La Guardia Nacional, formalmente parte de las fuerzas armadas; la policía de investigaciones (CICPC); la policía de tránsito; el servicio de inteligencia (la DISIP, ahora el SEBIN); y la policía marítima. “Características de la Policía Venezolana”, CONAREPOL, Caracas, 2006, pp. 33-35.

<sup>195</sup> El diagnóstico incluyó una encuesta nacional de victimización y percepción de la policía de más de 5.000 hogares y 121 ejercicios de grupos focales de discusión con más de 5.000 integrantes participantes de grupos específicos. CONAREPOL trabajó durante nueve meses.

<sup>196</sup> “Características de la Policía Venezolana”, op. cit., p. 49. Esto es en parte el resultado de una proliferación mal manejada que tuvo lugar en el contexto de la descentralización nacional que comenzó a finales de la década de 1980. Las nuevas autoridades que habían sido elegidas democráticamente querían crear su propia línea directa de control sobre asuntos de seguridad. El número de fuerzas policiales subnacionales subió de 22 (1989) a 123 (2006) y luego a más de 125 (2009). “La policía y su reforma en Venezuela”, op. cit., pp. 165-166. Kiraz Janicke, “Venezuela launches new national police force to transform policing model”, venezuelaanalysis.com, 21 de diciembre de 2009.

<sup>197</sup> “Características de la Policía Venezolana”, op. cit., pp. 49, 95.

<sup>198</sup> Véase la cronología de la intervención en “Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, Informe Anual octubre 2002-septiembre 2003”, PROVEA, pp. 369-372.

“intervención” duró un año, durante el cual la PM perdió su arsenal de armas automáticas, que nunca le fue devuelto.<sup>199</sup>

Con 429 agentes de la policía por cada 100.000 habitantes, Venezuela tiene uno de los mayores números de policía por habitante en América Latina.<sup>200</sup> Sin embargo, lo anterior no fomenta ni el control ni la prevención eficaz de la delincuencia. Según hallazgos de la CONAREPOL, sólo 52 por ciento de los oficiales realiza tareas relacionadas con la seguridad ciudadana,<sup>201</sup> y con demasiada frecuencia se trata de operaciones a gran escala que, según lo que dijo un jefe de policía entrevistado por Crisis Group, a menudo producen el “efecto cucaracha”, es decir, los objetivos de los operativos sencillamente desaparecen de su antigua ubicación y reaparecen en otro lugar.<sup>202</sup> Además, el número de policías en varios municipios y estados tiene poca correlación con las tasas de delincuencia.<sup>203</sup> CONAREPOL también identificó una fuerte influencia y doctrina militar en la policía, junto con procedimientos internos deficientes de control y rendición de cuentas.<sup>204</sup>

En 2008, un año después de que CONAREPOL presentó su informe,<sup>205</sup> el Presidente decretó la creación de un siste-

---

<sup>199</sup> “Ministro Rincón afirma que las armas de la PM no serán devueltas”, Noticiero Venevisión, 13 de octubre de 2003. Peña fue sucedido por el adepto a Chávez, Barreto, en 2004, bajo quien la PM supuestamente fue infiltrada por los colectivos y otros grupos armados. (Véase la sección IV.C).

<sup>200</sup> “Características de la Policía Venezolana”, op. cit., p. 40 (sólo la República Dominicana y Argentina tenían una tasa superior al momento del informe de CONAREPOL. Según un estudio de 2009, el promedio latinoamericano fue de 346 por 100.000 en ese año. “Venezuela es el quinto país con más policías en la región”, *El Nacional*, 17 de septiembre de 2009.

<sup>201</sup> Casi el 35 por ciento de los oficiales trabajan como guardias, como escoltas y en “servicios generales”, “Características de la Policía Venezolana”, op. cit., p. 44.

<sup>202</sup> Entrevista de Crisis Group, 1 de marzo de 2011.

<sup>203</sup> “Características de la Policía Venezolana”, op. cit. p. 43. Entrevista de Crisis Group, criminólogo, Caracas, 13 de abril de 2011.

<sup>204</sup> Menos del 20 por ciento de las fuerzas abren una investigación cuando un oficial está involucrado en la muerte o daños a un civil. “Características de la Policía Venezolana”, op. cit. p. 60. CONAREPOL describió la policía como una “organización paramilitar”, que se refleja en la dirigencia militar (la mayoría de las fuerzas estatales y municipales están bajo mando militar), la prevalencia de símbolos y términos militares, las modalidades de entrenamiento, el armamento y una relación con la ciudadanía basada en una lógica de guerra que a su vez genera una mayor propensión al abuso y el uso de la fuerza física, *ibíd.*, pp. 52-54.

<sup>205</sup> Las recomendaciones de CONAREPOL fueron centradas en la creación de un sistema integral con una clara delimitación de las funciones y mecanismos de coordinación eficaces entre las fuerzas policiales, todo bajo mando civil. Propuso la creación de una carrera profesional de policía y pidió la aplicación de principios de derechos humanos, al igual que mecanismos claros de rendición de cuentas y control independientes. Las armas

ma integrado de policía y una Policía Nacional mediante una nueva ley orgánica que reflejaba muchas de las recomendaciones de la comisión.<sup>206</sup> La ley dispuso la eliminación progresiva de la PM y conservó las fuerzas estatales y municipales. El Consejo General de Policía fue establecido en 2009, el mismo año que entró en vigencia formal la Policía Nacional. El Consejo operaría como ente interinstitucional encargado de asesorar al Ministerio del Interior y de Justicia entorno a políticas conexas a la policía, y a criterios y procedimientos unificados.<sup>207</sup> También en 2009 fue fundada la Universidad Nacional Experimental de Seguridad (UNES), con el objetivo de capacitar a integrantes de la policía en todos los niveles, incluyendo reclutas.

Si bien la iniciativa ha recibido bastante reconocimiento por parte tanto de adeptos como de críticos del Gobierno, la implementación ha sido más bien lenta. Pese al anuncio del Presidente de que para el final de 2011 la Policía Nacional tendría 16.722 integrantes, a mediados de junio sólo 4.600 eran integrantes activos, y 2.609 más de la UNES están programados para ser integrados en septiembre. Además, la presencia del cuerpo aún se limita a la capital.<sup>208</sup> Los críticos han señalado falencias en el proceso de evaluación y el hecho de que el nuevo cuerpo no ha escapado del proceso general de politización de la mayoría de las

---

y municiones no registradas deben ser prohibidas; el uso de uniformes e identificación apropiada debe ser obligatorio. “Recomendaciones Generales”, Comisión Nacional para la Reforma Policial, May 2007. Según el analista Briceño-León, las recomendaciones estaban centradas particularmente en la prevención y control de abusos en vez de asuntos de eficiencia: “La policía y su reforma en Venezuela”, op. cit., pp.170-171.

<sup>206</sup> “Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional”, op. cit. La ley contiene disposiciones sobre la delimitación de funciones entre las fuerzas policiales, reclutamiento, entrenamiento, ascensos, coordinación, control y operaciones.

<sup>207</sup> El Consejo está dirigido por Soraya El Achkar, antigua secretaria técnica de CONAREPOL, quien también es la directora de la UNES. La Policía Nacional tiene el deber de entrar en acción en aquellos casos en que las operaciones excedan (a) las fronteras geográficas o (b) las capacidades de las fuerzas estatales y municipales. Entre los ámbitos específicos de responsabilidad de la Policía Nacional están la aduana, las escoltas diplomáticas y la protección de individuos, la migración y los secuestros. “Atribuciones de la Policía Nacional”, Consejo General de la Policía, Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, [www.policianacional.gob.ve/index.php/la-nueva-policia-nacional/atribuciones-policia-nacional](http://www.policianacional.gob.ve/index.php/la-nueva-policia-nacional/atribuciones-policia-nacional).

<sup>208</sup> Información suministrada por Luis Fernández, director de la PNB, quien declaró que los reclutamientos adicionales en septiembre le permitirían a la fuerza expandir su presencia a las parroquias caraqueñas de Antimano y La Vega y que 34.000 solicitantes adicionales (incluyendo 12.000 en Caracas) estaban siendo evaluados. “2.690 pasantes se incorporarán a la Policía Nacional Bolivariana en septiembre”, Agencia Venezolana de Noticias, 17 de junio de 2011.

instituciones públicas, reflejado no sólo en el cambio de su nombre a Policía Nacional Bolivariana (PNB), sino también en la existencia de mecanismos irregulares de ingreso, lo que se observa como una confirmación de que al Gobierno le interesa más reforzar su control sobre la policía que profesionalizarla.<sup>209</sup> Otra preocupación es el riesgo de que miles de oficiales de la Policía Metropolitana que no ingresarán a la PNB y para quienes el Gobierno parece no tener un plan alternativo, podrían ingresar a las filas de la delincuencia.<sup>210</sup>

### C. LAS FUERZAS ARMADAS

Las fuerzas armadas, pieza fundamental del proyecto bolivariano, han estado sujetas a varias intervenciones y procesos de alineación bajo el gobierno de Chávez. Junto con la nueva Constitución de 1999, cuatro reformas posteriores a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFAN)<sup>211</sup> cambiaron profundamente su carácter, doctrina y estructura interna.

En primer lugar las reformas centralizaron las estructuras de mando y reforzaron el control del ejecutivo sobre las fuerzas armadas. La Constitución de 1999 abolió la autonomía que tenían las cuatro fuerzas armadas entre sí al crear un Estado Mayor Conjunto bajo el control directo del Presidente, quien actúa como comandante en jefe. La Constitución también eliminó el control de la rama legislativa sobre los ascensos de militares de alto rango.<sup>212</sup>, y

---

<sup>209</sup> Entrevista de Crisis Group, ex oficial de la policía, Caracas, 28 de febrero de 2011. La evaluación previa se refiere a la transición de los integrantes de la PM a la PNB, en el curso de la cual los aspirantes se sometieron a exámenes psicológicos y entrenamiento. Algunos oficiales de la PM afirman que muchos policías buenos se quedaron por fuera, mientras que malos fueron contratados. Para abril de 2011, 50 integrantes de la PNB ya habían sido acusados de delitos. “La peligrosa agonía de la PM”, op. cit.

<sup>210</sup> El 29 de marzo de 2011, el gobierno ordenó la disolución de la PM en tres meses, con la posibilidad de otra prórroga de tres meses. Para abril de 2011, 3.238 oficiales de la PM habían sido trasladados a la Policía Nacional. “La peligrosa agonía de la PM”, op. cit. Los tres meses iniciales se habían cumplido a finales de junio con unos 4.800 oficiales de la PM aún sin perspectivas alternas. “Metropolitanos piden al MIJ cargo de policía”, Últimas Noticias, 29 de junio de 2011. Véase también: “Policías metropolitanos protestan ante MIJ”, *El Universal*, 29 de junio de 2011.

<sup>211</sup> La Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (LOFAN) fue aprobada en 2005 y reemplazó una ley de 1995; se reformó en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (LOFANB) en 2008. Desde entonces, la LOFANB 2008 ha sido parcialmente reformada dos veces, en 2009 y en 2011.

<sup>212</sup> En la mayoría de los países latinoamericanos, el Presidente es el comandante en jefe, pero no ejerce control operacional sobre las fuerzas armadas. “Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional”, Gaceta Oficial no. 38.280, 26 de septiembre de

en 2005 el Presidente asumió personalmente el comando operacional.<sup>213</sup> Además, Chávez ha hecho uso extendido de una disposición de la ley orgánica de 2008 que obliga a los oficiales a jubilarse si no los han ascendido al cabo de dos años.<sup>214</sup> Haciendo caso omiso de jerarquías internas y órdenes de ascenso, logró así la eliminación de centenares de adversarios reales o potenciales.<sup>215</sup> La reciente conversión de antiguos suboficiales profesionales en oficiales técnicos generó una situación en la cual había individuos que resultaron siendo los jefes de sus antiguos superiores.<sup>216</sup> El control presidencial supuestamente es reforzado por asesores cubanos, quienes, según se dice, mantienen una fuerte vigilancia sobre la cúpula militar.<sup>217</sup>

En segundo lugar, la Constitución de 1999 y las leyes posteriores reforzaron la noción de una alianza cívico-militar en asuntos de defensa, seguridad y desarrollo, dándole así a las fuerzas militares una responsabilidad central en la ejecución del proyecto bolivariano.<sup>218</sup> A través de los años,

las fuerzas armadas se han vuelto cada vez más activas en la lucha contra la delincuencia,<sup>219</sup> pero también se les ha encomendado la tarea de ejecutar órdenes de expropiación de tierras y reprimir protestas civiles.<sup>220</sup> Además, se estima que más de 2.000 integrantes de las fuerzas armadas ocupan puestos públicos civiles,<sup>221</sup> al mismo tiempo que los oficiales militares participan de manera activa en proyectos sociales y económicos, comenzando con el Plan Bolívar en el año 2000.<sup>222</sup> Otra expresión de la alianza cívico-militar fue la creación de la Guardia Territorial en 2005, transformada en milicias y formalmente integrada a las fuerzas armadas en 2008, lo cual implica la movilización y militarización de civiles para fines de defensa nacional (véase la sección V.D).

En tercer lugar, las fuerzas armadas experimentaron un proceso profundo de politización. En 2007, una enmienda constitucional que el Presidente presentó ante la Asamblea Nacional declaraba que:

La Fuerza Armada Bolivariana constituye un cuerpo esencialmente patriótico popular y antimperialista organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación, preservarla de cualquier ataque externo o interno y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante el estudio, planificación y ejecución de la doctrina militar bolivariana, la aplicación de los principios de la defensa militar integral y la guerra popular de resistencia, la participación permanente en tareas de mantenimiento de la seguridad ciudadana, y conservación del orden interno, así como la participación activa en planes para el desarrollo econó-

---

2005; esta reforma (LOFAN 2005) dividió las líneas de mando: el mando operacional fue dado al Presidente; el Ministerio de Defensa asumió el mando administrativo. Véase también, Francine Jacome, "Venezuela: Defensa y Seguridad. Bolivarianismo y socialismo del siglo XXI", en Hans Mathieu, Catalina Niño Guarnizo (editores), *Seguridad Regional en América Latina y el Caribe, Anuario 2010*, Bogotá, p. 287.

<sup>213</sup> El artículo 236 de la Constitución facultó al Presidente para ascender a oficiales del rango de coronel en adelante. Anteriormente esto había sido una prerrogativa del Senado. Francesca Ramos y Andrés Otálvaro, "La Fuerza Armada Nacional en la Revolución Bolivariana", *Revista Desafíos*, vol. 18, 2008, p. 23.

<sup>214</sup> La disposición esta contenida en el artículo 92 de la LOFANB 2008, *Gaceta Oficial*, 5891.

<sup>215</sup> Entrevista de Crisis Group, experto en seguridad, Caracas, 3 de marzo de 2011. El 13 de abril de 2010, el Ministerio de Defensa anunció el retiro de 193 integrantes de la institución militar. "Informe Anual 2010-2011", Asociación Civil Control Ciudadano, op. cit., p.74. Véase también: Rory Carroll, "Venezuela: army unrest, grows over Chávez reforms", *The Guardian*, 7 de julio de 2008.

<sup>216</sup> Entrevista de Crisis Group, experto en seguridad, Caracas, 3 de marzo de 2011. "Informe Anual 2010-2011", Asociación Civil Control Ciudadano, op. cit., pp.15-16.

<sup>217</sup> Se dice que alrededor de 5.000 cubanos trabajan en los órganos de la inteligencia y contrainteligencia venezolanas. Entrevista de Crisis Group, experto en seguridad, Caracas, 3 de marzo de 2011. Véase también "Special report: Venezuela's control of the armed forces", Stratfor Global Intelligence, 3 de mayo de 2010, p. 4.

<sup>218</sup> La Constitución estableció una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad para la seguridad y la defensa. Esto se reafirma en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación de 2000, *Gaceta Oficial* no. 37.594, 18 de diciembre de 2002, en el marco del concepto de "seguridad y defensa integral". Francine Jacome, op. cit., pp. 286-287. La LOFAN de 1983 y la de 1995 habían ya encomendado tareas de desarrollo interno a la institución militar. Sin embargo, éstas fueron reafirmadas en un mandato constitucional en 1999 que especificó que la participación

---

debe ser "activa". "La Fuerza Armada Nacional en la Revolución Bolivariana", op. cit., p. 25.

<sup>219</sup> El artículo 328 de la Constitución asigna a las fuerzas armadas el rol de "cooperar en el mantenimiento de orden interno". La Guardia Nacional (GN), que ha intervenido tradicionalmente cuando los escuadrones de la policía eran insuficientes, es parte de las fuerzas armadas; su acción en la represión de protestas civiles ha despertado muchas acusaciones de violaciones de derechos humanos. Se sigue usando en labores de control de la delincuencia, sobre todo en el marco del Dispositivo Bicentenario de Seguridad (DIBISE) (Sección III.A). "Informe Sobre Situación de Convivencia y Seguridad Ciudadana en Venezuela", Paz Activa, 18 de marzo de 2011, p. 3.

<sup>220</sup> Francine Jacome, op. cit., p. 287. Deborah Norden, "Civilian authority without civilian dominance? Assessing Venezuelan political-military relations under Chávez", *Revista Nueva Sociedad* no.213, enero-febrero de 2008, p. 14. "Informe Anual 2010-2011", Asociación Civil Control Ciudadano, op. cit., p. 72.

<sup>221</sup> Entrevista de Crisis Group, ONG internacional, Caracas, 2 de marzo de 2011 "Fuerzas Armadas de Venezuela: A los 200 años", de autoría de un grupo anónimo de oficiales subalternos y de rango medio (Comacates), diciembre de 2010, p. 2.

<sup>222</sup> Norden, op.cit, p.14.

mico, social, científico y tecnológico de la nación, de acuerdo con esta Constitución y la ley.<sup>223</sup>

La reforma constitucional no fue adoptada, pero el Presidente logró su implementación de facto mediante una ley habilitante y un decreto.<sup>224</sup> Contrario a la Constitución de 1999, la cual estableció que las fuerzas armadas eran una “institución esencialmente profesional, sin militancia política”, la LOFANB de 2008 las convirtió en la “Fuerza Armada Nacional Bolivariana” (FANB). “Patria, socialismo o muerte”<sup>225</sup> se volvió el saludo oficial de la institución. El general Henry Rangel Silva, director del Comando Estratégico Operacional (CEO), dijo en noviembre de 2010 que la “la Fuerza Armada Nacional no tiene lealtades a medias sino completas hacia un pueblo, un proyecto de vida y un comandante en jefe. Nos casamos con este proyecto”.<sup>226</sup>

Los anteriores sucesos han tenido costos altos. Las políticas poco ortodoxas del Presidente frente a los ascensos de los oficiales, la politización de las fuerzas armadas y la creación de las milicias como un cuerpo armado paralelo provocaron descontento y divisiones en la institución.<sup>227</sup> En abril de 2010, el general del ejército Antonio Rivero

González, otrora chavista, explicó públicamente que su solicitud de retiro se debía a la intromisión de militares cubanos en las fuerzas armadas venezolanas.<sup>228</sup> Una experta en asuntos militares afirma que alrededor de 200 integrantes de las fuerzas militares, principalmente de los altos rangos, se jubilan anualmente a raíz de su descontento.<sup>229</sup> Los aliados del Presidente que se han resistido a los cambios han terminado en la cárcel. De ellos el más prominente fue el ex ministro de defensa, el general Raúl Isaías Baduel, quien protestó contra la reforma constitucional propuesta en 2007.<sup>230</sup> Un aumento salarial de 40 por ciento para todos los rangos, anunciado en abril de 2010, se ha interpretado como una medida de compensación por dicho descontento.<sup>231</sup>

El otro precio que el Presidente parece dispuesto a pagar a cambio de lealtad es la implicación de altos mandos militares y sus subordinados en delitos. Las acusaciones abundan, no sólo desde la captura de un presunto capo venezolano del narcotráfico, Walid Makled, en agosto de 2010. En septiembre de 2008, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos añadió a su lista de capos del narcotráfico a tres altos funcionarios venezolanos, acusándolos de “brindar ayuda significativa a las guerrillas colombianas de las FARC en el narcotráfico”. Entre ellos estaba el antes mencionado General Silva.<sup>232</sup> Se dice que el llamado Cartel de los Soles (una referencia a las insignias en las charreteras de los generales) tiene un papel importante en el narcotráfico venezolano.<sup>233</sup> Según reportes, la corrupción entre los mandos medios y bajos está facilitando las operaciones del crimen organizado a lo largo del país. Algunos jóvenes guardias nacionales están compitiendo para conseguir puestos en regiones fronterizas, atraídos por las posibilidades de sobornos lucrativos en el tráfico ilícito de

<sup>223</sup> Artículo 328, Proyecto de Reforma de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; Norden, op. cit., pp. 14, 16.

<sup>224</sup> Mediante una ley habilitante, la Asamblea Nacional puede autorizar al Presidente a gobernar mediante decretos. Francine Jacome, op. cit., p. 288.

<sup>225</sup> Más tarde convertido en “Patria socialista o muerte”.

<sup>226</sup> “Informe Anual 2010-1011”, Asociación Civil Control Ciudadano, op. cit., p. 90; Yolanda Valery, “Venezuela: Ascendido general ‘casado’ con gobierno de Chávez”, BBC Mundo, 18 de noviembre de 2010. El general agregó que el pueblo y las fuerzas armadas no aceptarían un gobierno de oposición, lo cual fue interpretado por algunos como una advertencia de una rebelión en caso de una victoria de la oposición. Dos días después, el secretario general de la OEA José Miguel Insulza, expresó que le preocupaba que un comandante del ejército amenazara con una rebelión, pero su preocupación fue rechazada por Chávez. “Informe Anual 2010-1011”, Asociación Civil Control Ciudadano, op. cit., p. 91. Control Ciudadano nota que no pocos integrantes activos de la institución militar, incluyendo altos oficiales, son integrantes del partido de gobierno PSUV. “Informe Anual 2010-1011”, Asociación Civil Control Ciudadano, op. cit., pp. 65-66.

<sup>227</sup> Algunos expertos dicen que el ejército está verticalmente dividido entre “constitucionalistas”, quienes están comprometidos con un mandato que no es político; “neutrales”, quienes forman la mayor parte; y adeptos a Chávez. Se comenta que las tendencias predominantes son distintas en las ramas de servicios. La Marina ha estado tradicionalmente en contra de Chávez; la Fuerza Aérea está dividida; el Ejército y la Guardia Nacional dan el apoyo más fuerte a Chávez. También hay divisiones horizontales: la línea anti-Chávez es más fuerte en los rangos inferiores debido a la falta de aumentos salariales y beneficios adicionales. Entrevistas de Crisis Group, ex general, 28 de febrero de 2011, experto en seguridad, 2 de marzo de 2011, ambos en Caracas.

<sup>228</sup> Informe Anual 2010-1011”, Asociación Civil Control Ciudadano, op. cit., p. 76.

<sup>229</sup> Entrevista de Crisis Group, Caracas, 2 de marzo de 2011.

<sup>230</sup> Baduel fue condenado por corrupción y sentenciado a casi ocho años de prisión en mayo de 2010.

<sup>231</sup> “Special Report”, Stratfor, op. cit., p. 2.

<sup>232</sup> Los otros dos eran el antiguo ministro del interior Ramón Rodríguez Chacín y Hugo Carvajal (el entonces jefe de inteligencia militar, DGIM, ahora presidente de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, Cantv-). “Additional Designations, Foreign Narcotics Kingpin Designation Act”, Oficina de Control de Bienes Extranjeros, Departamento del Tesoro de los EE.UU., 19 de septiembre de 2008. “Treasury targets Venezuelan government officials supporting the FARC”, comunicado de prensa, Washington D.C., 12 de diciembre de 2008.

<sup>233</sup> Entrevista de Crisis Group, ex alto funcionario público, Caracas, 1 de marzo de 2011. Véase también, Geoffrey Ramsey, “Venezuela Seizes Almost 7 Tons Cocaine Hidden in Heavy Machinery”, InSight, 8 de julio de 2011.

gasolina, entre otros, aún si hay que entregar una buena parte de dichos sobornos a sus superiores.<sup>234</sup>

Walid Makled fue capturado en agosto de 2010 por las autoridades colombianas y se convirtió en pieza central en las relaciones entre Caracas y Bogotá, pues se creía que tenía abundante información sobre la participación de altos mandos militares y sectores de la cúpula política venezolana en negocios sucios. Estando aún detenido en Colombia, dijo que 40 generales venezolanos activos habían estado en su nómina y que él había sobornado y cooperado con altos funcionarios del Gobierno y de las fuerzas militares en negocios de narcotráfico.<sup>235</sup> La cooperación incluía más de dos millones de dólares en contribuciones a las campañas del partido de gobierno, PSUV.<sup>236</sup> Estados Unidos estima que Makled ingresaba a su territorio hasta diez toneladas de cocaína cada mes.<sup>237</sup> El presidente Santos anunció, a finales de 2010, que Makled sería extraditado a Venezuela, no a Estados Unidos, que también había presentado una solicitud,<sup>238</sup> esperando en los buenos resultados que pudiera obtener con este gesto.

Las autoridades venezolanas no han tomado medidas significativas contra la supuesta complicidad o participación activa por parte de las fuerzas armadas en delitos que, según las afirmaciones de algunos expertos, no podrían ocurrir sin el consentimiento tácito del Presidente.<sup>239</sup> Por el contrario, aquellos que están bajo sospecha han sido ascendidos a puestos muy altos, tal como lo demuestra el caso del general Silva. Algunos analistas sospechan que una actitud permisiva le permite al Presidente presionar la lealtad de altos

oficiales.<sup>240</sup> El Gobierno tendrá la oportunidad de disipar las dudas cuando el caso de Makled, quien finalmente fue extraditado a Venezuela el 11 de mayo de 2011, llegue a las instancias judiciales. A pesar de que se ha comprometido a cumplir con todos los requisitos del debido proceso,<sup>241</sup> las revelaciones de Makled podrían acarrear un alto costo político para el Gobierno, de manera que algunos expertos creen que el caso se mantendrá bajo fuerte control presidencial.<sup>242</sup>

## D. LAS MILICIAS

En ninguna parte se encarna mejor la noción de la alianza cívico-militar que en las milicias, establecidas en 2005 bajo el nombre de Guardia Territorial.<sup>243</sup> La LOFANB de 2008 señaló por primera vez de manera explícita la misión y las funciones de estos grupos, que recibieron la denominación de Milicia Nacional Bolivariana (MNB) y quedaron formalmente integradas a las fuerzas armadas como quinto componente.<sup>244</sup> Con frecuencia se le acusa de ser el ejército privado del Presidente.<sup>245</sup> La misión oficial de la MNB es “entrenar, preparar y organizar al pueblo para la defensa integral con el fin de... contribuir al mantenimiento del orden interno, seguridad, defensa y desarrollo integral de la Nación”.<sup>246</sup> Miles de ciudadanos han sido inscritos, entrenados durante los fines de semana y equipados. Mientras el Gobierno tiene previsto crear una fuerza de varios millones, el estimado actual es de trescientos a ochocientos mil integrantes.<sup>247</sup>

La MNB está organizada en tres niveles. Las milicias territoriales se forman a nivel comunitario y tienen vínculos cercanos con los consejos comunales, estructuras locales que reciben órdenes directamente de la Presidencia. Los cuerpos combatientes están conformados por empleados

<sup>234</sup> Entrevista de Crisis Group, organización humanitaria, 28 de abril de 2011.

<sup>235</sup> En el marco de estos negocios, Makled adquirió la participación mayoritaria en la importante aerolínea privada Aeropostal S.A. y obtuvo concesiones para operar un aeropuerto importante en Valencia (Venezuela), al igual que aproximadamente la mitad de todas las bodegas y muelles en el puerto de Puerto Cabello. “Walid Makled habla en ‘El Nacional’: ‘Hasta regalé carros último modelo a Diputados de la AN’”, *noticias24*, 10 de octubre de 2010. “Vea la entrevista a Walid Makled”, *Globovisión*, 4 de abril de 2011.

<sup>236</sup> Jeremy McDermott, “Makled’s Window into Trafficking in Venezuela Closing”, *InSight*, 19 de abril de 2011.

<sup>237</sup> *Ibid.*

<sup>238</sup> Santos explicó que la solicitud de extradición de Venezuela había precedido la de los Estados Unidos y que Makled se enfrentaba a graves cargos en su país de origen. Sin embargo, la creencia general es que detrás de este gesto estaban las consideraciones económicas (incluyendo el pago de unos \$800 millones en deudas comerciales) y la expectativa de que Venezuela a cambio capturaría y extraditaría a guerrilleros. Las autoridades colombianas ratificaron la decisión de Santos en abril de 2011, *ibid.*

<sup>239</sup> Entrevistas de Crisis Group, antiguo oficial de inteligencia militar, Maracaibo, 4 de marzo de 2011; experto en seguridad, Caracas, 28 de febrero de 2011; ex general, Caracas, 2 de marzo de 2011.

<sup>240</sup> Entrevistas de Crisis Group, experto en seguridad, Caracas, 2 de marzo de 2011; ex general, Caracas, 28 de febrero de 2011.

<sup>241</sup> “Venezuela promete que Makled gozará de un debido proceso”, *CaracolTV.com*, 9 de mayo de 2011.

<sup>242</sup> Entrevista telefónica de Crisis Group, analista de seguridad, 14 de junio de 2011.

<sup>243</sup> “Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional”, 2005, op. cit., Artículo 11, Guardia Territorial.

<sup>244</sup> “Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, 2008, op. cit.

<sup>245</sup> Rocio San Miguel, “Carta al diputado Rafael Gil Barrios”, *informe21*, 31 de marzo de 2011.

<sup>246</sup> “Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, *Gaceta Oficial* no. 5933, 21 de octubre de 2009, Artículo 44; también, [www.milicia.mil.ve](http://www.milicia.mil.ve).

<sup>247</sup> Entrevista de Crisis Group, experto en seguridad, Caracas, 2 de marzo de 2011. “Armar a la Milicia Bolivariana impone miedo en la sociedad”, *El Nacional*, 13 de octubre de 2010. “Special Report”, *Stratfor*, op. cit., p. 4.

de instituciones públicas y privadas.<sup>248</sup> En julio de 2010, por ejemplo, el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género inició la formación de un cuerpo combatiente, incluyendo a 1.200 funcionarios que iban a prestar juramento, según declaraciones de la ministra.<sup>249</sup> A comienzos de 2010, el presidente Chávez anunció la creación de cuerpos del sector económico: la milicia campesina y la milicia obrera.<sup>250</sup> El Frente Socialista de Trabajadores de Petróleos de Venezuela informó en junio de 2010 que 150.000 integrantes de empresas estatales habían sido organizados en milicias.<sup>251</sup> Aunque la ley dispone que la inscripción es voluntaria, ha habido quejas sobre coacción. Según se informa, algunas inspectorías del trabajo se niegan a homologar los contratos colectivos de empresas cuyos empleados no hayan formado milicias o no sean miembros del partido de gobierno.<sup>252</sup>

El Gobierno no ha mantenido en secreto su objetivo de crear un “pueblo en armas”, presto a defender la revolución por la fuerza si fuera necesario.<sup>253</sup> Simultáneamente a la discusión por parte de la Asamblea Nacional de una nueva ley de control de armas de fuego, una enmienda de 2011 a la LOFANB de 2008 establece un cuerpo de oficiales propio de la milicia que, según algunos expertos, garantiza acceso permanente a armas de guerra.<sup>254</sup> Además,

lo que la ley describe en cuanto a “recabar, procesar y difundir la información de los Consejos Comunales, instituciones del sector público y privado, necesaria para la elaboración de los planes, programas, proyectos ...”,<sup>255</sup> ha sido traducido por el jefe de estado en un discurso de 2009 como “la capacidad de establecer redes de inteligencia contra las infiltraciones”<sup>256</sup>, despertando así preocupaciones con respecto a las intenciones del Presidente de formar un ejército de ciudadanos que se espían entre sí.

La creación de las milicias ha causado descontento entre segmentos de las fuerzas armadas regulares.<sup>257</sup> Entre las denuncias se afirma que la existencia de un ejército aparte bajo el mando directo del Presidente sugiere desconfianza frente a la institución, y su incorporación a las fuerzas de seguridad es una estrategia para poner en jaque a la élite militar y evitar un potencial golpe de estado; que el hecho de que los ciudadanos con otros empleos formen parte de las fuerzas armadas de manera oficial, constituye un esfuerzo para desprofesionalizar la institución regular; y que casi no hay control sobre quién ingresa a las milicias.<sup>258</sup>

Resulta difícil juzgar el verdadero potencial de la MNB. Sus miembros están mal entrenados, y muchos se unen, no por convicción sino por presión, por conveniencia o por el dinero que se gana al asistir a los entrenamientos.<sup>259</sup> Según una analista, pese a las cifras altas en el papel, aquellos que realmente serían capaces de ser movilizados no supera los 40.000,<sup>260</sup> y su poder de fuego es mínimo en comparación con el de las fuerzas armadas regulares.<sup>261</sup> El potencial de abuso de las armas de guerra en manos de civiles no se debe subestimar, pero más que constituir una grave amenaza militar, las milicias parecen ser principalmente un medio para impulsar el adoctrinamiento de la población, el apoyo electoral y la intimidación a los destructores. Además, la evocación constante de una posible situación de guerra civil y el fortalecimiento de la imagen de agresores internos puede tener un impacto profundo en el tejido social y abrir paso a la violencia política directa.

<sup>248</sup> www.milicia.mil.ve; “Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, 2008, op. cit., capítulo V.

<sup>249</sup> “Ministra León anunció juramentación de 1200 mujeres combatientes para el mes de agosto”, analítica.com, 29 de julio de 2009.

<sup>250</sup> “Chávez advierte que Milicia Campesina actuará contra agresor interno y externo”, *El Universal*, 21 de febrero de 2010; Suhelis Tejero Puentes, “El gobierno define la línea de las milicias obreras”, *El Universal*, 28 de enero de 2010.

<sup>251</sup> “Amenazas y Restricciones a los Derechos Humanos y la Democracia en Venezuela”, op. cit., p. 27.

<sup>252</sup> *Ibid.*

<sup>253</sup> El 2 de julio de 2009, el Presidente dijo “el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional, la Milicia, la Fuerza Armada es el pueblo en armas”; el 13 de abril de 2010 declaró: “Listos deben de estar ustedes para en cualquier momento tomar las armas que ahí tienen y salir a dar la vida si hubiera que darla por la Revolución bolivariana...ustedes saben lo que tendrían que hacer, sencillamente tomar todo el poder en Venezuela, absolutamente todo, barrer a la burguesía de todos los espacios políticos y económicos, profundizar la revolución”. Citado en “Amenazas y restricciones a los derechos humanos y la democracia en Venezuela, informe de seguimiento, enero – septiembre 2010”, *Civiles*, 2010, pp. 27-28.

<sup>254</sup> El gobierno siempre había dicho que las milicias no eran de tiempo completo; ellos sólo estaban activos cuando entrenaban o cuando las llamaban para un fin específico. La creación de un cuerpo de oficiales profesionales indica que incluso ahora podrían tener acceso permanente no sólo a armas regulares sino posiblemente también a armas más potentes. Entrevista telefónica de Crisis Group, experto en seguridad, Caracas, 9 de junio de 2011. Chávez ha dicho con frecuencia que era necesario armar a las milicias. “Chávez exige acelerar y armar a milicias populares”, *Vanguardia*, 4 de octubre de 2010.

<sup>255</sup> “Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, 2009, op. cit., Artículo 46.

<sup>256</sup> Hugo Chávez Frías, “La doctrina militar bolivariana y el poder nacional”, *Aló Presidente Teórico*, no.5, 23 de julio de 2009, p. 7.

<sup>257</sup> Entrevistas de Crisis Group, experto en seguridad, Caracas, 2 de marzo de 2011; ex general, Caracas, 28 de febrero de 2011.

<sup>258</sup> Entrevista de Crisis Group, experto en seguridad, Caracas, 2 de marzo de 2011.

<sup>259</sup> Entrevista de Crisis Group, representante de ONG internacional, Caracas, 22 de noviembre 2010.

<sup>260</sup> Esto correspondería al número de integrantes de las milicias con entrenamiento suficiente para usar armas eficazmente. Entrevista de Crisis Group, experto en seguridad, Caracas, 2 de marzo de 2011.

<sup>261</sup> Entrevista de Crisis Group, experto en seguridad, Caracas, 2 de marzo de 2011.

## VI. LOS RIESGOS DE CONFLICTO

Venezuela se ha vuelto un país mucho más violento bajo el gobierno del presidente Chávez. Como el análisis anterior ha demostrado, la violencia parece ser no sólo un precio que el Gobierno está dispuesto a pagar a cambio de lealtad y control político, sino también un resultado de políticas inadecuadas de prevención de la delincuencia. El Presidente y sus aliados han alimentado la violencia de manera directa al armar a civiles, abstenerse de desarmar a grupos criminales y exacerbar las divisiones políticas a través de una agresiva retórica. De manera sistemática, el ejecutivo ha cooptado las otras ramas del Estado impidiendo de esa manera, en gran medida, la actividad de los mecanismos que hacen posible la resolución pacífica de disputas en una democracia. El anuncio del Presidente de una “revolución violenta liderada por los militares revolucionarios y el pueblo venezolano”<sup>262</sup> en caso de haber un gobierno de oposición, obliga a preguntarse si la capacidad del Estado de efectuar cambios pacíficos y democráticos ha sido erosionada por completo, y si el país está al borde de sufrir un periodo de grave violencia política.

La respuesta depende de numerosos factores, y la enfermedad del Presidente ha generado gran incertidumbre. Si el Presidente mantiene el control, es poco probable que se llegue al punto más crítico antes de las elecciones presidenciales de 2012, y si bien podría haber problemas durante la campaña, el verdadero peligro probablemente surgirá en la etapa poselectoral, independientemente de quién gane.

Los riesgos de un conflicto mayor a corto plazo son mitigados por varios factores. La oposición está unida en su propósito de derrotar a Chávez en las elecciones, incluso si las reglas de juego son inequitativas.<sup>263</sup> En general, sus dirigentes son disciplinados en su esfuerzo de evitar caer en la trampa de la provocación, lo que podría darle al Gobierno una excusa para recurrir a medidas drásticas. Las protestas sociales siguen fragmentadas, reflejo de una política exitosa de contención por parte del Gobierno y del hecho de que el descontento no ha llegado a un nivel crítico.<sup>264</sup> Aquellos que forman las bases políticas tradiciona-

les del Presidente sienten cada vez más temor ante las posibles consecuencias de tomar una actitud crítica hacia el Gobierno.<sup>265</sup> Persuadidos por las promesas del Presidente de beneficios futuros, muchos prefieren guardar silencio en vez de arriesgarse a ser eliminados de una lista de espera o a perder beneficios existentes. Otros no vislumbran una alternativa atractiva diferente a Chávez.<sup>266</sup>

Pese a sus divisiones internas, el Presidente parece no tener que temer a las fuerzas armadas en el corto plazo. Los ascensos dirigidos y otros beneficios han establecido una cúpula fiel, y los inconformes han abandonado las fuerzas armadas en lugar de fomentar la oposición desde el interior. El nivel de control que ejerce el Presidente sobre altos oficiales es tan fuerte que, según se informa, la mayoría no se atreve a hablar con la oposición.<sup>267</sup> Finalmente, pero no por ello de menor importancia, los recuerdos de la ocupación infructuosa de la Plaza Altamira en 2002-2003 aún están vivos, de manera que nadie parece dispuesto a repetir la experiencia.<sup>268</sup>

---

<sup>265</sup> Este temor ha aumentado en particular debido a las llamadas listas “Tascón” y “Maisanta”. Aquellos que firmaron una serie de peticiones en 2002 y 2003 pidiendo un referendo de remoción contra el Presidente desde entonces han sido excluidos sistemáticamente de puestos de gobierno y beneficios estatales, como resultado de la “Lista Tascón”, denominada así por el legislador de gobierno que circuló sus nombres y números de cédula en un CD. La “Lista Maisanta” es una versión ampliada, incluyendo información de otras bases de datos del gobierno; clasifica a unos 12 millones de venezolanos según filiación política. “La Lista: un pueblo bajo sospecha”, video, YouTube, 24 de mayo de 2006, ([www.youtube.com/watch?v=jS\\_4TLvphW8](http://www.youtube.com/watch?v=jS_4TLvphW8)).

<sup>266</sup> Según una encuesta de la firma Hinterlaces, publicado el 1 de junio de 2011, cuatro de diez ciudadanos creen que el Presidente tiene “las mejores ideas para resolver los problemas del país”; sólo tres de diez creen lo mismo de la oposición. 42 por ciento votarían por el Presidente, 40 por ciento votarían por un candidato hipotético de la oposición. En cambio, 51 por ciento de los encuestados está a favor de un cambio en la dirigencia a raíz de las elecciones de 2012. La brecha entre el 40 por ciento que hubiera votado por la oposición y el 51 por ciento que quiere cambio podría atribuirse al hecho de que la oposición aún no tiene un candidato oficial; también se piensa que refleja que la oposición aún no ha aprovechado la reducción de la popularidad presidencial. Eugenio G. Martínez, “51% cree necesario cambiar de Presidente en 2012”, *El Universal*, 1 de junio de 2011.

<sup>267</sup> Entrevista de Crisis Group, líder de la oposición, Caracas, 26 de noviembre de 2010.

<sup>268</sup> En un intento por forzar la renuncia del Presidente, un grupo de oficiales militares, dirigido por generales y almirantes disidentes, ocupó la Plaza Francia en Altamira (oriente de Caracas) durante varios meses. El gobierno optó por no enfrentarlos, y la protesta finalmente se disipó, forzando al exilio a varios de sus líderes.

---

<sup>262</sup> Aló Presidente, no. 366, Miranda, 31 de octubre de 2010.

<sup>263</sup> La Mesa de Unidad Democrática (MUD) de la oposición se ha puesto de acuerdo en dos principios: seleccionará a un solo candidato en una consulta interna en febrero de 2012 y se postulará en una sola papeleta electoral. “Pronóstico reservado”, *Semana*, 2 de julio de 2011.

<sup>264</sup> La experiencia del paro cívico fallido en 2002-2003 es otro desincentivo. Entre octubre de 2002 y febrero de 2003, la oposición buscaba derrocar al presidente Chávez por medio de un paro cívico, centrado principalmente en la industria petrolera. Aunque casi cesó la producción petrolera, el gobierno sobrellevó la protesta y luego tomó represalias al despedir a casi 20.000 en PdVSA, la empresa petrolera del Estado.

Sin embargo, este equilibrio es muy frágil. Las manifestaciones y protestas han seguido su tendencia al alza en 2011<sup>269</sup> y son un reflejo de los problemas sociales y económicos sin resolver que han sido exacerbados por la fuerte temporada de lluvias al final de 2010 y por la creciente radicalización del proyecto bolivariano.<sup>270</sup> Algunos manifestantes están recurriendo a métodos más radicales, como hacer huelgas de hambre o incluso coserse los labios. El país se recupera lentamente de la recesión económica de 2009-2010, la cual contribuyó al descenso en el apoyo popular a Chávez.<sup>271</sup> En la medida en que el aumento en los precios del petróleo incrementa la disponibilidad de dinero en efectivo en las arcas del Estado, el Presidente podrá otorgar aumentos, financiar programas sociales y mantener o de nuevo incrementar su base de apoyo electoral. Sin embargo, dada la vulnerabilidad de la economía, no hay garantía de ello.<sup>272</sup> Si no se puede enfrentar el descontento social de esta manera, el Gobierno podría recurrir a maneras más drásticas para lidiar con las protestas.

La tensión política podría aumentar en vísperas de las elecciones, sobre todo si las encuestas revelan una contienda reñida. El Gobierno ha demostrado en repetidas ocasiones que no tiene reparos en manipular las reglas de juego a su favor, y su control institucional le brinda los medios para

hacerlo.<sup>273</sup> La nueva Asamblea Nacional ha sido ineficaz como cuerpo legislativo; sus funciones fueron seriamente restringidas por el Presidente en diciembre de 2010, causando enorme resentimiento entre la oposición.<sup>274</sup> Pese a gestos conciliadores ocasionales, persiste una fuerte animosidad entre los dos bandos, lo cual se puso de manifiesto cuando diputados del gobierno y de la oposición se enfrentaron a golpes en el parlamento el 10 de febrero de 2011, cesando solo cuando intervino la Guardia Nacional.

Las condiciones son tales que es difícil vislumbrar un remedio en el corto plazo a raíz de un resultado electoral, cualquiera que sea. Por el contrario, el grado de polarización y militarización de la sociedad implica un potencial estallido de violencia política una vez deje de existir la opción de la resolución democrática del conflicto por medio de las elecciones. El Presidente y el jefe de las fuerzas armadas ya han indicado que no aceptarían una victoria de la oposición. De la misma manera la perspectiva de seis años más de chavismo bien podría provocar la desintegración de la unidad y de la disciplina de la oposición, y la realización de acciones violentas por parte de elementos radicales.

Además, la amplia presencia de redes del crimen organizado seguirá representando una grave amenaza a las instituciones, la estabilidad y la autoridad estatal del país, independientemente de la orientación del próximo gobierno. En efecto, si las autoridades después de 2012 intentan decididamente combatir el crimen organizado, la perspectiva en el corto plazo será de más violencia, pues es poco probable que los grupos afectados cedan sin dar una pelea fuerte.

Las preocupaciones con respecto a la salud del Presidente, despertadas por su hospitalización en Cuba y su reconocimiento de que tiene cáncer, han generado incertidumbre en cuanto a su capacidad de dirigir el país hacia las elecciones de 2012 y luego de ellas.<sup>275</sup> Su ausencia de la mira-

---

<sup>269</sup> Según el Observatorio de Conflictividad Social, más de 1.670 protestas se registraron entre enero y el final de mayo de 2011 solamente. La ONG de derechos humanos Provea registró 3.315 protestas entre octubre de 2009 y septiembre de 2010, comparado con 2.893 entre octubre de 2008 y septiembre de 2009, "Situación de los Derechos Humanos", op. cit. p. 341.

<sup>270</sup> Entre septiembre de 2010 y enero de 2011, cuando fue instalada la Asamblea Nacional con considerable presencia de la oposición, la antigua legislatura controlada por el gobierno adoptó una gran cantidad de legislación controversial. El tema más candente: una ley que faculta a Chávez para emitir decretos durante dieciocho meses en una gama amplia de temas, severamente limitando así los poderes de la legislatura y minando los resultados electorales.

<sup>271</sup> La encuesta de junio de 2009 de Consultores 21 SA encontró que menos del 38 por ciento de los encuestados creía que Chávez estaba haciendo un buen trabajo, comparado con 52 por ciento en 2006. En septiembre de 2010, los candidatos de Chávez en las elecciones legislativas nacionales obtuvieron menos de la mitad del voto popular, pese al hecho de que el hizo campaña junto a ellos, declarando que el futuro de su presidencia estaba en juego. Véase también Crisis Group, Boletín, *Venezuela: Acelerando la Revolución Bolivariana*, op. cit., p. 8.

<sup>272</sup> La mayor vulnerabilidad de Venezuela proviene del hecho de que, según las cifras de 2009 de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el 94 por ciento de sus ganancias por exportaciones proviene del petróleo. Esos ingresos también representan más de la mitad de los ingresos del presupuesto federal y 30 por ciento del PIB. La tasa de inflación está cercana al 30 por ciento (2010) [http://www.opec.org/opec\\_web/en/about\\_us/171.htm](http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/171.htm).

---

<sup>273</sup> Antes de las elecciones legislativas de septiembre de 2010, por ejemplo, el régimen cambió la normatividad electoral para eliminar la representación proporcional (la cual se exigió en la Constitución de 1999). También manipuló los límites entre distritos electorales a fin de reducir el número de curules disponibles para la oposición. El resultado fue una legislatura en la que el gobierno – a pesar de recibir una minoría del voto popular – cuenta con una mayoría, al tener 98 de las 165 curules.

<sup>274</sup> Sólo una ley se aprobó en la primera mitad de 2011. La oposición ha intentado usar el aumento de su presencia para reforzar la vigilancia parlamentaria y desafiar al gobierno del PSUV, lo que no ha sido capaz de hacer desde el boicot a las elecciones parlamentarias de 2005.

<sup>275</sup> Chávez no ha especificado el tipo de cáncer que tiene. El 13 de julio, reveló que podría necesitar quimioterapia y/o radioterapia, pero no dio más detalles del tratamiento o su duración. Después de una estadía corta en Caracas para las celebraciones del bicentenario, volvió a Cuba el 16 de julio para iniciar el tratamiento. El 25 de julio estaba de vuelta en Caracas subrayando

da pública durante algunas semanas evidenció la falta de un liderazgo alterno y el carácter extremadamente personalizado del régimen.<sup>276</sup> También dio una muestra de lo que podría pasar si el vacío de poder se convirtiera en una realidad en el evento de un deterioro grave de su estado de salud. Hubo señales de riñas entre facciones en las filas del partido gobernante, el PSUV, al igual que en las fuerzas armadas, y algunos analistas advirtieron que la unidad de la oposición tal vez no duraría si el enemigo común, el Presidente, ya no estuviera en el poder.<sup>277</sup>

Es difícil pronosticar el impacto que tendrá la salud de Chávez. Sin embargo, a raíz del desmantelamiento de instituciones autónomas y el hecho de que el Gobierno ha hecho caso omiso de normas constitucionales, el Presidente ha quedado como el principal árbitro *de facto* encargado de resolver disputas; su ausencia de la escena, o incluso una percepción de su debilidad, podrían provocar más caos y el riesgo de violencia, exacerbados por el gran número de armas de fuego en circulación y por la presencia de múltiples grupos armados, muchos de los cuales están completamente por fuera de la ley. Si el Presidente permanece en el poder, conservará la facultad de emplear la violencia (por medio de agentes del Estado o de grupos irregulares afines) con el fin de preservar el poder. Si no permanece en el poder, la violencia política latente que él ha ayudado

---

su firme intención de postularse para la presidencia en 2012, pero volvió nuevamente a Cuba para continuar el tratamiento. Según el artículo 233 de la Constitución, si el Presidente es incapaz de gobernar, debido a muerte o incapacidad física, en los últimos dos años del mandato, el vicepresidente asume el poder hasta el final del periodo. El artículo 234 prescribe que el vicepresidente también puede asumir el poder hasta por 90 días, en caso de ausencia temporal, prorrogables por otros 90 por la Asamblea Nacional. Si la ausencia temporal supera los 90 días consecutivos, la Asamblea Nacional decide por voto mayoritario si la ausencia ha de considerarse definitiva.

<sup>276</sup> Pese a haber estado en cuidados intensivos durante varios días, Chávez inicialmente no delegó su poder al vicepresidente; sus ministros afirmaron que él estaba dirigiendo el gobierno desde La Habana. Antes de regresar a La Habana, delegó por primera vez algunos poderes administrativos y presupuestales al vicepresidente Elías Jaua y al ministro de planificación y finanzas, Jorge Giordani. Chávez no ha hecho ninguna revelación sobre posibles sucesores. Un posible aspirante, su hermano Adán Chávez, gobernador del estado de Barinas, abiertamente aceptó la legitimidad de la violencia, declarando en junio que “sería inexcusable limitarnos solamente a la vía electoral y no ver otras formas de lucha, incluyendo la lucha armada”. “Chavez brother raises possibility of armed struggle as Venezuela ponders president’s health”, InterAmerican Security Watch, 27 de junio de 2011.

<sup>277</sup> “Chávez returns but big questions remain – and not just for Venezuela”, Latin American Weekly Report, 7 de julio de 2011; “Pronóstico reservado”, op. cit., “Análisis AP: el Ejército será un actor crucial en medio de la incertidumbre en Venezuela”, *noticias* 24, 5 de julio de 2011.

a fomentar podría manifestarse de forma más caótica. En ese caso, los militares probablemente tomarían algunas acciones.<sup>278</sup> En un panorama más favorable, el debilitamiento de Chávez podría abrir un espacio para nuevas coaliciones y una reorganización de las fuerzas políticas, lo cual posiblemente disminuiría la polarización. La economía es otra variable clave que influirá en las perspectivas a mediano y largo plazo.

A fin de evitar un gran derramamiento de sangre en vísperas de las elecciones de 2012 y más allá de ellas, los diferentes actores como el Gobierno, los integrantes del partido de gobierno, las fuerzas armadas y la oposición deben expresar un compromiso público de acatamiento de las normas constitucionales y una condena expresa de la violencia como medio para tomar o conservar el poder. Además, la elección presidencial de 2012 le ofrece tanto al Gobierno como a la oposición la posibilidad de presentar propuestas detalladas para tratar de resolver el problema de la delincuencia, que se ha convertido en la preocupación principal de todos los venezolanos, independientemente de su afiliación política.

Las medidas aisladas y a medias tendrán un impacto mínimo: se requiere una estrategia integrada para reducir la delincuencia y salvaguardar el derecho a la vida y a la propiedad. El Gobierno tiene que demostrar que puede controlar las armas, restablecer el Estado de Derecho y eliminar la corrupción de las instituciones del Estado, comenzando con la policía y las fuerzas armadas. Adicionalmente, si se desarmaran y desmantelaran las FBL, los colectivos urbanos y otros grupos que operan fuera de la ley, se eliminarían importantes riesgos potenciales de violencia. También el Gobierno tiene que desarrollar e implementar estrategias eficaces para hacerle seguimiento a sus compromisos de acción frente al narcotráfico, la presencia de grupos armados ilegales en Venezuela y la violencia del crimen organizado.

La interacción constructiva con Colombia, la restauración inicial de la cooperación y del control transfronterizo de la delincuencia parecen mostrar que el Gobierno tomará acciones cuando estén en juego intereses creados. Los vecinos y socios comerciales deben usar su influencia para recordarle al Gobierno que debe respetar su propia Constitución, al igual que los parámetros democráticos de las organizaciones intergubernamentales a las cuales pertenece como miembro.<sup>279</sup> Los países vecinos y socios comerciales, en particular, tienen un interés en asegurar la estabili-

---

<sup>278</sup> Una posibilidad es que las fuerzas armadas se dividan, lo cual sería muy peligroso. Otra es que apoyen un gobierno principalmente civil. Una tercera sería que tomaran el poder por cuenta propia.

<sup>279</sup> Esto incluye la Organización de Estados Americanos y las cláusulas de la Carta Democrática Interamericana.

dad democrática y en minimizar la posibilidad de que la “desinstitucionalización” y el caos fomenten una proliferación aún mayor del crimen organizado en la región. En el evento de tensiones graves o de violencia, deben estar preparados para participar en mecanismos de mediación.

## **VII. CONCLUSIÓN**

En 1999, el presidente Chávez asumió el poder con la promesa de eliminar la corrupción y hacerle frente a la violencia que habían aumentado durante los gobiernos anteriores. Doce años después, la violencia criminal está fuera de control, alimentada por la impunidad que aumenta a pasos gigantescos, la circulación masiva y descontrolada de armas, la corrupción y la fuerza excesiva por parte de la policía y la presencia de múltiples grupos armados en complicidad con elementos de las fuerzas de seguridad. Aunque muchos de estos problemas anteceden al gobierno actual, éste no puede lavarse las manos al respecto. En virtud de la “Revolución bolivariana”, la decadencia institucional, reflejada particularmente en la ausencia de un sistema judicial independiente y funcional y la existencia de unas fuerzas de seguridad disfuncionales, politizadas y corruptas, ha exacerbado los problemas de seguridad ciudadana. Varios grupos armados y la complicidad a niveles altos con la delincuencia han continuado sin castigo, mientras que las milicias ciudadanas son armadas y entrenadas con el fin de defender la revolución por medio del uso de la fuerza. La violencia o la amenaza del uso de ella se han vuelto inherentes al proyecto político del presidente Chávez.

En un contexto de altos niveles de politización y militarización de la sociedad, la perspectiva de la elecciones presidenciales de 2012 no ofrece un alivio significativo. Por el contrario, cualquiera que sea el resultado podría desatar una violencia política que actualmente está latente. Además, la delicada salud del Presidente ha aumentado la incertidumbre con respecto a la estabilidad en el corto y en el mediano plazo. Para salvaguardar a Venezuela de un estallido de violencia letal, es imperativo que el Gobierno, los integrantes del partido de gobierno, las fuerzas armadas y la oposición se comprometan públicamente a recurrir exclusivamente a medios pacíficos y constitucionales de resolución de conflictos. El Gobierno debe dar evidencia de que es consecuente con su posición contra el crimen, comenzando con el desarme y el desmantelamiento de grupos criminales y la implementación de políticas integrales que protejan a la población. No desactivar la bomba de tiempo implicaría la pérdida de miles de vidas y amenazaría seriamente la estabilidad del país.

**Bogotá/Bruselas, 17 de agosto de 2011**

## APÉNDICE A

### MAPA DE VENEZUELA



Cortesía de la General Library, The University of Texas at Austin.

## **APÉNDICE B**

### **GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS**

---

CAANAUC	Autodefensas Unidas de Colombia, organización que abarca los grupos paramilitares cuya desmovilización comenzó en 2003 y terminó oficialmente en 2006
BACRIM	Bandas criminales, término usado por el Gobierno colombiano para referirse a grupos armados ilegales formados después del final de la desmovilización paramilitar
CICPC	Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
CNE	Consejo Nacional Electoral
CEO	Comando Estratégico Operacional
CONAREPOL	Comisión Nacional de Reforma Policial
DEA	La agencia antinarcoóticos del gobierno de los Estados Unidos (Drug Enforcement Administration).
DGIM	Dirección General de Inteligencia Militar
DIBISE	Dispositivo Bicentenario de Seguridad
ELN	Ejército de Liberación Nacional, el segundo grupo guerrillero de Colombia en términos de tamaño
EVPSA	Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana
FANB	Fuerza Armada Nacional Bolivariana
FARC	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el principal grupo insurgente en Colombia y la guerrilla más antigua en las Américas
FBL	Fuerzas Bolivarianas de Liberación
GNB	Guardia Nacional Bolivariana
IISS	Instituto Internacional para los Estudios Estratégicos (International Institute for Strategic Studies)
INE	Instituto Nacional de Estadística
KP	Proceso de Kimberley (Kimberley Process)
LOFAN	Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas
LOFANB	Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
MNB	Milicia Nacional Bolivariana
OEA	Organización de Estados Americanos
ONA	Oficina Nacional Antidroga
OVV	Observatorio Venezolano de la Violencia
PM	Policía Metropolitana
PNB	Policía Nacional Bolivariana
Provea	Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos
PSUV	Partido Socialista Unido de Venezuela
SEBIN	Servicio Bolivariano de Inteligencia
UNES	Universidad Nacional Experimental de Seguridad

## APÉNDICE C

### ACERCA DE INTERNATIONAL CRISIS GROUP

El International Crisis Group (Crisis Group) es una organización no gubernamental independiente sin ánimo de lucro, con cerca de 130 funcionarios en cinco continentes, que combina el análisis sobre el terreno con labores de sensibilización al más alto nivel, con el objetivo de prevenir y solucionar conflictos graves.

El trabajo de Crisis Group se basa en investigaciones realizadas sobre el terreno. Cuenta con equipos de analistas políticos con su sede en o cerca de los países en riesgo de crisis, escalada o recurrencia de conflictos violentos. Con base en la información y las evaluaciones sobre el terreno, produce informes analíticos con recomendaciones prácticas dirigidas a quienes toman decisiones fundamentales en el ámbito internacional. Crisis Group también publica *CrisisWatch*, un boletín mensual de 12 páginas, que actualiza sucintamente con regularidad la coyuntura en las situaciones de conflicto o conflicto potencial más sensibles del mundo.

Los informes y los boletines informativos de Crisis Group son distribuidos por correo electrónico y también se publican simultáneamente en el sitio web de la organización, [www.crisisgroup.org](http://www.crisisgroup.org). Crisis Group trabaja en estrecha colaboración con gobiernos y con grupos influyentes, incluidos los medios, para llamar la atención sobre sus análisis de crisis y buscar apoyo para sus recomendaciones en materia de políticas.

El Consejo de Administración de Crisis Group – cuyos miembros incluyen figuras prominentes en las esferas de la política, la diplomacia, los negocios y los medios de comunicación – participa de forma directa en la promoción de los informes y recomendaciones de la organización, buscando su consideración por parte de formuladores de políticas en el mundo. Crisis Group es presidido por Thomas Pickering, ex embajador de Estados Unidos. Su presidenta y directora ejecutiva desde julio de 2009 es Louise Arbour, ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos y fiscal principal en los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda.

La sede internacional de Crisis Group se encuentra en Bruselas, y el grupo tiene también oficinas de sensibilización en Washington D.C. (en donde es entidad jurídica) y Nueva York, una más pequeña en Londres y enlaces en Moscú y Beijing. En la actualidad, la organización cuenta con nueve oficinas regionales (en Bishkek, Bogotá, Dakar, Estambul, Islamabad, Nairobi, Pristina, Tbilisi y Yakarta) y tiene representaciones sobre el terreno en otras catorce localidades (Baku, Bangkok, Beirut, Bujumbura, Damasco, Dili, Jerusalén, Kabul, Katmandú, Kinshasa, Puerto Príncipe, Pretoria, Sarajevo y Seúl). Crisis Group cubre en la actualidad cerca de 60 zonas de conflicto actual o potencial en cuatro continentes. En África, estos países incluyen Burundi, Camerún, Chad, Côte d'Ivoire, Eritrea, Etiopía, Guinea, Guinea-Bissau, Kenia, Liberia, Madagascar, Nigeria, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Rwanda, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Uganda y Zimbabwe; en Asia, Afganistán, Bangladesh, Birmania/Myanmar, Cashemi-

ra, Corea del Norte, Estrecho de Taiwán, Filipinas, Indonesia, Kazajstán, Kirgizistán, Nepal, Pakistán, Sri Lanka, Tayikistán, Tailandia, Timor Leste, Turkmenistán y Uzbekistán; en Europa, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia-Herzegovina, Chipre, Georgia, Kosovo, Macedonia, Rusia (Cáucaso Norte), Serbia y Turquía; en el Oriente Medio y África septentrional, Arabia Saudita, Argelia, Egipto, Estados del Golfo, Irán, Iraq, Israel-Palestina, Líbano, Marruecos, Siria y Yemen; y en América Latina y el Caribe, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Haití y Venezuela.

Crisis Group recibe apoyo financiero de una amplia gama de gobiernos, fundaciones institucionales y fuentes privadas. En los últimos años, ha recibido recursos de los siguientes departamentos y organismos gubernamentales: Agencia Australiana para el Desarrollo Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Australia, Agencia Austriaca para el Desarrollo, Ministerio de Relaciones Exteriores de Bélgica, Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional, Centro Canadiense de Investigación y Desarrollo Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Canadá, Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa, Ministerio de Relaciones Exteriores Real de Dinamarca, Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda, Comisión Europea, Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia, Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, Irish Aid, Agencia de Cooperación Internacional de Japón, Principado de Liechtenstein, Ministerio de Relaciones Exteriores de Luxemburgo, Agencia de Nueva Zelanda para el Desarrollo Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores Real de Noruega, Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia, Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Suiza, Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía, Ministerio de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido, Consejo para el Desarrollo Económico y Social del Reino Unido y Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo.

Las siguientes fundaciones institucionales y privadas han aportado recursos en los últimos años: Carnegie Corporation of New York, The Charitable Foundation, Clifford Chance Foundation, Connect U.S. Fund, The Elders Foundation, William & Flora Hewlett Foundation, Humanity United, Hunt Alternatives Fund, Jewish World Watch, Korea Foundation, John D. & Catherine T. MacArthur Foundation, Open Society Institute, Victor Pinchuk Foundation, Ploughshares Fund, Radcliffe Foundation, Sigrid Rausing Trust, Rockefeller Brothers Fund y VIVA Trust.

**Agosto de 2011**

## APÉNDICE D

### INFORMES Y BOLETINES INFORMATIVOS DE CRISIS GROUP SOBRE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DESDE 2008

- La droga en América Latina I: perdiendo la lucha*, Informe sobre América Latina N°25, 14 de marzo de 2008.
- La droga en América Latina II: optimizar las políticas y reducir los daños*, Informe sobre América Latina N°26, 14 de marzo de 2008.
- Colombia: lograr que el avance militar rinda frutos*, Boletín informativo sobre América Latina N°17, 29 de abril de 2008.
- Bolivia: rescatar la nueva Constitución y la estabilidad democrática*, Boletín informativo sobre América Latina N°19, 19 de junio de 2008.
- Venezuela: ¿Reforma política o colapso del régimen?*, Informe sobre América Latina N°27, 23 de julio de 2008.
- Reforming Haiti's Security Sector*, Informe sobre América Latina y el Caribe N°28, 18 de septiembre de 2008.
- Rectificar el curso: las víctimas y la Ley de Justicia y Paz en Colombia*, Informe sobre América Latina N°29, 30 de octubre de 2008.
- Haiti 2009: Stability at Risk*, Boletín informativo sobre América Latina y el Caribe N°19, 3 de marzo de 2009.
- Poner fin al conflicto con las FARC en Colombia: jugar la carta correcta*, Informe sobre América Latina N°30, 26 de marzo de 2009.
- Haiti: Saving the Environment, Preventing Instability and Conflict*, Boletín informativo sobre América Latina y el Caribe N°20, 28 de abril de 2009.
- Dos pasos complementarios: proteger los derechos humanos y mejorar la seguridad en Colombia*, Boletín informativo sobre América Latina N°21, 25 de mayo de 2009.
- Venezuela: la Revolución Bolivariana acelerada*, Boletín informativo sobre América Latina N°22, 5 de noviembre de 2009.
- Un posible tercer periodo de Uribe y la resolución del conflicto en Colombia*, Informe sobre América Latina N°31, 18 de diciembre de 2009.
- Haiti: Stabilisation and Reconstruction after the Quake*, Informe sobre América Latina y el Caribe N°32, 31 de marzo de 2010.
- Guatemala: asfixiada entre el crimen y la impunidad*, Informe sobre América Latina N°33, 22 de junio de 2010.
- Mejorar la política de seguridad en Colombia*, Boletín informativo sobre América Latina N°23, 29 de junio de 2010.
- Colombia: la oportunidad del presidente Santos de poner fin al conflicto*, Informe sobre América Latina N°34, 13 de octubre de 2010.
- Haiti: The Stakes of the Post-Quake Elections*, Informe sobre América Latina y el Caribe N°35, 27 de octubre de 2010.
- Caminar sin muletas: un balance de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala*, Informe sobre América Latina N°36, 31 de mayo de 2011.
- Elecciones en Guatemala: voto limpio, política sucia*, Boletín informativo sobre América Latina N°24, 16 de junio de 2011.
- Romper los nexos entre crimen y política local: Las elecciones de 2011 en Colombia*, Informe sobre América Latina N°37, 25 de julio de 2011.

## APÉNDICE E

### CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE INTERNATIONAL CRISIS GROUP

#### DIRECTOR

**Thomas R. Pickering**

Ex embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Rusia, India, Israel, Jordania, El Salvador y Nigeria; vicepresidente de Hills&Company

#### PRESIDENTA Y DIRECTORA EJECUTIVA

**Louise Arbour**

Ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos y fiscal principal en los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda

#### CONSEJO DIRECTIVO

**Morton Abramowitz**

Ex secretario de Estado adjunto de los Estados Unidos y embajador en Turquía

**Cheryl Carolus**

Ex alta comisionada de Sudáfrica ante el Reino Unido; ex secretaria general del ANC

**Maria Livanos Cattau**

Miembro de la junta directiva, Petroplus Holdings, Suiza

**Yoichi Funabashi**

Editor en jefe de *The Asahi Shimbun*, Japón

**Frank Giustra**

Presidente y director ejecutivo de Fiore Capital

**Ghassan Salamé**

Decano, Escuela de Relaciones Internacionales de París, Ciencias Políticas

**George Soros**

Presidente de Open Society Institute

**Pär Stenbäck**

Ex ministro de Relaciones Exteriores de Finlandia

#### OTROS MIEMBROS DEL CONSEJO

**Adnan Abu-Odeh**

Ex consejero político del rey Abdullah II y del rey Hussein; representante permanente de Jordania ante las Naciones Unidas

**Kenneth Adelman**

Ex embajador de los Estados Unidos y director del Organismo para el Control de Armas y Desarme

**Kofi Annan**

Ex secretario general de las Naciones Unidas; Premio Nobel de la Paz (2001)

**Nahum Barnea**

Columnista principal de *Yedioth Ahronoth*, Israel

**Samuel Berger**

Presidente, Albright Stonebridge Group LLC; ex consejero de seguridad nacional de los Estados Unidos

**Emma Bonino**

Vicepresidenta del Senado; ex ministra de Comercio Internacional y Asuntos Europeos de Italia y comisionada europea para Ayuda Humanitaria

**Wesley Clark**

Ex comandante supremo aliado de la OTAN, Europa

**Sheila Coronel**

Toni Stabile, profesora de prácticas de periodismo investigativo; directora, Toni Stabile Center for Investigative Journalism, Columbia University, Estados Unidos.

**Jan Egeland**

Director, Norwegian Institute of International Affairs; ex Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia de las Naciones Unidas

**Uffe Ellemann-Jensen**

Ex ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca

**Gareth Evans**

Presidente emérito de Crisis Group; ex ministro de Relaciones Exteriores de Australia

**Mark Eyskens**

Ex primer ministro de Bélgica

**Joshua Fink**

Director ejecutivo & director de inversiones, ENSO Capital Management LLC

**Joschka Fischer**

Ex ministro de Relaciones Exteriores de Alemania

**Jean-Marie Guéhenno**

Profesor Arnold Saltzman de práctica profesional en relaciones internacionales y asuntos públicos, Columbia University; ex secretario general adjunto de operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas

**Carla Hills**

Ex secretaria de Vivienda de los Estados Unidos; ex representante de comercio de los Estados Unidos

**Lena Hjelm-Wallén**

Ex viceprimera ministra y ex ministra de Relaciones Exteriores de Suecia

**Swanee Hunt**

Ex embajadora de los Estados Unidos en Austria; presidenta del Institute for Inclusive Security; presidenta de Hunt Alternatives Fund

**Mo Ibrahim**

Fundador y presidente de Mo Ibrahim Foundation; fundador de Celtel International

**Igor Ivanov**

Ex ministro de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia

**Asma Jahangir**

Relatora especial de las Naciones Unidas sobre la libertad religiosa o de creencias; presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán

**Wim Kok**

Ex primer ministro de los Países Bajos

**Ricardo Lagos**

Ex presidente de Chile

**Joanne Leedom-Ackerman**

Ex secretaria internacional de International PEN; novelista y periodista, Estados Unidos

**Lord (Mark) Malloch-Brown**

Ex administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y secretario general adjunto de las Naciones Unidas

**Lalit Mansingh**

Ex secretario de Relaciones Exteriores de la India, embajador ante los Estados Unidos y alto comisionado ante el Reino Unido

**Jessica Tuchman Mathews**

Presidenta del Carnegie Endowment for International Peace

**Benjamin Mkapa**

Ex presidente de Tanzania

**Moisés Naím**

Asociado principal, International Economics Program, Carnegie Endowment for International Peace; ex redactor en jefe, *Foreign Policy*

**Ayo Obe**

Experto jurídico, Lagos, Nigeria

**Paul Reynolds**

Presidente & director ejecutivo, Canaccord Financial Inc.; vice chair, Global Head of Canaccord Genuity

**Güler Sabanci**

Presidente de Sabanci Holding, Turquía

**Javier Solana**

Ex alto representante del Consejo para la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, ex secretario general de la OTAN y ex ministro de Relaciones Exteriores de España

**Lawrence Summers**

Ex director del Consejo Económico Nacional de los Estados Unidos y ex secretario del Tesoro de EEUU; presidente emérito de la Universidad de Harvard

---

## CÍRCULO DEL PRESIDENTE

El Círculo del Presidente de Crisis Group es un distinguido grupo de grandes donantes particulares y corporativos que brindan apoyo esencial, tiempo y pericia a Crisis Group para el cumplimiento de su misión.

<b>Canaccord Financial Inc.</b>	<b>Steve Killelea</b>	<b>Harry Pokrant</b>
<b>Mala Gaonkar</b>	<b>George Landegger</b>	<b>Ian Telfer</b>
<b>Frank Holmes</b>	<b>Ford Nicholson &amp; Lisa Wolverton</b>	<b>Neil Woodyer</b>

---

## CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL

El Consejo Asesor Internacional de Crisis Group está integrado por importantes donantes particulares y corporativos que aportan regularmente a la organización sus consejos y experiencia.

<b>APCO Worldwide Inc.</b>	<b>Seth Ginns</b>	<b>Jean Manas &amp; Rebecca Haile</b>	<b>Shell</b>
<b>Ed Bachrach</b>	<b>Rita E. Hauser</b>	<b>McKinsey &amp; Company</b>	<b>Statoil ASA</b>
<b>Stanley Bergman &amp; Edward Bergman</b>	<b>Sir Joseph Hotung</b>	<b>Harriet Mouchly-Weiss</b>	<b>Belinda Stronach</b>
<b>Harry Bookey&amp; Pamela Bass-Bookey</b>	<b>Iara Lee &amp; George Gund III Foundation</b>	<b>Griff Norquist</b>	<b>Talisman Energy</b>
<b>Chevron</b>	<b>George Keller</b>	<b>Näringslivets Internationella Råd (NIR)</b>	<b>Tilleke &amp; Gibbins</b>
<b>Neil &amp; Sandra DeFeo Family Foundation</b>	<b>Ahmed Khan</b>	<b>– International Council of Swedish Industry</b>	<b>Kevin Torudag</b>
<b>Equinox Partners</b>	<b>Faisel Khan</b>	<b>Yves Oltramare</b>	<b>VIVATrust</b>
<b>Fares I. Fares</b>	<b>Zelmira Koch Polk</b>	<b>Anna Luisa Ponti &amp; Geoffrey Hoguet</b>	<b>Yapı Merkezi Construction and Industry Inc.</b>
<b>NeematFrem</b>	<b>Elliott Kulick</b>	<b>Michael Riordan</b>	
	<b>Liquidnet</b>		

---

## ASESORES SENIOR

Los asesores senior de Crisis Group son ex miembros del Consejo de Administración que mantienen una relación con Crisis Group y a quienes se recurre ocasionalmente en busca de apoyo y asesoría (en la medida en que sean consistentes con cualquier otro cargo que puedan estar desempeñando en ese momento).

<b>Martti Ahtisaari</b> Presidente emérito	<b>Victor Chu</b>	<b>Christine Ockrent</b>	<b>Simone Veil</b>
<b>George Mitchell</b> Presidente emérito	<b>Mong Joon Chung</b>	<b>Timothy Ong</b>	<b>Shirley Williams</b>
<b>HRH Prince Turki al-Faisal</b>	<b>Pat Cox</b>	<b>Olara Otunnu</b>	<b>Grigory Yavlinski</b>
<b>Hushang Ansary</b>	<b>Gianfranco Dell'Alba</b>	<b>Lord (Christopher) Patten</b>	<b>Uta Zapf</b>
<b>Óscar Arias</b>	<b>Jacques Delors</b>	<b>Shimon Peres</b>	<b>Ernesto Zedillo</b>
<b>Ersin Arioğlu</b>	<b>Alain Destexhe</b>	<b>Victor Pinchuk</b>	
<b>Richard Armitage</b>	<b>Mou-Shih Ding</b>	<b>Surin Pitsuwan</b>	
<b>Diego Arria</b>	<b>Gernot Erlor</b>	<b>Cyril Ramaphosa</b>	
<b>Zainab Bangura</b>	<b>Marika Fahlén</b>	<b>Fidel V. Ramos</b>	
<b>Shlomo Ben-Ami</b>	<b>Stanley Fischer</b>	<b>George Robertson</b>	
<b>Christoph Bertram</b>	<b>Malcolm Fraser</b>	<b>Michel Rocard</b>	
<b>Alan Blinks</b>	<b>I.K. Gujral</b>	<b>Volker Rühle</b>	
<b>Lakhdar Brahimi</b>	<b>Max Jakobson</b>	<b>Mohamed Sahnoun</b>	
<b>Zbigniew Brzezinski</b>	<b>James V. Kimsey</b>	<b>Salim A. Salim</b>	
<b>Kim Campbell</b>	<b>Aleksander Kwaśniewski</b>	<b>Douglas Schoen</b>	
<b>Jorge Castañeda</b>	<b>Todung Mulya Lubis</b>	<b>Christian Schwarz-Schilling</b>	
<b>Naresh Chandra</b>	<b>Allan J. MacEachen</b>	<b>Michael Sohlman</b>	
<b>Eugene Chien</b>	<b>Graça Machel</b>	<b>Thorvald Stoltenberg</b>	
<b>Joaquim Alberto Chissano</b>	<b>Barbara McDougall</b>	<b>William O. Taylor</b>	
	<b>Matthew McHugh</b>	<b>Leo Tindemans</b>	
	<b>Miklós Németh</b>	<b>Ed van Thijn</b>	

